

Capítulo III ANÁLISIS POR PAÍS²²

ARGENTINA

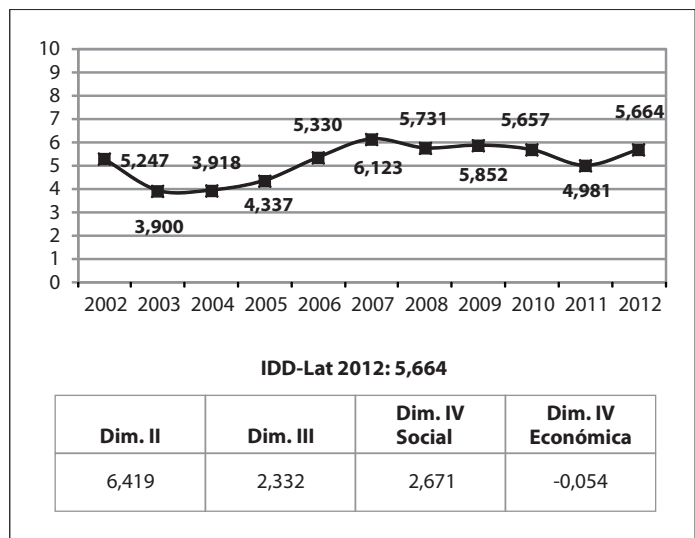
1. Desde el 2002 hasta la medición de este último año, Argentina ha tenido un desempeño inestable. En efecto, inicia la serie por encima del promedio de la región, para descender al año siguiente, obteniendo la peor puntuación del decenio, como producto de la grave crisis 2001-2002. A partir del 2004 comienza su curva ascendente, con un pequeño retroceso en el 2008, remonta en el 2009 y en las dos últimas mediciones anteriores a la actual muestra una tendencia a la baja, 3% y 12%, respectivamente, aunque en la actual medición logra ascender un 14%, recuperando lo perdido en el año 2011 (gráfico 3.1). Logra mantenerse por encima del promedio de la región, formando parte del grupo de países de *desarrollo democrático medio*. Aunque supera su promedio de todo el período 2002-2012 (5,159), no logra acercarse a su mejor nivel, el correspondiente a 2007, con 6,123 puntos.

Como se observa en el cuadro superior, la disparidad de comportamiento entre las dimensiones del desarrollo democrático del país es enorme. Al comportamiento moderadamente bueno en la dimensión II (*democracia de los ciudadanos*) y al excelente rendimiento en la subdimensión *social* se contraponen tanto el comportamiento en la dimensión III (*democracia de las*

²² Los gráficos que se presentan en este capítulo son de elaboración propia con base en los resultados obtenidos por los 18 países de América Latina analizados en el IDD-Lat y en las dimensiones que lo componen.

Evolución del IDD-Lat en Argentina 2002-2012

Gráfico 3.1

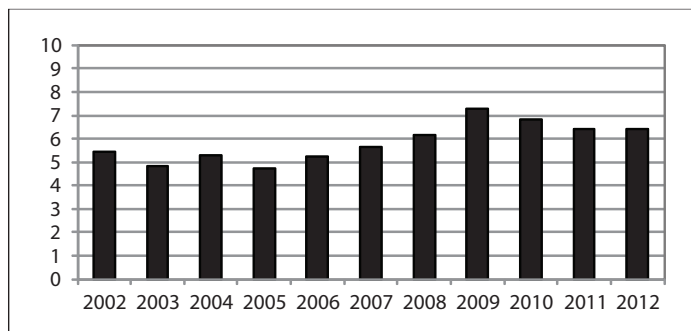


instituciones), uno de los peores de la región, como los valores alcanzados en la subdimensión *económica*, que se ubican por debajo del promedio regional.

No obstante esa disparidad, continúa en el sexto lugar del *ranking* de los 18 países latinoamericanos y se posiciona bastante lejos de los valores alcanzados por sus vecinos Uruguay y Chile. Respecto de la medición anterior, se observa que en los indicadores medidos este año baja levemente en la dimensión II (*derechos políticos y libertades civiles*) y logra una mejora en la dimensión III (*calidad institucional y eficiencia política*, donde el país se ubica en el penúltimo lugar en la región) y en la subdimensión *social*, la que mide la capacidad para generar políticas que aseguren bienestar, donde Argentina se ubica por primera vez en el primer lugar del *ranking*.

Evolución de la dimensión respeto de los derechos políticos y las libertades civiles

Gráfico 3.2



2. En relación con los indicadores que conforman la dimensión *derechos políticos y libertades civiles*, se observa que presenta valores levemente inferiores a los del 2011, lo que produce una baja de la puntuación en 0,1% en esta dimensión del desarrollo democrático. Argentina sigue ocupando el cuarto lugar del *ranking* y continúa en un nivel por encima del promedio regional (gráfico 3.2), aunque todavía está lejos del nivel logrado en el año 2007 cuando alcanzó el mejor valor de la serie.

Al igual que en muchos países de la región, el indicador que refleja el *condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad* expresa una de las mayores preocupaciones de la sociedad. En Argentina, el tema de la inseguridad preocupa y parece instalarse como uno de los puntos más importantes a resolver de su agenda política. Pero los números sobre la cantidad de homicidios reflejan un panorama relativamente mejor al de otros países de la región. El país tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del continente. Estadísticas oficiales muestran que, en 2008 y 2009, en Buenos Aires la tasa de homicidios fue inferior a 5 por cada 100.000 habitantes. Argentina tiene la mayor brecha en la región entre la percepción

de la población y la victimización. En 2010, un estudio del Barómetro de las Américas, dejó a Perú como el país donde las personas manifestaron sentirse más inseguras y a Argentina en segundo lugar. Pero el debate público pareciera más cercano al que se da en las principales ciudades de países como Venezuela, Colombia o El Salvador, donde las muertes violentas son hasta diez veces superiores.

De todos modos, esta especie de sobredimensionamiento del problema de la violencia y la criminalidad en Argentina podría ser útil para que el país no avance por el camino que ya han transitado o transitan otros países, donde la insensibilidad de la sociedad parece haber sido el mejor caldo de cultivo a mayores niveles de inseguridad y violencia. También es necesario señalar que las estadísticas de criminalidad que divulgan los gobiernos no necesariamente revelan la realidad. En ocasiones su fiabilidad se ve puesta en duda, tanto por el grado de corrupción que pueda haber en la compilación de los datos como por el bajo grado de denuncia en los países de la región. Todo ello hace muy difícil determinar con exactitud la magnitud del problema.

La peor puntuación recibida en los indicadores de *voto de adhesión política* y de *género en el gobierno* determina que Argentina no haya, prácticamente, modificado su valor con respecto al 2011. Durante ese año se realizaron elecciones generales para elegir presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales y autoridades provinciales y municipales. Sobre un padrón definitivo de 28.915.030 electores se registraron 22.955.070 votos.

La presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner, quien logró su reelección, se vio doblemente ratificada en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias celebradas el 14 de agosto de 2011 en todo el país,

y en las posteriores elecciones presidenciales del 23 de octubre de 2011, en las que obtuvo el 54% de los votos, casi 12 millones de voluntades, con ausentismo bajo, de solo 21%, registrando votos por un 79%, y con escasa cantidad de votos en blanco, nulos o recurridos, de 4%. El Frente para la Victoria (FpV), plataforma electoral de la presidente, también triunfó en las elecciones legislativas celebradas en forma simultánea (renovación de la mitad de los miembros de la Cámara de Diputados y un tercio de los miembros de la Cámara de Senadores). El FpV y sus aliados cuentan nuevamente con mayoría en ambas Cámaras. Las fuerzas afines al Gobierno nacional también se impusieron en la mayoría de las provincias, en las que, salvo algunas pocas excepciones, se eligieron gobernadores además de renovarse las legislaturas provinciales. Solo en una provincia no ganó el oficialismo (San Luis), y en el reparto de las gobernaciones solo resignó la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Corrientes y San Luis. El porcentaje obtenido es el mayor en la saga electoral desde 1983.

El triunfo de Cristina Fernández de Kirchner fue calificado con acierto como un verdadero *tsunami político*. La presidente, fortalecida por dos plebiscitos, cuenta ahora con un peso político muy superior al de todos sus antecesores desde el retorno de la democracia. Ni siquiera su esposo, Néstor Kirchner, quien ocupó la presidencia argentina entre 2003 y 2007 y que hasta su muerte en octubre de 2010 era considerado el verdadero conductor de la política argentina, pudo apoyarse en ningún momento en una base de poder y legitimación tan amplia. Los analistas también destacaron que nunca antes en Argentina un proyecto de poder como el que representa

el kirchnerismo pudo mantenerse por tres mandatos consecutivos (Néstor Kirchner 2003-2007; Cristina Fernández 2007-2011 y 2011-2015).

En los informes del IDD-Lat destacamos los esfuerzos que han tenido lugar en América Latina para promover la participación política de las mujeres en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Así pusimos de relieve oportunamente los casos como el de Chile que, durante la presidencia de Michelle Bachelet, impulsó una política de paridad en su gabinete, en el que aproximadamente 50% de los cargos en los ministerios, subsecretarías e intendencias eran ocupados por mujeres; y el de Ecuador, donde el presidente Rafael Correa incorporó el principio de equidad de género en la designación de su gabinete, el cual llegó a incluir dieciocho mujeres ministras. Este aumento de representación femenina no ha sido uniforme en la región.

Perú, Bolivia y Ecuador, por ejemplo, han designado más de veinte mujeres en puestos ministeriales en los últimos ocho años, mientras que en el mismo período países con grandes poblaciones como México, Argentina y Brasil no llegaron a dieciséis cargos ejecutivos de primer nivel para las mujeres. Lo llamativo en el caso argentino es la baja cantidad de ministerios en manos de mujeres, con alguien del mismo género a cargo de la Presidencia. A pesar de que la Argentina se ubica en términos comparativos internacionales en un lugar destacado por su representación femenina en los cuerpos legislativos, no sucede lo mismo en el caso del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial de la nación.

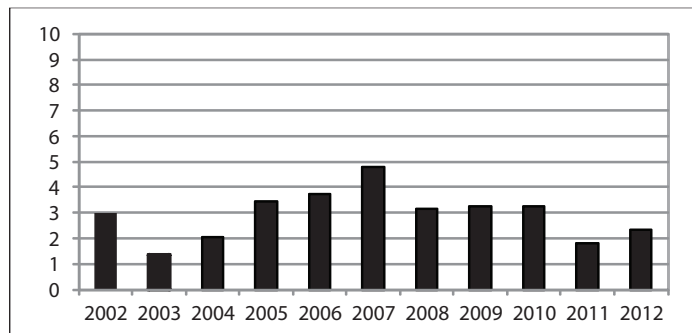
En el Poder Judicial, pese a la incorporación por primera vez de dos mujeres en la Suprema Corte de Justicia, la presencia

Debilidades

- Género en el Gobierno

Evolución de la calidad institucional y eficiencia política

Gráfico 3.3



femenina en los cuadros de conducción de la justicia es baja, y persisten la hegemonía masculina y los criterios sexistas.

3. En la dimensión *calidad institucional y eficiencia política*, Argentina no logra salir de los últimos lugares del *ranking* regional, pese a que el puntaje obtenido es mayor al del año anterior en casi un 30% (gráfico 3.3). El crecimiento obedece a que dos indicadores que componen esta dimensión han fortalecido su puntuación y ellos son *percepción de la corrupción* y *accountability*. El resto de los indicadores se han mantenido estables y bajos, por lo que Argentina presenta nuevamente valores que muestran pobres resultados. Un claro ejemplo es el indicador que muestra la *fragmentación* en el Poder Legislativo.

En esta dimensión, Argentina continúa ubicada bastante por debajo del promedio regional, y se encuentra entre los países menos desarrollados. A pesar del avance mostrado, y ante el avance de otros países, desciende un escalón más en el *ranking* regional, ocupando el 17.º lugar entre los 18 países de la medición.

La Argentina se ubica entre los diez países más corruptos de América Latina, de acuerdo con el informe de Transparencia Internacional 2011. Argentina había tenido una mejoría en ese índice entre el 2003 y el

2004, después de que el entonces presidente Néstor Kirchner había renovado la Corte Suprema de Justicia a través de un método transparente y había firmado el decreto de acceso a la información pública 1172/03. Pero en los últimos años se empezó a retroceder y a no tomar medidas públicas de lucha contra la corrupción. Los organismos de control, como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación, cada vez controlan menos o previenen menos. Hay discrecionalidad en lo que se llama la administración de los recursos estratégicos del Estado como la publicidad oficial y planes sociales.

Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández siempre se jactaron de ser *tolerantes* con la protesta social y que no iban a reprimir los reclamos en la vía pública, para alejar los fantasmas de la dictadura y de los sangrientos incidentes de diciembre de 2001. Sin embargo, desde junio de 2010 murieron en la Argentina catorce personas como consecuencia del desproporcionado accionar policial en diferentes provincias. Este triste conteo comenzó el 18 de junio de 2010, cuando la policía de Bariloche mató a balazos a un hombre de 29 años y a otro de 17 años por error. El 3 de febrero del 2011, un confuso episodio luego del descarrilamiento de un tren en José León Suárez terminó con dos muertes. El violento desalojo en Ledesma, Jujuy, que terminó con tres manifestantes y un efectivo muertos llevó preocupación a la Casa Rosada, que a finales del 2010 tuvo que emprender drásticos cambios en la gestión por el crimen de Mariano Ferreyra y por los graves disturbios que desembocó en la masiva toma del Parque Indoamericano en Villa Soldati (tres muertos y varios heridos). En noviembre de 2011 otra administración quedó en jaque

Debilidades

- Corrupción
- Participación de los partidos políticos en el Legislativo
- *Accountability* social
- Desestabilización

por la represión: fue la de Gildo Insfrán, en Formosa, tras las duras agresiones a la comunidad qom (toba) en la Colonia Primavera. Un indígena y un policía murieron en los choques por el reclamo de los aborígenes por tierras ancestrales. Al final, el Gobierno tuvo que recibir a los qom en la Rosada.

El número de cortes en la vía pública en 2011 aumentó un 29% con relación a 2010. La Capital Federal ocupa el primer puesto distrital con 581 bloqueos en el año; le siguen la provincia de Buenos Aires, con 315, y Santa Fe, con 198. Las causas: las elecciones de 2011 y, sobre todo, la desaceleración de la economía y la alta inflación. El sur del país tampoco estuvo ajeno a los bloqueos. La provincia de Santa Cruz presentó un panorama complicado, con un incremento del 33%. Lejos de estar en una paz social, se produjeron 181 piquetes frente a los 136 cortes de ruta que registró Diagnóstico Político en 2010. Santa Cruz tuvo un conflicto sindical en 2011 que generó un bloqueo de 26 días a plantas petroleras e impactó de forma drástica en las cuentas fiscales de la provincia.

Ese clima de violencia social y política es uno de los mayores interrogantes para los analistas en relación con el período que se inicia. Las elecciones de 2011 marcaron un contundente triunfo electoral Cristina Fernández de Kirchner, en contra de la opinión del grupo de medios más importante del país, y con prescindencia de los tradicionales *caciques territoriales* peronistas, y de que la presidente utilizara un discurso agresivo en contra de quienes no la apoyaban, y aun desoyera a la estructura política de su partido. Entre los dirigentes de su partido causó malestar el hecho de que la presidente designara los candidatos por el FpV para las elecciones generales legislativas prácticamente sin consultarlos, una decisión que

ciertamente no la perjudicó en las urnas. Por eso, desde el entorno de la presidente se escuchó decir que “los votos son de Cristina”.

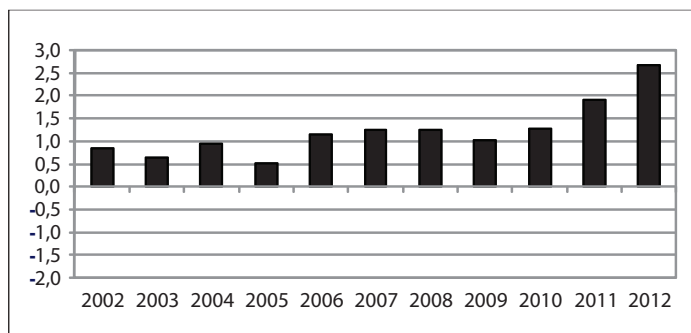
En su momento, Néstor Kirchner buscó consensuar con el *establishment* peronista. Cristina Kirchner ya no parece necesitar el apoyo de este, al menos por el momento. En sus discursos se dirige directamente al pueblo y más que nunca construye su poder sobre la base del respaldo popular. Quizás el desplazamiento de las estructuras intermedias marque una transición entre el *kirchnerismo* del primero y segundo mandato hacia el *cristinismo* del tercer gobierno. Pero al mismo tiempo muestra las dificultades para consolidar estructuras políticas e institucionales en un país con una cultura política que se muestra poco apegada a las formas y a los controles del juego institucional de la democracia, y muy proclive al seguimiento de personas.

Pero ese desapego institucional de quienes ejercen el poder tiene su correlato en los partidos de la oposición. Previamente a las elecciones de octubre se pudo observar una descarnada variedad de veleidades y personalismos en todo el arco opositor, donde no fue posible establecer acuerdos programáticos ni de candidaturas y, en algunos casos, hubo falsos renunciamientos ante la evidencia de las encuestas que anticipaban el triunfo de la presidente.

Ante el escaso control que ejercen las instituciones, debe destacarse que también el poder de control de los medios ha quedado dañado. El gobierno salió claramente fortalecido de su *lucha cultural* contra los grupos de medios. Las advertencias internacionales sobre el respeto de la libertad de prensa prácticamente no han generado reacciones en la opinión pública argentina. Desde la perspectiva del gobierno, esos éxitos son

Evolución de la subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren bienestar

Gráfico 3.4



Fortalezas

- Mortalidad infantil
- Gasto en salud
- Matriculación secundaria
- Gasto en educación

un estímulo para llevar adelante el enfrentamiento hasta el final.

4. En la dimensión *ejercicio de poder efectivo para gobernar*, subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar*, la Argentina presenta una importante curva de crecimiento desde el 2010 (gráfico 3.4). Este año ha mejorado con respecto al anterior logrando su mejor puntuación histórica, como consecuencia del crecimiento de casi todos los indicadores que componen la subdimensión, salvo el que mide el desempleo urbano. Su buen comportamiento en el conjunto de indicadores sociales produjo que ocupe ahora un destacado primer lugar en la región, seguido por Uruguay.

Entre 2009, año en que se implementó la asignación universal por hijo (AUH), y 2010 hubo un aumento en el número de matriculados en las escuelas secundarias de un 2,6%, de acuerdo con los anuarios estadísticos que elabora la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DINIECE). En 2009 había 4.106.048 alumnos de secundaria en todo el país. Un año después eran 4.213.136.

Si se considera solo a los alumnos de establecimientos públicos, la misma fuente permite hablar de un aumento del 3,5% entre

2009 y 2010. El informe del Ministerio de Educación señala: "Entre las políticas públicas que incidieron en tales objetivos [ampliación y retención de la matrícula del secundario] podemos mencionar [...] la asignación universal por hijo". Los efectos de las políticas implementadas, que además de la AUH incluyen medidas como la Ley de Educación Nacional o el Programa Conectar Igualdad, "pueden percibirse al analizar la variación 2009-2010 según nivel educativo", afirma el estudio. Las prioridades del gasto social se centran en los programas que implican transferencia directa de ingresos, como son los casos de las jubilaciones y asignaciones familiares, o de los programas de protección social, como lo son las pensiones no contributivas y la asignación universal por hijo. Así también, se priorizan el pago de salarios docentes y los programas de agua potable y alcantarillado. Por el contrario, los programas destinados a la infraestructura básica, ejecutados por el Ministerio de Planificación, referidos a vivienda y educación, no presentan casi variación o inclusive son reducidos en sus recursos, como en los casos de los programas de construcción de viviendas a través de cooperativas o las transferencias a provincias y municipios para infraestructura social.

El valor obtenido en la ponderación del indicador de desempleo no es producto de un peor comportamiento de la variable, sino resultante de mejores resultados en otros países de la región, que hace que el promedio del indicador sea más alto.

El Gobierno ha anunciado que trabaja para reducir la tasa de mortalidad infantil al 9,9‰ para el 2011. En 2007 esta tasa se ubicaba en el 13,3‰. Las estadísticas que permitirán evaluar si tal objetivo ha sido alcanzado, no se encuentran todavía disponibles.

La asignación universal por hijo y nacimiento, el Plan Nacer y Remediar Redes han sido inversiones que ayudaron a perfeccionar la llegada al acceso universal en la salud.

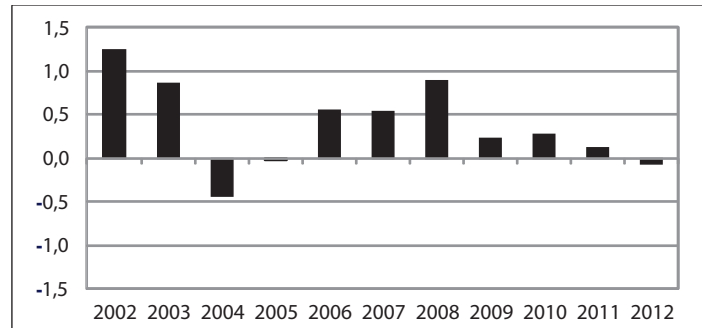
La Argentina resultó el país de América Latina que mostró la mayor reducción de la pobreza desde el 2002 hasta el 2010, impulsado fundamentalmente por el fuerte crecimiento de la economía, según un estudio elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En el informe *Panorama social de América Latina 2011* este organismo destaca que Argentina disminuyó los niveles de pobreza en 36 puntos porcentuales en el período considerado, lo que la convirtió en líder regional en esta cuestión, seguida por Venezuela con una merma de más de 26 puntos y por Perú con una reducción de 23,8 puntos porcentuales. El efecto crecimiento contribuyó a la reducción de la pobreza y "fue particularmente importante en Argentina", indica el citado informe.

5. En la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica*, el valor obtenido ha sido más bajo (gráfico 3.5), por el mal comportamiento de casi todos los indicadores que la componen, salvo el que mide el endeudamiento. Del noveno lugar que ocupaba Argentina en el *ranking* regional de 2011, este año cae al duodécimo.

Los números de la economía argentina se pueden analizar de dos maneras: con los difundidos por el INDEC (el organismo oficial de estadísticas y censos) y con los relevados por las consultoras privadas, abiertamente contrapuestos. Para las estadísticas públicas, la inflación estuvo apenas por encima del 9% y la economía creció más que esa cifra, pero para las consultoras los precios se dispararon más del 23% y la actividad aumentó cerca del 7%. Según el organismo público, la

Evolución de la subdimensión capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica

Gráfico 3.5



industria cerró el 2011 con un alza del 7,5%, mientras que para los privados oscilará entre 4,2 y 5,5%, marcando una clara desaceleración y una notoria concentración. Con todo, más allá de las diferencias, lo cierto es que el PIB cerró nuevamente con un crecimiento destacado.

Uno de los pilares del modelo, la balanza comercial, cerró el año con un saldo positivo de casi 10.500 millones de dólares, inferior a lo logrado en 2010. Parte de la caída se explica en que el precio de la soja, el gran generador de recursos externos, cayó en 2011 un 15% y la cosecha gruesa de 50 millones de toneladas que a principios de año significó 25.000 millones de dólares, a fines de 2011 disminuyó a 22.500 millones.

El año se dividió en dos: uno de enero a septiembre, con los problemas de siempre, suba de precios, faltante de combustibles, desaceleración del crecimiento; y otro a partir de octubre, con inestabilidad cambiaria y el anuncio oficial de eliminar gradualmente los subsidios al agua, gas y electricidad. Llamativamente, el proceso electoral no tuvo mayor incidencia en las variables económicas, aunque disparó un fuerte aumento en el gasto público que, como efecto dominó, terminó condicionando el resultado de las cuentas públicas.

Fortalezas

- PIB per cápita
- Endeudamiento

Debilidades

- Brecha de ingreso
- Inversión

El incremento en el gasto llevó a la presidente a plantear, ante industriales, lo que ella misma denominó como el comienzo de la etapa de *sintonía fina*, un eufemismo para evitar la palabra ajuste; y así anunció los recortes en los subsidios que en total superarían los 70.000 millones de pesos anuales.

En 2011 y pese a haber sido un año electoral, la incertidumbre principal llegaba desde el exterior: un temblor financiero puso en jaque a Europa y transformó la geografía política y económica del viejo continente.

Pese a todas las evidencias, el gobierno sigue evitando hablar públicamente de inflación. Asimismo, el gobierno ejerce una considerable presión sobre las doce consultoras privadas que calculan la inflación sobre la base de datos propios y llegó a sancionarlas con multas de unos 120.000 dólares. También se les ha iniciado juicio a los directores de estos institutos. Cuatro consultoras han dejado de medir la inflación como consecuencia de estos hechos. Ocho continúan haciéndolo, pero ya no difunden sus cifras, como antes, a través de la prensa. Por el contrario es

la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, presidida por la oposición, la que da a conocer el valor promedio calculado por las ocho consultoras.

El clima de desconfianza se verifica en que en 2011 se estima una fuga de 17.000 millones de dólares. Más recientemente la compra de dólares llegó a 70 millones diarios. En Argentina, un país acostumbrado a las crisis, la moneda norteamericana ha servido tradicionalmente de refugio en épocas de inestabilidad. Dado que las reservas de Banco Central están disminuyendo y ya no resulta tan fácil la venta de dólares para sostener la cotización del peso, el gobierno ha colocado todas las operaciones cambiarias bajo la severa supervisión de la autoridad impositiva AFIP. No se conoce la duración de este tipo de medidas, pero todo hace prever que si se mantiene la situación de escasez de divisas, se extenderán y profundizarán los controles.

Hacia el final del año se observaba una caída en las inversiones que solo se destinaban a mantener la producción y en muy escasa medida para fines de ampliación o modernización.

BOLIVIA

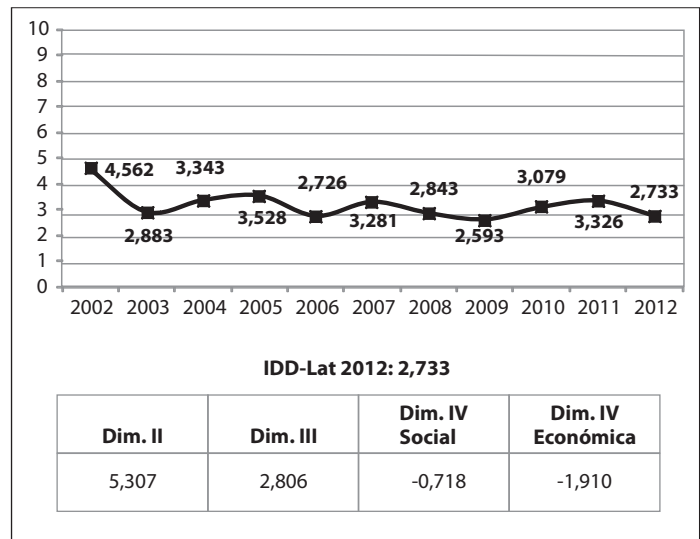
1. Bolivia ha disminuido su puntuación en el índice de desarrollo democrático casi un 18% respecto al año anterior (gráfico 3.6). Por ello ha descendido en el *ranking* regional, en esta oportunidad cinco posiciones, pasando al 17.º lugar. Este movimiento se produce por un retroceso en todas las dimensiones, salvo en aquella que mide los derechos políticos y las libertades civiles de los ciudadanos, que avanza apenas un 3%.

El presidente Evo Morales cumple su sexto año de gobierno, en el marco de su segundo mandato tras su reelección en 2009. El cambio de la Constitución Política del Estado, convalidada mediante un referéndum, y el retorno del rol activo del Estado en la actividad económica nacional fueron signos distintivos de esta etapa. Pero el cambio en la estructura socioeconómica que trajo aparejado el gobierno de Morales, generó también otras tensiones. En una economía predominantemente agrícola y oriental y que respondía al latente conflicto entre el oriente llano y productor agrícola y el occidente andino, tomó nuevamente significación el potencial energético del país, por políticas propias del Estado boliviano, pero también por la incorporación de esas capacidades a una matriz energética regional integrada junto con Brasil y Argentina. Ese cambio impactó fuertemente en los conflictos económicos y sociales al interior del país. En el IDD-Lat 2012 Bolivia alcanza un valor de 2,733 puntos y sigue muy por debajo del promedio regional; por lo tanto, continúa en la franja de países con bajo desarrollo democrático.

Bolivia no alcanza en la edición 2012 su propio promedio de medición del índice en el período 2002-2012 (3,158 puntos), y se

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Bolivia

Gráfico 3.6

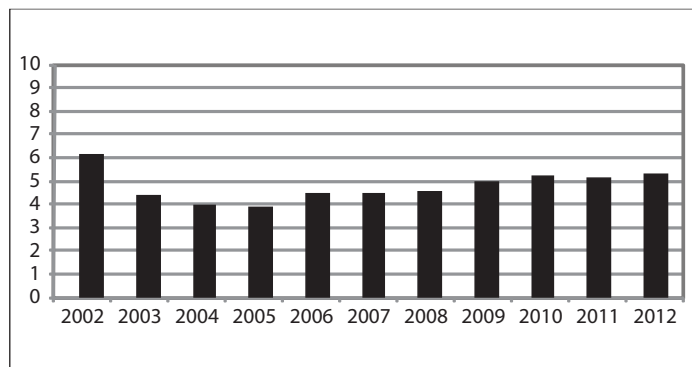


encuentra lejos de su mejor valor en la serie, alcanzado en el año 2002 con 4,150 puntos.

2. Con respecto a la dimensión *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, el gráfico 3.7 pone en evidencia que su puntuación es levemente superior, en un 3%, en relación con el año 2011, retomando el ritmo de recuperación que había practicado hasta el 2010. Este comportamiento de leve mejora se sustenta en el crecimiento del indicador *condicionamiento de las libertades por inseguridad*, que igualmente no está entre los mejores de la región, y en el mantenimiento del valor en el resto de los indicadores, amesetados salvo el de *género*, que presenta una caída. Todo ello lleva a una puntuación similar a la del último año, por lo que Bolivia permanece en el mismo lugar del *ranking* ocupando la séptima posición, pero por primera vez desde 2003 logra superar el promedio regional de la *democracia de los ciudadanos*. No obstante, tampoco en esta dimensión logra alcanzar su mejor valor, de 6,216 puntos, logrado en 2002.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.7



Debilidades

- Puntaje en el índice de libertades civiles
- Puntaje en el índice de derechos políticos
- Condicionamiento de libertades por inseguridad

Morales reivindicó su política indígena y nacionalista, aunque con su credibilidad dañada, lo cual marca un punto de inflexión en su administración desde el 2006. En su segundo periodo constitucional iniciado en 2010 ha mantenido un discurso antiestadounidense y descolonizador, y su acercamiento comercial, económico y político con países como Irán, Cuba y Venezuela, tres enconados rivales de Washington.

La creciente inseguridad en varias regiones del país hizo crecer la impresión de que la policía no puede con la seguridad ciudadana. El Gobierno decidió entonces que los militares salieran a patrullar las calles. El ministro de Defensa confirmó que 500 militares estaban a disposición para colaborar en el tema de seguridad ciudadana en una primera instancia en el departamento de Santa Cruz. Las duras condiciones penitenciarias, la corrupción oficial, la falta de transparencia en el gobierno, la violencia y la discriminación contra la mujer y la trata de personas constituyen escollos para el avance de la democracia, que no son imputables solamente al gobierno del presidente Morales, pero su gestión tampoco ha logrado avances significativos en estos campos.

Incluso en la participación política de las mujeres en Bolivia, que había presentado

mejoras importantes, en el marco de la construcción de la nueva Constitución, ha sufrido un retroceso. Después de aprobada la nueva Constitución Política, en febrero de 2009, la participación política de las mujeres en el Legislativo pasó de un 17%, que había sido el máximo techo hasta ese momento, a un 25% en el caso de la Cámara de Diputados y a un 50% en el Senado. En el aparato electoral, las bolivianas representan el 90% de los cargos. En tanto que están cerca de lograr la paridad en el órgano judicial, con 43% de las magistradas electas.

Esa evolución positiva se había extendido al número de mujeres a cargo de ministerios, partiendo de cantidades minoritarias desde 1993 a 2009 —en total 15 de 111 posiciones— hasta llegar a la paridad en el 2010, lo que representó, además de un salto cuantitativo considerable, un salto político relevante hacia la equidad, al haber posibilitado que las importantes atribuciones ministeriales pudieran ser ejercidas por mujeres y hombres de manera proporcional y paritaria. Sin embargo, en el cambio del gabinete ministerial del año 2011 se produjo un desequilibrio en esta paridad, que se refleja en la nueva proporción de mujeres y hombres a cargo de ministerios, ahora de solo 35% para las mujeres.

En el Poder Judicial, hasta diciembre de 2010 el porcentaje de mujeres que conformaban el Tribunal Supremo de Justicia era del 17%. Con las elecciones judiciales del 16 de octubre del año 2011 se presentaron 115 candidatas(os) y, tras una etapa de preselección en la Asamblea Legislativa, fueron elegidas por sufragio tres mujeres para ser titulares del órgano y seis para ocupar las suplencias, lo cual significa el 33% y el 67% de los cargos, respectivamente.

En materia de derechos y libertades Evo Morales tuvo un revés significativo con lo

sucedido con la población indígena que se manifestó en contra de la proyectada construcción de una carretera en el Parque Nacional TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure), en el que diversos pueblos indígenas viven sobre todo de la pesca y la caza. Este conflicto desató una crisis de gran magnitud al poner en contradicción los intereses que el gobierno del presidente Morales decía defender.

Los sectores cocaleros son los que ejercen mayor presión sobre el gobierno para concretar la construcción de esa carretera. Los suelos en el cercano departamento de Cochabamba están agotados por el excesivo cultivo de coca y el TIPNIS ofrece mejores condiciones para su cultivo. El parque nacional alberga una enorme biodiversidad y las organizaciones ambientalistas temen la destrucción de los ecosistemas como consecuencia de la construcción de la ruta. Consideran que la carretera puede ser usada por leñadores y cocaleros para penetrar hasta las profundidades del TIPNIS y desarrollar allí sus actividades ilegales. Además, la ruta implicaría una conexión directa desde Cochabamba, donde se produce la cocaína, a Brasil y, por lo tanto, parece ser atractiva para el narcotráfico.

El mayor problema en la discusión en torno a la proyectada construcción de la ruta es, sin embargo, la situación de los pueblos indígenas que habitan en el TIPNIS. El MAS asumió el gobierno en 2005 con la promesa y el objetivo de aplicar sobre todo una política de protección de la población indígena y sus derechos. Bolivia ya sancionó en 1991 la Convención 169 de la OIT que establece consultas con la población indígena cada vez que proyectos de ley o actividades administrativas la afecten en forma directa. Este derecho a consulta también quedó consagrado

en la Constitución de 2009 y los territorios indígenas están dotados de derechos especiales por la Carta Magna. Pero en el caso del TIPNIS no hubo consultas, pese a que la traza de la ruta atraviesa en forma directa el territorio indígena.

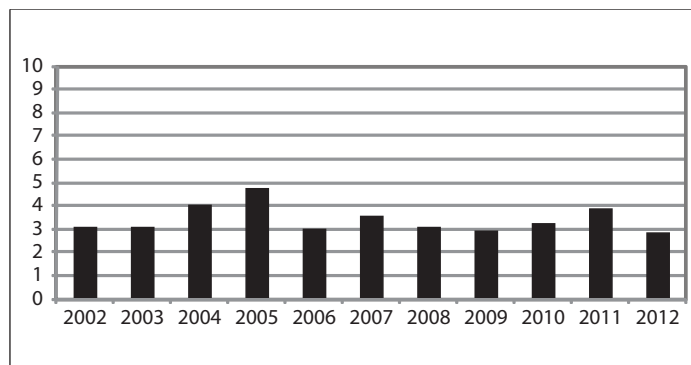
El 25 de septiembre la policía reprimió violentamente la marcha de protesta ante el estupor de toda la población. La represión policial dejó en claro que el Gobierno privilegiaba los intereses de los cocaleros por encima de los intereses de la población indígena y que tampoco respetaba la propia Constitución. En todas las elecciones celebradas desde 2005, la población indígena había constituido siempre la base electoral más leal del oficialista MAS; por eso, muchos de esos sectores empezaron a preguntarse si la caracterización de Evo Morales como presidente indígena era una realidad o una farsa que solo tenía el propósito de captar votos.

Cuando los indígenas llegaron a La Paz el 19 de octubre, tras una marcha por buena parte del país, cerca de 200.000 ciudadanos se sumaron a la protesta pacífica. De este modo, el ingreso a la ciudad se constituyó en una de las manifestaciones públicas más importantes de la democracia boliviana. La población reclamó la interrupción de la construcción de la carretera en el TIPNIS y el respeto del gobierno por la Constitución. Luego de varios días de negociaciones, el presidente Morales prometió buscar una ruta alternativa para la carretera de manera de no afectar el TIPNIS.

El conflicto no fue gratuito para el gobierno: la Conferencia Episcopal de Bolivia confirmó la muerte de un niño y la desaparición de personas durante la represión policial. Esta culminó con la renuncia de la ministra de Defensa por no compartir los métodos empleados. Hubo numerosas manifestaciones,

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.8



Debilidades

- Indicador de percepción de la corrupción
- *Accountability*
- Indicador de desestabilización

bloqueos de vías, huelgas de hambre y otras protestas en todo el país. Posteriormente renunció también a su cargo el ministro de Gobierno.

En la dimensión *calidad institucional y eficiencia política*, Bolivia quiebra en 2012 su curva ascendente del período 2009-2011, con el peor valor de toda la serie de medición del IDD-Lat (gráfico 3.8). Ha descendido cuatro lugares en el *ranking*, pasando del 11.º al 15.º lugar, con una caída en su puntuación de casi un 30%.

Algunos indicadores han mejorado levemente, como el indicador de *percepción de la corrupción y la participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo*. Otros, en cambio, han retrocedido fuertemente, como son los casos de *accountability* y el indicador que mide la *desestabilización*.

Durante el año 2011, la administración del presidente Evo Morales sufrió un golpe humillante: René Sanabria, excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y miembro del Centro de Inteligencia y Generación de Información (CIGEIN) del Ministerio de Gobierno durante los años 2007 a 2009, fue apresado en Panamá en momentos en que intentaba vender más de cien kilogramos de cocaína. En un primer momento, Morales culpó del escándalo a Estados Unidos, insinuando que a Sanabria se

le había tendido una trampa con el fin de desprestigiar a su gobierno. Pero luego tuvo que admitir no solo que Sanabria era culpable, sino también que el narcotráfico podría haber infiltrado incluso otros sectores del Estado. Sanabria fue condenado a 14 años de cárcel.

En abril se generó tensión por el rechazo del presidente a la propuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) de un incremento salarial de un 15%. La propuesta de los sindicatos consistía en utilizar las reservas internacionales para estos reajustes, pero Morales pidió propuestas diferentes de financiación ya que afirmó que las reservas son "el ahorro de todos". La convulsión de las protestas gremiales amainó tras más de dos semanas de tomas de carreteras y protestas en espacios públicos cuando el líder de la COB, el minero Pedro Montes, anunció la aceptación de un nuevo acuerdo mediante un documento elaborado entre el Gobierno y un grupo de sindicalistas reunidos por 36 horas continuas. La COB también aceptó el compromiso del Gobierno de buscar más fondos con la posibilidad de aumentar el valor de los salarios un punto más, hasta el 12%, también solo para maestros y trabajadores de salud, pero que podría concretarse recién en agosto.

Como ya se mencionara, el peor momento político para Evo se produjo como consecuencia de la iniciativa de construir una carretera que cruzaría el Territorio Indígena Parque Nacional Isioboro Secure (TIPNIS). El Gobierno intentó desalentar la marcha de los indígenas, hubo presiones directas de cocaleros oficialistas, hasta que finalmente se produjo una represión que tuvo hondos repercusiones internacionales.

El 10 de julio de 2011, el Congreso, con amplia mayoría oficialista, aprobó la Ley de Telecomunicaciones, Tecnologías de

Información y Comunicación. La nueva legislación otorga el 33 % de las licencias al Estado, el 17 % a organizaciones comunitarias, un 17 % a organizaciones indígenas y el 33 % restante al sector privado. Ello significa que Morales y sus aliados tendrán el control del 67 % de las licencias, mientras que entidades privadas, independientes del gobierno, solo el 33 %. La nueva ley también autoriza escuchas telefónicas en casos de crisis nacional. En respuesta a esta ley, numerosos periodistas han expresado gran preocupación por el avance del Gobierno en el control de los medios de comunicación.

En una nueva innovación institucional, de las numerosas realizadas por Morales para la “refundación del Estado Plurinacional de Bolivia”, en octubre se realizaron las primeras elecciones para los miembros del Poder Judicial, Los bolivianos eligieron a 28 miembros de los cuatro tribunales nacionales. El Gobierno hacía un llamado a votar con validez mientras que los opositores pedían el voto nulo. Anteriormente, esas designaciones eran función del Congreso. En esos comicios, los votos nulos y en blanco, promovidos por la oposición, alcanzaron el 60%; en tanto que los votos válidos, defendidos por Morales, un 40 %. Las protestas de la población se debían principalmente al proceso de preselección muy partidario y poco transparente en la Asamblea Legislativa y al hecho de que la Ley del Régimen Electoral prohibía entrevistas con los candidatos o informaciones sobre estos en los medios de comunicación. La ley fue revisada y los artículos en cuestión cambiados, pero mantuvieron fuertes limitaciones para los medios. Pese a las protestas, se convalidó la elección y según analistas y líderes de oposición, las elecciones de autoridades judiciales —las

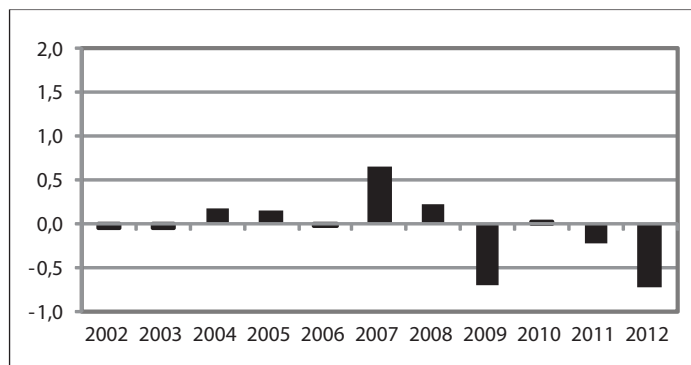
primeras de su naturaleza en el mundo— aumentaron las posibilidades de reelección de Morales en el 2015, ya que los máximos tribunales quedaron en manos de sus partidarios.

La oposición sigue careciendo de una clara organización a nivel nacional y no puede capitalizar la pérdida de popularidad del gobierno. En el nivel regional, aunque la oposición está mejor posicionada, debe luchar con la persecución jurídica. Muchos líderes políticos de la oposición enfrentan juicios. A pesar de que la Constitución boliviana establece que los políticos electos solo pueden ser relevados de su cargo una vez concluido el juicio en su contra y expresada una condena, la ley de autonomías de 2010 prevé la posibilidad de una suspensión transitoria de políticos en la eventualidad de una acusación oficial por la fiscalía. Esta figura se usó en el año y medio desde su sanción para relevar de sus cargos a varios alcaldes y a un gobernador opositores. Desde entonces, muchos opositores prefirieron retirarse de la política activa o decidieron exiliarse. En el marco de la elección de los jueces, sin embargo, se puso de manifiesto que existen cuestiones lo suficientemente importantes en sí mismas como para unir, al menos temporalmente, a la atomizada oposición detrás de un objetivo común.

4. En la dimensión IV, *resultados de la gestión democrática*, Bolivia ha descendido fuertemente en el subíndice *social*, alcanzando el puesto 11.º en el *ranking*, bajando tres lugares, nuevamente por debajo del promedio regional (gráfico 3.9). Ello se debe a que los indicadores relacionados con el *gasto en salud* y el *desempleo* han mostrado un importante retroceso. Dos indicadores han mejorado levemente: los que miden la eficiencia en salud y el esfuerzo en la educación; ellos son: *mortalidad infantil* y *gasto en educación*.

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.9



Debilidades

- Mortalidad infantil
- Gasto en salud
- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza

A pesar de los avances en la reducción de la pobreza, en Bolivia persiste la desigualdad entre los sectores de su población, no solamente en términos de ingreso, sino en la distribución de la tierra, el acceso a la educación, o desigualdad en términos de los salarios y la redistribución de estos. La afirmación surge como comentario al informe *Panorama social de América Latina 2011*, presentado por la CEPAL, donde se indicaba que Bolivia había descendido su nivel de pobreza entre 2002 y 2009 en 8,4%, mientras que el índice de indigencia había bajado en 5,9%. Los datos del informe de la CEPAL señalaban que para el 2002 los índices de pobreza eran de 62,4% y que para alrededor de 2009 ese indicador había bajado al 54%, con una mejora del orden del 8,4%.

Según la CEPAL, la política macroeconómica en Bolivia había sido muy acertada, al destacar que era uno de los pocos países de América que tenía superávit económico, en una muestra del espacio que tiene para desarrollar las políticas económicas que está planteando. Considera que esos logros se obtuvieron gracias a políticas sociales activas y por las vías del aumento del salario mínimo y de la creación de empleo.

Sin embargo, podemos destacar que el porcentaje de reducción de la pobreza ha

sido lento e insuficiente para el caso boliviano y, en segundo lugar, debemos tomar en cuenta el elevado nivel de desigualdad que existe aún en este país. De acuerdo con el INE, el coeficiente de desigualdad en Bolivia es de alrededor de 0,53 y antes fue de 0,58, un valor considerando alto para los estándares internacionales.

Aunque se ha incrementado en los últimos seis años, el gasto público social en Bolivia está aún entre los más bajos de la región. Entre los países con menor gasto por habitante (menos de 300 dólares) se encuentran Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay. En este grupo, la educación constituye la principal partida de gasto. En cambio, en los países con gasto social per cápita superior a los 1.000 dólares, como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay, la seguridad social y los programas asistenciales constituyen las áreas de mayor importancia.

5. En la subdimensión *económica*, aunque Bolivia mejora levemente, continúa siendo el país de peor comportamiento en esta materia en América Latina y sigue ocupando el último lugar del *ranking*. Revierte la caída de 2010 y logra alcanzar el nivel obtenido en la medición del 2009 (gráfico 3.10).

Los indicadores *brecha de ingreso* y *nivel de endeudamiento* son los que han presentado peor desempeño.

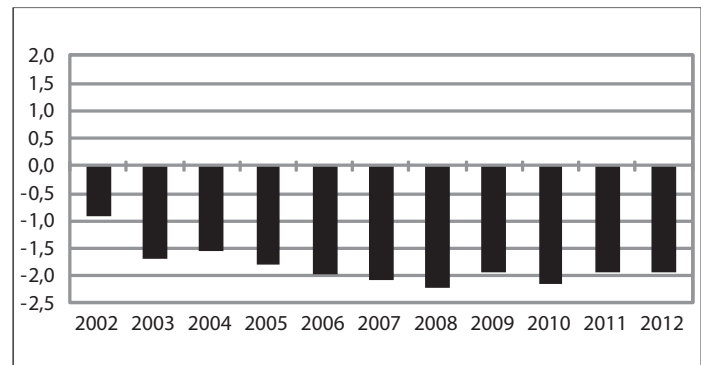
El Plan Nacional de Desarrollo plantea un objetivo, que se debiera alcanzar para el año 2015: una nueva matriz productiva con mayor valor agregado basada en la industrialización de los recursos naturales. De manera compatible con la Constitución Política del Estado se destaca que esto se debe lograr con un Estado promotor y protagonista del desarrollo productivo. El Estado pasó a ser

el responsable del desarrollo económico de Bolivia con el objetivo, aun distante, de superar el viejo y crónico problema de la dominante producción de materias primas.

En 2011, la economía boliviana continuó viéndose beneficiada por los elevados precios internacionales de las materias primas. Como consecuencia el valor de las exportaciones experimentó una nueva suba respecto del año anterior, aunque esto no se debió a una mayor producción, sino al aumento de los precios. Los principales productos de exportación son gas natural, petróleo y materias primas mineras. La capacidad de producción en estos rubros se encuentra estancada. Para la economía boliviana resulta sobre todo preocupante la situación de gas natural porque en los contratos celebrados con Argentina y Brasil se han fijado determinados volúmenes de exportación que en estos momentos no se pueden cumplir. Como consecuencia de esta situación, Bolivia se ve obligada a exportar todo el gas a estos países y, sin embargo, importar gas para el consumo propio. También el volumen de producción de los bienes agropecuarios se encuentra estancado, producto en parte de la inseguridad jurídica que enfrentan los inversores y de la política económica del gobierno para el sector. El gobierno dictó en repetidas ocasiones decretos prohibiendo la exportación de ciertos productos agropecuarios y fijando precios máximos. Esto derivó en una escasez sobre todo de azúcar y maíz, lo que repercutió a su vez sobre la producción avícola. De no modificarse esta política es de temer que se sume la escasez de otros alimentos, algo especialmente lamentable, en las presentes condiciones de altos precios internacionales para alimentos. Particularmente el departamento de Santa Cruz, zona de fuerte producción agropecuaria, podría verse

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.10



enormemente beneficiado con una legislación menos restrictiva.

El Banco Central logró mantener la inflación en un nivel aceptable, sostenida por sus elevadas reservas; sin embargo, los precios de los alimentos aumentaron por cuarto consecutivo en el orden de los dos dígitos. Esto repercute sobre todo en los sectores de menores recursos, que destinan gran parte de sus ingresos a la compra de alimentos. En el último año hubo un incremento significativo de las importaciones y ello impactó en la balanza comercial que, si bien sigue siendo positiva, ya no muestra un superávit elevado como en años anteriores. El presupuesto nacional depende en gran medida de los ingresos tributarios del sector hidrocarburífero y minero. Debido al constante crecimiento del sector informal no cabe esperar ingresos tributarios significativos del sector industrial productivo.

Al igual que en muchos países de la región, la economía boliviana en su conjunto depende de los precios internacionales de los *commodities*, por lo que el posible deterioro de estos precios implicaría consecuencias muy negativas para la estabilidad económica del país y el futuro del programa económico del gobierno de Evo Morales.

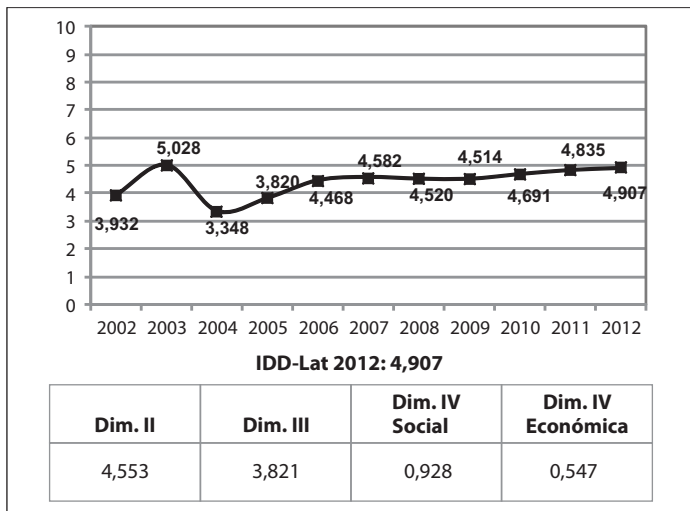
Debilidades

- Puntaje en el índice de libertad económica PIB per cápita
- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Inversión

BRASIL

Evolución del IDD-Lat en Brasil 2002-2012

Gráfico 3.11



1. Brasil presenta una leve mejora con respecto a su índice de desarrollo democrático del año anterior, cercana al 2% (gráfico 3.11). No alcanza para modificar su posición en el *ranking*, donde se mantiene ocupando el octavo lugar, aunque se acerca al mejor valor de la serie, que había obtenido en 2003. Esta leve mejora en el desempeño se debe a la compensación que se produjo entre el crecimiento alcanzado en la dimensión III, su mantenimiento en la dimensión IV y un leve descenso de la dimensión II. El índice alcanzado de 4,907 puntos se encuentra nuevamente por debajo del promedio regional. Sin embargo, Brasil sigue integrando el bloque de países de desarrollo democrático medio.

La presidente Dilma Rousseff terminó el año 2011 con un 72% de aprobación popular a su gestión, la mayor obtenida por un mandatario brasileño en sus primeros doce meses de mandato, el cual no estuvo libre de dificultades. Supo conducir y manejar situaciones complicadas, entre ellas, la catástrofe natural sufrida por el país, que ocurriera a escasos

diez días de recibir la banda presidencial de Luiz Inácio Lula Da Silva. Los deslaves provocados por intensas lluvias dejaron más de 900 muertos y numerosos desaparecidos en la región serrana de Río de Janeiro.

2. En la dimensión II, *respeto de los derechos políticos y civiles*, el país no logra despegar de la zona de baja puntuación y se ubica en toda la serie 2002-2012 en una meseta cercana a los 4 puntos (gráfico 3.12). Este año vuelve a descender, rompiendo la leve curva de mejora que había iniciado en el período 2010-2011. A pesar de ello ha mantenido su ubicación en el *ranking*, ocupando nuevamente el 9.º lugar.

Brasil presenta mejoras en los indicadores de *condicionamiento de la libertad por inseguridad y género*, pero el valor obtenido en estas variables es aún muy bajo comparativamente con otros países de la región. El resto de los indicadores se ha mantenido estable, salvo el que mide los *derechos políticos*. En esta dimensión, el país sigue sin alcanzar el promedio de la región.

Los abusos en las cárceles y la violencia continúan siendo déficits pronunciados de la democracia brasileña. Las condiciones abusivas hacia los detenidos en las cárceles del país o en custodia policial y los períodos prolongados de detención en ausencia de juicio, dan cuenta de esta situación. Pese a que la Constitución prohíbe el trato inhumano, cruel y degradante y contempla penas a quienes recurren a él, persisten la tortura y el trato cruel de la policía y los guardias en las prisiones.

Es preocupante la violencia de delincuentes y fuerzas de seguridad, y a ello se suma un grave problema de violencia hacia los más débiles, que se expresa en la continuidad de las violaciones y discriminación contra la mujer, niños y adolescentes, afrobrasileños, gays, lesbianas e indígenas.

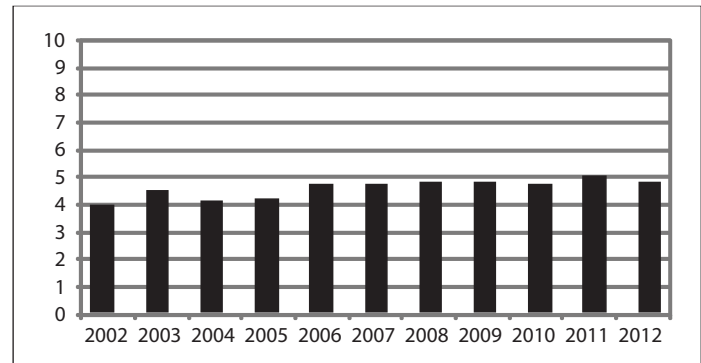
3. El desempeño de la dimensión III (*calidad institucional y eficiencia política*) ha sido positivo respecto al del año anterior (gráfico 3.13), con una mejora de un 10,5%. De todos modos, ese incremento no le alcanza para mejorar su ubicación en el *ranking* regional, ya que se mantiene en el 12.º lugar, el mismo que ocupaba el año anterior. El país mantiene un pobre desempeño en todos los indicadores que conforman la dimensión, pero su peor comportamiento se observa en los puntajes obtenidos en el *índice de percepción de la corrupción* y en *desestabilización de la democracia*. El valor de la dimensión se mantiene alejado del promedio regional, como en casi todos los años de la serie.

La situación política puede ser considerada estable ya que, pese a los numerosos problemas del sistema electoral y de partidos y una corrupción ampliamente difundida, no existen signos de que en Brasil pueda verse seriamente afectada la gobernabilidad.

En ese marco, la corrupción acechó el primer año de presidencia de Dilma Rousseff. Esa es la visión que se extrae de distintos sectores políticos de Brasil y de expertos internacionales, quienes coinciden en que los intentos de la presidente por construir nuevas fortalezas para sostener su incipiente administración —a la que muchos han denominado “la continuidad de Lula”— se empezaron a desmoronar sin dar espera. Cinco de sus seis ministros que dimitieron (Casa Civil, Transportes, Agricultura, Turismo y Deportes), lo hicieron alcanzados por casos de corrupción (con excepción del ministro del Ejército, que dimitió por haber criticado a dos ministras de confianza de la presidente). También se alejó de la coalición de gobierno el Partido de la República (PR), cuyo presidente Alfredo Nascimento es uno de los ministros renunciantes. Un tema

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.12



particularmente delicado para el gobierno son las denuncias de corrupción contra el Ministerio de Deporte dado que es el principal responsable de la organización del Mundial de Fútbol 2014. La FIFA incluso llegó a interrumpir el diálogo con el ministro del área, quien terminó dimitiendo.

Existe la sospecha de que esos casos se aceleraron con alguna complicidad oficial debido a que buena parte de los funcionarios involucrados también estuvieron vinculados al gobierno del antecesor de Rousseff. Pese a que sus ministros renunciaron por presuntas irregularidades dentro de la administración pública, Rousseff no se vio perjudicada políticamente.

En encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) a inicios de diciembre, encomendada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), el 72% de los brasileños calificó de excelente o bueno el trabajo de Rousseff.

La aprobación ciudadana a la tarea presidencial, de acuerdo con la visión de los analistas, obedece al cumplimiento de buena parte de sus promesas de campaña, pero también es un reconocimiento a su capacidad para sortear una serie de obstáculos político-institucionales, consolidar la mayoría parlamentaria y lograr una buena

Fortalezas

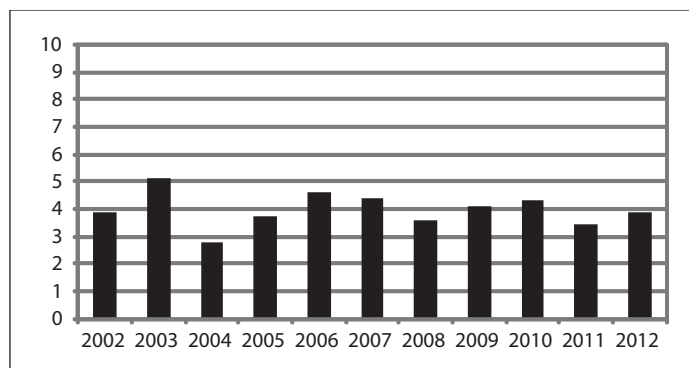
- Voto de adhesión política

Debilidades

- Índice de derechos políticos
- Condicionamiento de libertades por inseguridad
- Género en el Gobierno

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.13



Debilidades

- Puntaje en el índice de percepción de la corrupción
- *Accountability*
- Indicador de desestabilización

convivencia entre los gobiernos estatales y el federal, así como entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Una reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que actualmente margina el rol de los partidos y fomenta los personalismos sería importante para combatir las causas de la corrupción. Hoy prácticamente no existe dentro de los partidos un debate programático y muchos de ellos ni siquiera adhieren en forma creíble y sostenida en el tiempo a una determinada corriente política. También es habitual que los políticos cambien de partido varias veces a lo largo de su carrera. No existe una barrera electoral. Esto hace que actualmente haya representados en el Congreso Nacional 28 partidos y exige un gran esfuerzo de negociación para obtener las mayorías necesarias para aprobar cualquier ley importante. En el pasado esta situación llevó a que en más de una oportunidad sencillamente se denunciara la compra de votos para obtener esa mayoría.

La reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos viene discutiéndose en el Congreso hace décadas y recobró protagonismo a comienzos de 2011. En febrero inició su labor una comisión parlamentaria especial cuya función era la elaboración de proyectos de ley para la reforma política con los consensos

necesarios. Hacia fines de septiembre ingresaron los primeros proyectos en el Congreso. Para que la reforma pudiera estar vigente para las elecciones municipales de 2012 la reforma debía sancionarse antes del 7 de octubre de 2011, esto es, con un año de anticipación a la fecha electoral, un objetivo poco realista desde el comienzo. Los partidos continúan, incluso dentro de la alianza oficialista, enfrascados en discusiones sobre las modalidades electorales, las formas de financiamiento público de los partidos, la introducción de una posible cláusula de barrera electoral, la duración de los mandatos y la posibilidad de reelección de senadores, entre otros puntos de una reforma política necesaria e inconclusa.

De acuerdo con los expertos, los casos de corrupción que se han destapado en el gabinete ministerial de Dilma Rousseff son también el resultado de un movimiento desacertado en el interior de la coalición del gobierno que integran más de 16 partidos, todos afines al Partido de los Trabajadores (PT). Hubo una repartición desequilibrada de las fuerzas políticas en los ministerios. Más o menos la mitad de los ministerios tenían al frente a personas directamente ligadas al PT. En una coalición de muchos partidos, quedaba entonces poco espacio para otros colectivos políticos y para sus dirigentes.

4. En la dimensión IV sus dos subdimensiones tuvieron un diferente comportamiento: la *subdimensión social* presenta una puntuación inferior a la obtenida en el 2011 (gráfico 3.14), mientras que la *subdimensión económica* presenta un leve crecimiento.

Continúa en descenso la *mortalidad infantil*, lo que marca un importante avance del sistema de salud brasileño. Sin embargo, el resto de los indicadores que componen la subdimensión presentan retrocesos, salvo

el que mide el *gasto en educación*, que se ha mantenido estable. Pese a una caída de casi un 20% en esta subdimensión, Brasil logra mantenerse en el *ranking* regional en la misma ubicación que ocupaba en el 2011 (quinto lugar). El valor obtenido en su *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar* continúa ubicándose 0,928 puntos por encima del promedio regional.

Dilma Rousseff aseguró, tras ganar las elecciones, que cumpliría las promesas de campaña, lo cual ratificó el 1 de enero de 2011 cuando asumió la primera magistratura. Solo 34 días después presentó el primer gran programa social de su gobierno, La Salud No Tiene Precio, una iniciativa que distribuye de manera gratuita medicamentos para la hipertensión y la diabetes, dos de las enfermedades que más afectan a los brasileños.

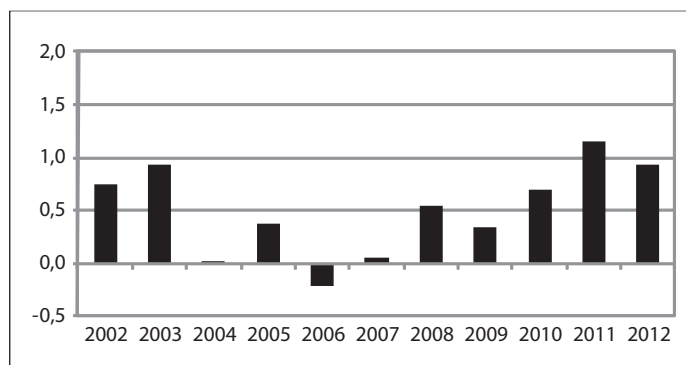
En marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, la presidente presentó un conjunto de proyectos que favorecen a las mujeres del país. Se anunciaron e implementaron los programas de Fortalecimiento de la Red de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer de Mama y de Cuello de Útero, dos de los que más afectan a la población femenina, y Red Cegonha (Red Cigüeña), destinado a la atención integral de las madres y menores desde el embarazo, el parto y hasta los dos años de edad.

A principios de junio se presentó el principal proyecto social del gobierno: Brasil sin Miseria, segunda etapa, con el cual asumió el reto de eliminar la pobreza extrema antes de concluir su mandato en 2014. El primer gran desafío consiste en localizar, registrar e incluir en los programas sociales del gobierno federal a los 16,2 millones de brasileños que aún viven en la miseria, según el diagnóstico oficial.

A finales de año, Rousseff anunció que habían registrado ya 407.000 familias en condiciones de extrema pobreza. De ellas, 325.000

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.14



estaban ya incorporadas al programa Bolsa Familia, que distribuye renta entre núcleos pobres a cambio del cumplimiento de ciertos compromisos como la asistencia escolar de los hijos, y ratificó su compromiso: "No descansaremos hasta alcanzar nuestra meta de sacar a 16 millones de personas de la miseria. El Brasil que estamos construyendo no es solo para algunos, porque él solo es grande y fuerte, si es para los 190 millones de brasileños y brasileñas", sostuvo. Durante el año fueron presentados otros programas destinados a favorecer a los emprendedores individuales, a los trabajadores agrícolas y a los jóvenes para elevar su formación profesional, lo que incluye 101.000 becas para estudiar en las mejores universidades del mundo.

5. La *subdimensión económica* evidencia un incremento levemente mayor con respecto a la medición 2011 (gráfico 3.14). En este caso, esa tendencia positiva logra que Brasil llegue al sexto lugar del *ranking*, mejorando un lugar con respecto al 2011. Este es el séptimo año consecutivo en que el país supera el promedio de la región y obtiene el mejor valor de su serie histórica. Casi todos los indicadores presentan mejoras, salvo las variables de *brecha de ingreso* y de *PIB per cápita*.

Un gran desafío político es la desigualdad distributiva. Si bien un informe publicado en

Fortalezas

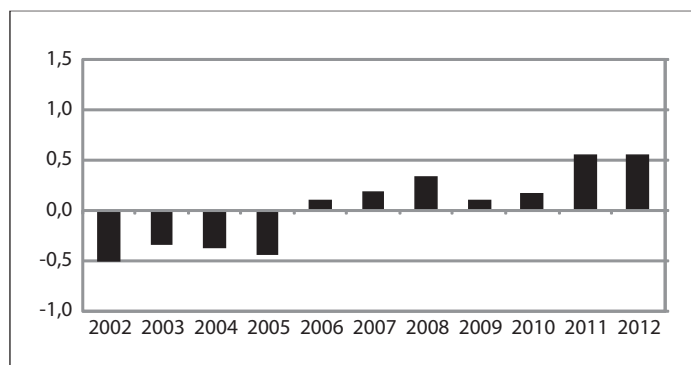
- Eficiencia en salud
- Eficiencia en educación

Debilidades

- Población bajo la línea de la pobreza
- Desempleo

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.15



Fortalezas

- PIB per cápita
- Endeudamiento

Debilidades

- PIB per cápita

2011 por la OCDE indica que el país se encuentra bien encaminado en sus esfuerzos por reducir la brecha y la desigualdad distributivas, Brasil sigue presentando uno de los coeficientes de Gini más altos en el mundo. El sur del país, sobre todo el estado de San Pablo, que constituye el motor económico de Brasil, está geográficamente, mental y conceptualmente muy alejado de la región norte y noreste del país, que presenta un nivel de evolución propio de otro país, más pobre. También dentro de las grandes ciudades la enorme brecha entre pobres y ricos es evidente y perceptible.

La popularidad de la presidente no se vio menguada por el agravamiento de la crisis financiera a mitad de año, que obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas para disminuir los efectos de la coyuntura adversa que presentaban Europa y Estados Unidos, y que provocó un estancamiento en el ritmo de crecimiento de la economía brasileña. De ahí que a finales de año Rousseff decidiera nuevas medidas para impulsar la expansión económica. Gracias a todo lo actuado, Brasil concluyó el 2011 con un crecimiento positivo, frente al comportamiento negativo que presentaban buena parte de las principales economías del mundo. No obstante, la economía brasileña que había crecido un 7,5% en 2010, redujo su ritmo de crecimiento a un

3% en 2011. El natural interés de las empresas por el tamaño del mercado brasileño se ha incrementado ante los próximos eventos clave en el país, en especial la mencionada celebración del Mundial de Fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.

En este periodo hubo una mejor comunicación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central (BC) que en el gobierno anterior, lo que ha supuesto una mejor coordinación de las políticas fiscal y monetaria. La autoridad monetaria ha estado condicionando su estrategia de fijación de los tipos de interés al desempeño de la política fiscal.

La moderada expansión de la economía brasileña durante el primer año de gobierno de Dilma Rousseff reafirma los temores acerca del impacto que puedan tener la crisis de la deuda en Europa y la lenta recuperación de Estados Unidos sobre los mercados emergentes más dinámicos, tales como China, uno de los principales socios comerciales de Brasil. Las exportaciones agrícolas —en gran parte, con destino a países asiáticos— y el consumo en el mercado interno evitaron que Brasil cayese en una recesión en el segundo semestre. El sector más afectado por la crisis fue la industria, que, debido a la sobrevaloración del real, encareció sus costos y la volvió menos competitiva. “No contábamos con el agravamiento de la crisis en el segundo semestre”, reconoció el ministro de Economía, Guido Mantega, quien señaló también que el ajuste de unos USD 30.000 millones en el gasto público y otras medidas tomadas con el objetivo de reducir la inflación del 6,5% enfriaron la economía. Hacia fines del 2011, el Gobierno empezó a implementar incentivos tributarios para ayudar a distintos sectores industriales, mientras que ha elevado los costos para la importación de varios productos, en medio de críticas de proteccionismo.

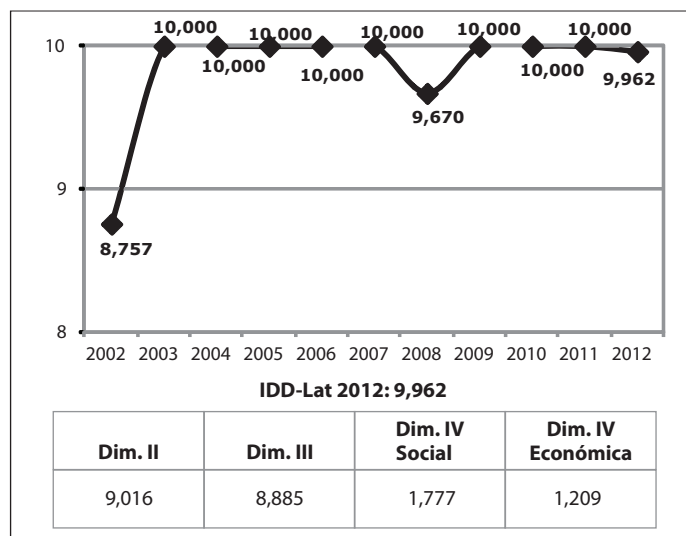
CHILE

1. Chile no ha podido sostener el valor máximo (10) que mantuvo en casi todos los años de medición del IDD-Lat (gráfico 3.16). La puntuación obtenida es más baja que la del año anterior por los descensos en casi todas las dimensiones, a excepción de sus mejores resultados en la subdimensión *económica*. Los descensos se presentan tanto en la dimensión que mide el respeto de las libertades civiles y los derechos políticos como en la correspondiente a la calidad de las instituciones y la eficiencia política, y también en la subdimensión que analiza el desarrollo social y humano. Solo en nuestra primera medición (año 2002) y en la correspondiente al 2008 Chile había dejado de estar en el primer lugar del *ranking* regional.

El 2011 fue un año difícil para el presidente Sebastián Piñera. Los primeros meses de su período de gobierno, que comenzó en enero de 2010, todavía estuvieron bajo un signo positivo. El empresario, un hombre muy rico, fue el primer candidato de los partidos de centroderecha desde el retorno de Chile a la democracia en 1990 en ganar las elecciones a la Presidencia. Tanto la reconstrucción del país después del devastador terremoto del 27 de febrero de 2010 como el espectacular salvataje de 33 mineros enterrados en agosto del mismo año contribuyeron al aumento de la popularidad del nuevo presidente. Sin embargo, desde entonces se dio vuelta la hoja. Numerosos conflictos de política interna, fuertes diferencias con la oposición, así como una insatisfacción general sobre el rumbo político del Gobierno incidieron para que en 2011 la imagen de la coalición de partidos en el poder, Coalición por el Cambio, y

Evolución del IDD-Lat en Chile 2002-2012

Gráfico 3.16



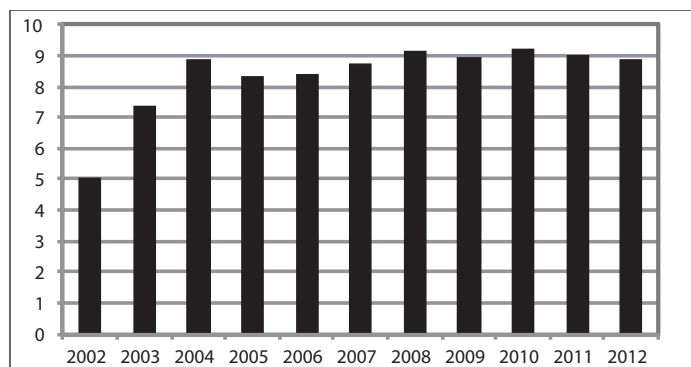
sobre todo la del presidente, ya no gozara de tanto prestigio entre la población.

2. En la dimensión II, que evalúa el comportamiento de *derechos políticos y libertades civiles*, ha obtenido un valor levemente inferior con respecto al año anterior (gráfico 3.17), por las peores puntuaciones obtenidas en los indicadores de *condicionamiento de derechos y libertades*, por la afectación de esos derechos y libertades por *inseguridad* y un peor comportamiento en el indicador de *participación política de la mujer*. El resto de los indicadores se mantiene sin alteraciones. Sigue liderando el *ranking* de la dimensión con el máximo valor regional. Es necesario destacar que Chile lidera en la región, aun aumentando su nivel de inseguridad ciudadana, el indicador *condicionamiento de derechos y libertades por inseguridad*.

El Gobierno ha tomado la iniciativa y en los últimos meses ha dado su visto bueno a numerosas reformas pendientes respecto al derecho electoral y partidario.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.17



Fortalezas

- Voto de adhesión política
- Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos

Debilidades

- Género en el Gobierno

Después de que durante mucho tiempo la inscripción en el registro electoral fuera voluntaria pero la votación para los inscriptos resultara obligatoria, a partir del 2011 se invirtió la situación y rigen el registro automático de todos los habilitados para votar y la votación voluntaria. Actualmente también los chilenos en el extranjero pueden participar en las elecciones. De esta manera, se quiere lograr que la democracia sea más participativa y transparente, y contrarrestar la disminución constante de la participación electoral, sobre todo de la generación más joven.

En lo referente a la reforma política, una revisión del discutible sistema electoral binominal, que ha forzado la división del sistema partidario en dos posturas de tamaño similar, y que no ofrece a los pequeños partidos y a los candidatos independientes una verdadera chance de obtener poder político, hace mucho que integra la agenda política. Hasta ahora, sin embargo, no fue posible realizar una reforma política. Pero últimamente se empezó a mover algo en este sentido. Así, de momento y en lo referente a la Cámara baja, se está considerando una ampliación de 120 a 150 bancas para corregir al menos parcialmente las distorsiones creadas por el derecho electoral actual. Los 30 escaños

adicionales deberán ser elegidos según un sistema proporcional.

Aunque en Chile el problema de la criminalidad de ninguna manera se acerca al de otros países de Latinoamérica, el presidente Piñera se ha quejado de que en los últimos años hubo un empeoramiento de esta situación. Otra prioridad de este Gobierno sería por ello la de “vencer de una vez por todas la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico”. A este fin, entre otras cosas, deberá crearse un ministerio para la seguridad interna y promover una mejor coordinación entre las diferentes autoridades de persecución penal. Un registro de todos los inculcados, de acceso público, forma parte asimismo de las medidas que impulsa el gobierno.

3. En cuanto a *calidad institucional y eficiencia política*, Chile se posiciona en el tercer lugar del *ranking* regional, perdiendo dos lugares respecto al 2011. La puntuación obtenida es muy cercana a la peor obtenida en el 2008. Tras las mejoras de 2009 y 2010, sigue empeorando levemente en esta dimensión, en esta ocasión en casi un 7% (gráfico 3.18) y esto se debe a la caída que se observa en el indicador de *desestabilización*. El resto de los indicadores se mantuvo estable, salvo el de *accountability* que ha mejorado considerablemente, y por ello Chile alcanza la mejor puntuación junto con Costa Rica en esta variable. Supera ampliamente el promedio regional.

Después de los disturbios a comienzos del año 2011 en la región de Magallanes debido al aumento del precio del gas planeado por el Gobierno (lo que hubiera afectado duramente a la población de la región más sureña y fría de Chile), hubo numerosas manifestaciones contra la política del Gobierno durante los últimos meses. En el primer

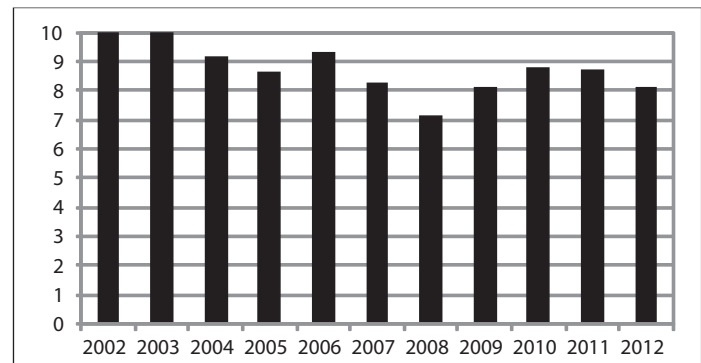
semestre del año, las protestas se dirigieron especialmente contra el plan de construcción de una represa en el sur del país, en la región de Aysén. Este megaproyecto es objeto de fuertes controversias en Chile desde hace años. Según las encuestas de opinión, una clara mayoría de la población, tres de cada cuatro ciudadanos, rechazaba este proyecto de grandes dimensiones.

En el segundo semestre del año, el tema dominante fue, en cambio, el conflicto en el sector educativo. Esta protesta es de las mayores manifestaciones desde el fin de la dictadura militar en el año 1990. El descontento con el sistema educativo de y formación en Chile motivó varias marchas de hasta cien mil estudiantes y docentes. Además, durante semanas varios edificios de escuelas y universidades estatales fueron ocupados, por lo que las clases en numerosas instituciones educativas solo podían tener lugar de forma limitada.

Según una encuesta de opinión del conocido Centro de Estudios Políticos (CEP) realizada en el período junio/julio de 2011, el índice de aprobación del gobierno de Sebastián Piñera alcanzaba apenas el 27%; el rechazo, por el contrario, era de alrededor del 52%. Ante la caída de las cifras en las encuestas y las continuas manifestaciones, el 18 de julio de 2011 Piñera hizo una reestructuración profunda de su gabinete, con un recambio de ocho cargos. Sufrió un traslado, entre otros, el antiguo ministro de Educación, Joaquín Lavín, bajo fuerte presión por las protestas estudiantiles, a un ámbito menos conflictivo, el del Ministerio de Planificación, competente para el desarrollo social. Con esta resolución respecto al personal, Piñera, al igual que en ocasión de su primer reajuste ministerial el 16 de enero de 2011, fortaleció el perfil de su

Evolución de la Dimensión III

Gráfico 3.18



equipo de Gobierno, y se apartó definitivamente de su plan original de apostar preferentemente a *tecnócratas* en lugar de políticos.

Ante el rechazo público actual respecto al gobierno, sorprende que hasta ahora la coalición opositora de centroizquierda, la Concertación, no haya logrado obtener ventajas de la situación: en la mencionada encuesta del CEP obtuvo solamente una aprobación del 17%, con peores resultados que la coalición de Gobierno. La Concertación se encuentra en un punto muy bajo de las encuestas, sobre todo debido a la falta de personalidades con empuje y de una línea política clara como alternativa al Gobierno.

4. En la dimensión que mide el *poder efectivo para gobernar* de la democracia chilena, en la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar* muestra un avance en solo dos indicadores de *eficiencia educativa*; el resto de los indicadores presentan un descenso, salvo el que puntúa el *índice de mortalidad infantil*, que todavía se encuentra en el mejor valor de la región. En esta subdimensión Chile ocupa el cuarto lugar del *ranking*, bajando un peldaño con respecto al ordenamiento del año anterior, debido a

Fortalezas

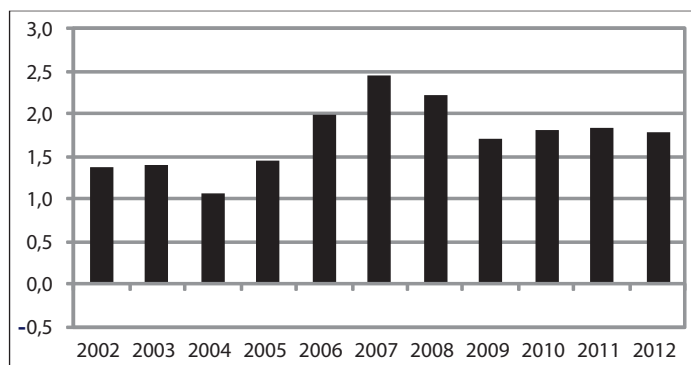
- Puntaje en el índice de percepción de la corrupción
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Indicador de desestabilización

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.19



Fortalezas

- Eficiencia en salud
- Desempleo

Debilidades

- Eficiencia educativa
- Población bajo la línea de la pobreza

los ascensos de algunos países (Argentina, Uruguay y Brasil) que subieron el promedio regional. Su puntuación supera holgadamente el comportamiento medio de los países de la región.

A pesar del muy buen desarrollo macroeconómico de Chile, en relación al desequilibrio social no ha habido muchas mejoras (el país, dentro del contexto regional, presenta las mayores desigualdades entre pobres y ricos después de Brasil). A fin de enfrentar de forma sostenible la desigualdad social y la pobreza, en los próximos años el Gobierno desea seguir ampliando la red social, en primer lugar por medio de un aumento de los gastos sociales, pero también mediante una mayor promoción de la integración social. El plan de superación de pobreza del Gobierno del presidente Piñera contiene los siguientes objetivos: derrotar la pobreza extrema en el 2014 y erradicar la pobreza antes del año 2018; rediseño global de la política contra la pobreza para producir una articulación efectiva de programas, mayor celeridad en la identificación de beneficiarios y simplificación de la entrega de los beneficios; dar más opciones a la gente de menores recursos, a través de programas de subsidio a las personas, de manera que tengan más alternativas para elegir;

perfeccionamiento de la ficha de protección social (FPS), para que las personas que necesitan apoyo no queden excluidas por razones políticas o por otras discriminaciones injustas; incentivar la participación de la sociedad civil, dado que ella ha probado ser particularmente eficiente en el combate contra la pobreza, en particular en los núcleos de pobreza dura.

Uno de los mecanismos utilizados para combatir la pobreza fue la implementación del Ingreso Ético Familiar, que avanzó con la implementación de lo que se llama la *asignación familiar*. Así, a partir del 1 de abril de 2011 rigió la implementación de la primera etapa del proyecto, que consiste en una entrega mensual de un bono de 7.500 pesos por cada integrante de la familia, además de los 5.000 pesos por hijo, a las 130.000 familias más vulnerables del programa Chile Solidario, hasta el 31 de diciembre de 2011.

También un mejoramiento de la política de mercado laboral forma parte de las prioridades sociopolíticas del Gobierno. Piñera había prometido durante la campaña electoral la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo. Además, subrayó que para él era muy importante el acceso de las mujeres al mercado laboral, así como la equiparación de salarios para ambos sexos. La desgracia en las minas del desierto de Atacama, que causó sensación a nivel mundial, mostró a todo el mundo durante el 2010 el estado crítico de las condiciones laborales en muchas empresas y fábricas del país.

5. La subdimensión *económica*, luego de su importante caída en la medición de 2009, muestra una continuidad de la línea de recuperación iniciada en la medición del 2010 (gráfico 3.20), con mejores resultados en los

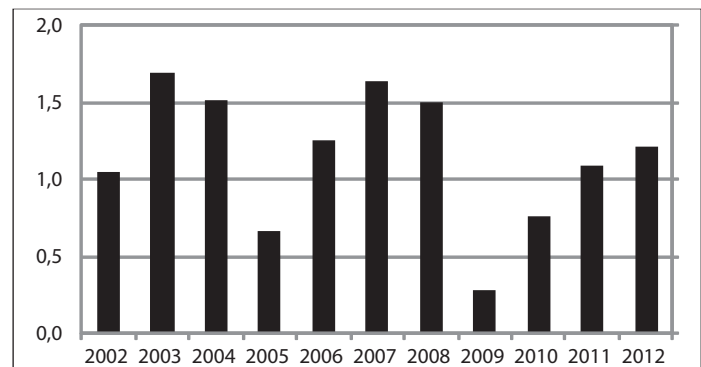
indicadores de *brecha de ingreso, endeudamiento e inversión*. Solo se mantuvo estable la variable *libertad económica* y bajó levemente el indicador de *PIB per cápita*. Chile ocupa el segundo lugar en el *ranking* y mantiene la posición que había ocupado el año anterior. Supera holgadamente el promedio regional.

Desde el punto de vista macroeconómico, a Chile, en realidad, le fue muy bien. Piñera destacó que, desde su asunción al poder, la economía del país habría crecido en un 2,7 % (“la tasa más alta en la historia de Chile”) y que, al mismo tiempo, se habrían creado 487.000 nuevos puestos de trabajo. En los últimos años, según la opinión unánime de los expertos, el país andino ha evolucionado cada vez más hacia *un país modelo de economía de mercado* en Sudamérica. Chile presenta actualmente el mayor rendimiento económico per cápita en Latinoamérica. Su ingreso a la OCDE como único país sudamericano a principios de 2010 es el reconocimiento del desarrollo hasta ahora positivo del país.

La economía chilena prosigue con su fuerte ritmo de crecimiento, impulsado por una política monetaria expansiva y por los altos precios del cobre y de otros importantes bienes de exportación del país. La dependencia del mercado mundial, sin embargo, en opinión de los expertos,

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.20



sigue siendo el talón de Aquiles. Además, la producción económica de Chile, al igual que las inversiones directas del extranjero, todavía están demasiado orientadas hacia la manufactura y la exportación de materias primas, especialmente el cobre. Sigue siendo, en primer lugar, una economía de materias primas, con la correspondiente baja demanda por mano de obra cualificada. En el futuro, el país tendrá que diversificarse mucho más, lo que requiere una clara estrategia de innovación e inversiones adicionales en el ámbito de la investigación y la educación. De lo contrario, el cumplimiento del objetivo del presidente Piñera, de lograr en los próximos veinte años el salto de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, será muy difícil de alcanzar.

Fortalezas

- Índice de libertad económica
- PIB per cápita
- Inversión

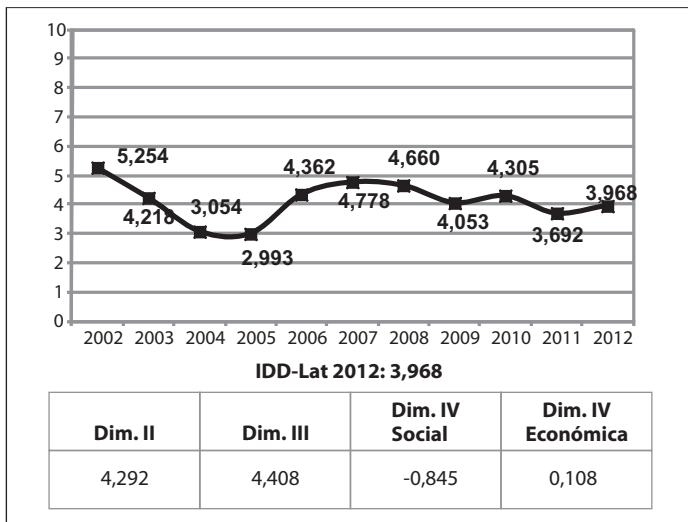
Debilidades

- Brecha de ingreso
- Endeudamiento

COLOMBIA

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Colombia

Gráfico 3.21



1. Colombia muestra una incipiente mejora en el IDD-Lat que trata de quebrar la línea de tendencia negativa que muestra desde el punto máximo de recuperación que había alcanzado en 2007 (gráfico 3.21). A pesar de este leve incremento no ha modificado su ubicación en el *ranking* y se mantiene en el noveno lugar. Continúa sin alcanzar el promedio regional e integra el grupo de países con bajo desarrollo democrático. El avance colombiano en el IDD-Lat es consecuencia, fundamentalmente, de la variación positiva registrada en la dimensión *calidad de las instituciones y eficiencia política*. El resto de las dimensiones ha empeorado su puntuación.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo en agosto de 2011 el balance de su primer aniversario como jefe de Estado. "Hoy, por fortuna, tenemos claro ese puerto de destino: más empleo, más seguridad y, sobre todo, menos pobreza. Y estamos cumpliendo", afirmó el mandatario, que el 7 de agosto de 2010 había sido investido como el 59.º presidente de la historia republicana de

Colombia. Confió en ser el gobernante capaz de "dejar el país en paz". Santos atribuyó la sensación de inseguridad por la que se le había cuestionado "al cambio de estrategia de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]", a través de "operaciones avispa de terrorismo" y de acciones dirigidas a "fomentar y manipular la protesta social".

En 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió la Presidencia, prácticamente nadie dudaba de que su gestión de gobierno sería una continuidad de la gestión desarrollada por Álvaro Uribe durante los ocho años que dirigió los destinos de Colombia. Santos no solo había sido su ministro de Defensa estrella, sino también su adalid en la implementación de la política de seguridad democrática. Sin embargo, bastaron tan solo unas semanas para que comenzara a dar sorpresas. A su llegada, el nuevo presidente tomó conciencia de que dirigía una nación prácticamente enfrentada con todos sus vecinos, que había roto relaciones con Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Además, en la región reinaba una enorme tensión por el acuerdo suscrito con Estados Unidos para el establecimiento de siete bases militares en suelo colombiano. Esa parece haber sido la base de su inesperado giro.

Muchos analistas coinciden en que los mayores logros del presidente Santos en su primer año de gobierno se han dado precisamente en el campo internacional. Otro elemento importante en esta nueva era de Colombia en la región es la diversificación económica, la búsqueda de otros mercados y de nuevas proyecciones comerciales, con Asia en general y con China en particular, rompiendo la exclusividad de su alianza con Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, esta política exterior se define e implementa exclusivamente desde el

Ejecutivo. El Congreso, los partidos y los niveles académicos tienen escasa o nula participación. No hay un debate sobre política exterior ni en el Congreso ni en la opinión pública.

Los pasos dados por Juan Manuel Santos en la región en su primer año de administración le permitieron apagar los múltiples incendios que se habían provocado en el gobierno de su antecesor.

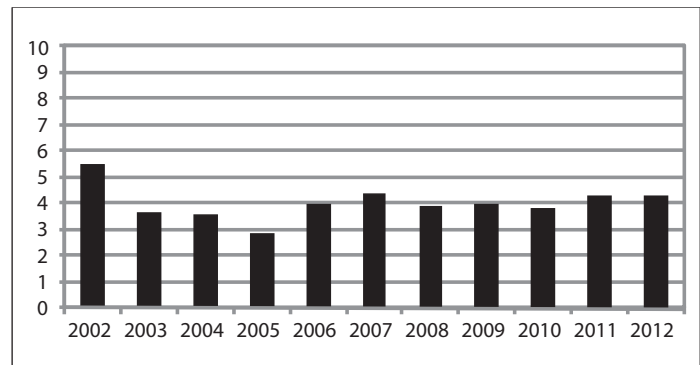
Con un índice de aprobación superior al 70%, Santos mantenía un buen nivel de aceptación en la opinión pública nacional. La Ley de Víctimas, la Ley de Tierras, la Ley del Empleo, la Ley de Sostenibilidad Fiscal, la Regla Fiscal, la Ley de Macroproyectos, la Ley de Regalías y la Ley de Reforma a la Salud, elaboradas por el actual Ejecutivo, planteaban una nueva dirección en cuestión de políticas públicas, en las que el presidente sorprendió tanto a su coalición como a algunos opositores.

De igual forma, dirige su mandato más hacia el centro, donde construye alianzas con la mayoría de partidos políticos para forjar la iniciativa de Unidad Nacional. También restableció las relaciones bilaterales con los gobiernos de Venezuela y Ecuador. El país, además, vivía un clima de institucionalización, en el que organismos como la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría ganaron importancia.

2. La dimensión II que evalúa el *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, ha tenido un puntaje aunque un poco más bajo, muy similar al del año anterior (gráfico 3.22). Producto de ese leve descenso y de la mejora de otros países, en esta medición Colombia desciende un lugar en el *ranking* regional de la dimensión de *democracia de los ciudadanos* y ocupa el 13.º lugar. Explican esta

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.22



situación, por un lado, su caída en el indicador de *condicionamiento de libertades por inseguridad*, por el otro, que mantiene los mismos resultados en el resto de los indicadores en niveles que son bastante modestos, peor aún en el caso de la puntuación en *derechos políticos* donde Colombia recibe una de las peores calificaciones junto con Venezuela. El único indicador que ha mostrado un leve avance es el que mide *género en el Gobierno*. Esa situación sigue colocando al país por debajo y alejado del promedio regional.

Se nota un cambio de enfoque en las políticas de seguridad del actual gobierno. Esto se podría analizar como una diferencia que de manera política ha planteado Juan Manuel Santos, en el sentido de que no todo vale en un ejercicio de gobernabilidad. Pero esta diferencia de enfoque también le significa algunos cuestionamientos en los resultados obtenidos, sobre todo en regiones marcadas por el conflicto armado. Además, sigue existiendo un problema de seguridad para los líderes sindicalistas y defensores de los derechos humanos, aunque haya disminuido con las políticas del Gobierno.

“Más seguridad” es la frase que sumó la propaganda de Santos a “menos pobreza y más empleos”. Este tema, que tiene que ver con poderes narcos, de guerrilla, de

Fortalezas

- Voto de adhesión política
- Género en el Gobierno

Debilidades

- Puntuación en el índice de libertades civiles
- Puntuación en el índice de derechos políticos
- Condicionamiento de libertades por inseguridad

paramilitares y de bandas delincuentes, es uno de los más susceptibles en su gestión hasta hoy. Lo que en época de campaña Uribe llamó “los huevos de la seguridad democrática” sigue siendo el tema de discordia entre el mentor de esa política y su *exdelfín*, el presidente Santos. Se trataba, según se anunciaba en épocas preelectorales, de que el ministro de Defensa continuara la política de seguridad de su padrino político. “Construir sobre el progreso de los últimos ocho años”, anunció el jefe de gobierno durante su discurso de posesión, en el que también habló de un gobierno de unidad nacional que integrara en el gabinete a políticos de diversos partidos. Esto último se está cumpliendo.

Supuestamente por haber bajado la guardia contra la guerrilla, que ese año aumentó los ataques contra poblaciones civiles en apartadas regiones del país, Uribe Vélez criticó la gestión de Santos. Aceptar que en Colombia hay un conflicto armado interno, tal como lo sancionó en la llamada Ley de Víctimas, también es tema de discordia de los círculos uribistas contra el actual mandatario.

En el área de la seguridad, Santos comenzó su gobierno con una buena imagen cuando en septiembre del 2011 asestó un duro golpe a las FARC tras el bombardeo en el que murió Víctor Julio Suárez, uno de sus jefes militares, más conocido como el Mono Jojoy. La ofensiva de las fuerzas militares y policiales logró neutralizar (entre muertos en combate y desmovilizados) a 3.411 miembros de las FARC, 502 miembros del ELN y a 3.726 de las Bandas Criminales Emergentes (BACRIM). Asimismo, en el primer año de gobierno disminuyeron los homicidios comunes en un 7% respecto del período anterior y, en concordancia, el secuestro extorsivo se redujo en un 10%, las lesiones comunes en

un 6%, el hurto en un 5% y la piratería terrestre en un 14%. Todos estos avances en materia de seguridad se dan en el marco de la denominada *política integral de seguridad y defensa para la prosperidad* que, si bien no implica modificaciones en el plano de la política de seguridad democrática, asume la seguridad desde una perspectiva más amplia, entendiendo la necesidad de una presencia integral del Estado, a través de instituciones civiles, servicios básicos e infraestructura.

En la actualidad, el gobierno del presidente Santos presentó una política pública nacional de equidad de género (PPNG) para garantizar los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad de género en su plan de desarrollo “Hacia la prosperidad democrática 2010-2014” (ley 1450, junio de 2011) tras insistentes propuestas para el reconocimiento de la equidad de las mujeres en Colombia. En el artículo 177 de esta ley, se afirma que la PPNG se adopta con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género. El principio rector de la política es el reconocimiento del enfoque diferencial a partir del cual se visibiliza la diversidad de mujeres tanto en el ámbito urbano como el rural y todas las diferencias que caracterizan a las mujeres en Colombia.

3. Colombia ha mejorado su desempeño en *calidad institucional y eficiencia política* en casi un 30% respecto del año anterior (gráfico 3.23) y por primera vez se ubica por encima del promedio regional. Subió tres lugares en el *ranking* con respecto al año anterior y ocupa el décimo lugar, fundamentalmente por los mejores resultados en los indicadores de *participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo* y de *desestabilización*. El resto de los indicadores han mostrado

peores desempeños, especialmente el de *accountability*.

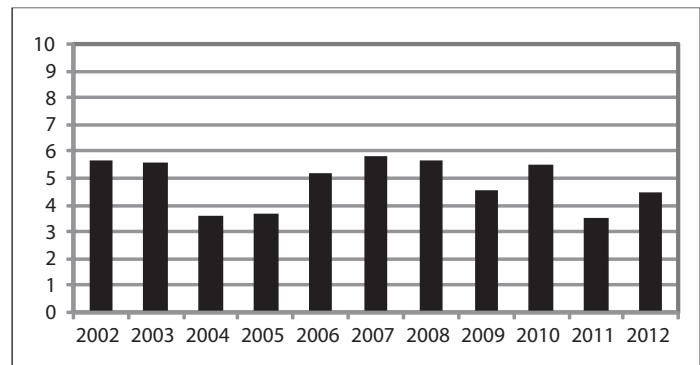
Santos ha obtenido importantes logros en el ámbito legislativo. En tan solo un año, el presidente y su equipo con mayorías en el Congreso lograron la aprobación de leyes históricas, como la que pretende la reparación a víctimas del conflicto, la búsqueda de la verdad y la memoria histórica sobre la guerrilla, y la restitución de dos millones de hectáreas de tierra que grupos ilegales han arrebatado al campesinado colombiano. Otras tienen que ver con el Estatuto Anticorrupción. Las regalías y el ordenamiento territorial son consideradas avances destacados en tan solo doce meses de gobierno.

El presidente ha intentado la consolidación de un gobierno de unidad nacional, que con una coalición entre los Partidos Liberal, Cambio Radical y el Partido de la U, le permitió controlar desde el inicio de su mandato el 80% del Senado y el 87% de la Cámara de Representantes. Y desde julio de 2011 ha logrado sumar adhesiones y controlar el 95% del Congreso, donde solo un partido permanece como oposición al gobierno de Santos: el Polo Democrático. Esta unión con otras fuerzas políticas le ha permitido a su vez desarrollar importantes iniciativas en el plano legislativo, tales como el mencionado Estatuto Anticorrupción y la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

El primer año del presidente Santos se ha caracterizado por un marcado distanciamiento con respecto a la anterior administración en lo que tiene que ver con el discurso y la actitud del Gobierno con la situación de derechos humanos en el país. En este período reabrió el diálogo con las organizaciones de derechos humanos e impulsó importante legislación que busca reparar a las víctimas del conflicto armado colombiano.

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.23



Sin embargo, a pesar de estos cambios, la situación de seguridad de defensores de derechos humanos, líderes sindicales, comunidades afro-colombianas e indígenas y líderes de la población desplazada sigue siendo crítica. Los reportes de abusos cometidos por grupos paramilitares, guerrillas y las fuerzas armadas colombianas continúan, mientras que la impunidad para estos crímenes es más una norma que una excepción.

Santos ha conseguido sacar al país de la polarización en el plano político y restablecer las normas del juego institucional con la persecución de la corrupción. Como fruto de la lucha contra la corrupción se intervinieron el ente que administra los bienes decomisados a los narcotraficantes y el que gestiona la lucha antisequestro, y quedaron destapados escándalos que ya tienen consecuencias judiciales. Tal es el caso de la contratación irregular de obras públicas, particularmente en Bogotá, el *recobro* irregular de servicios de salud y la infiltración de una red de defraudadores en la Administración tributaria.

La lucha contra la corrupción se ha convertido en una de las principales banderas de la administración Santos. Y esto lo dejó claro el 12 de julio de 2011 cuando sancionó en Bogotá el Estatuto Anticorrupción, una herramienta clave en la lucha contra este

Fortalezas

- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Puntuación en el índice de percepción de corrupción
- *Accountability*
- Desestabilización de la democracia

flagelo: “No toleramos la corrupción ni toleramos al corrupto”, dijo el mandatario. Una prueba de ello son los escándalos que se han destapado: el desfalco al sector de la salud, el robo y la adjudicación ilegal de tierras, los estupefacientes y el robo en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

En la agenda de los temas pendientes se encuentra la descentralización, que se discute en Colombia tanto con vistas al Régimen de Regalías como respecto a la creación de regiones como nuevas unidades territoriales. A partir de 2012 cobrará vigencia el nuevo Sistema General de Regalías, una suerte de compensación financiera entre los departamentos. Por primera vez en su historia, muchas comunas y departamentos serán dotados de importantes recursos. Este reclamo, articulado con creciente insistencia en los últimos años, busca crear nuevas unidades territoriales políticas y administrativas a partir de la fusión de varios departamentos. Al respecto aún no se ha dado el amplio debate conceptual que el tema amerita.

También entre los temas pendientes se encuentra la reestructuración de la justicia, una de las reformas que fracasaron durante el primer año de gestión de Santos y sometida nuevamente a consideración del Congreso en 2011.

4. En lo relativo a la dimensión IV, que evalúa el *poder efectivo para gobernar*, en la *subdimensión social*, Colombia vuelve a caer, por cuarto año consecutivo (gráfico 3.24), y sigue sin superar el promedio regional. En esta oportunidad la situación se debe a la caída en los indicadores que miden el *desempleo*, *la pobreza* y *el gasto en salud*. El resto de las variables han mostrado mejores resultados, fundamentalmente las que se relacionan con la *eficiencia en educación*. Pese a esta caída y

como consecuencia de peores resultados en otros países de la región, Colombia logra subir una posición ocupando en este informe el puesto 13.º en el *ranking* regional de esta subdimensión.

Santos se había comprometido en su programa a superar los dramas de Colombia: desempleo y falta de vivienda, educación y salud. “Haremos gran esfuerzo para llegar con políticas sociales a los más pobres de los pobres de Colombia”, fue la promesa que hizo vía Twitter al comenzar su rendición de cuentas. Cinco millones de viviendas nuevas para los más desfavorecidos es el otro campo en el que está ya comprometido. “De agosto de 2010 a mayo 2011 se iniciaron 155.943 viviendas con un aumento del 63% con respecto al año anterior”, alardeó en las redes sociales festejando su primer aniversario en la Casa de Nariño.

Cuando se analiza el tema de la salud en el primer año de Gobierno es ineludible remitirse a la ley 1438 de 2011, que plantea una reforma legal al sistema. Primero, la ley permite ampliar el espectro de los principios jurídicos que rigen la salud. En este sector Colombia tiene un modelo mixto (contributivo y subsidiado), con la participación del sector privado y altamente intermediado. En segunda instancia, esta reforma propone la actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), en respuesta a la sentencia T-760 de 2008, proferida por la Corte Constitucional, y que indicaba recurrentes problemas en el Sistema General de Salud. Por otro lado, la ley también impone un control de los gastos en la salud, indicando una serie de medidas para que el sistema gaste lo necesario y para que paralelamente el Estado pueda vigilar. Por último, la reforma también prevé un sistema de regulación para el sector, lo que se traduciría en una prestación eficiente del

servicio y en un control para evitar las desviaciones éticas.

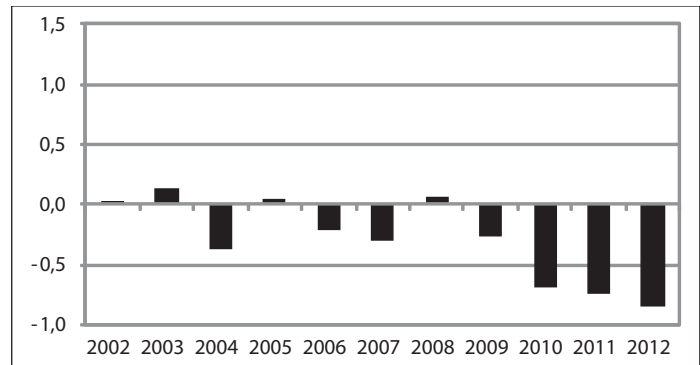
El 52% de los colombianos son pobres, es decir, ganan menos de dos dólares diarios, por lo que aún hay mucho trabajo por hacer en este campo. Se requiere generar oportunidades, lo que compromete tanto al Gobierno como al conjunto de la sociedad. Es aquí donde se hacen necesarias iniciativas que aporten mayor equidad. Una de ellas es la Ley de Tierras, con la que el actual Gobierno busca que los campesinos vuelvan a su lugar de origen, a sus propiedades. Además, es una iniciativa que acerca el pueblo a las tres ramas del poder público.

En el primer año del presidente Santos se tuvo en cuenta a la educación entre las reformas legislativas planeadas. En noviembre de 2010, el jefe de Estado y María Fernanda Campo Saavedra, ministra de Educación Nacional, presentaron la política denominada "Educación de calidad, el camino para la prosperidad". La iniciativa contempla ofrecer una educación de calidad; desarrollar e implementar la política educativa para la primera infancia; cerrar las brechas de la inequidad en cobertura y calidad, y entre la educación rural y urbana; educar con pertinencia para la innovación y la productividad; y mejorar la eficiencia del modelo de gestión educativa. Además, desde el primer semestre de 2011, el Ministerio viene socializando un proyecto de reforma a la ley 30 de educación superior, con cuatro objetivos: generar condiciones para una mejor oferta de educación superior, lograr que más colombianos se gradúen de estos estudios, adecuar el sistema a la realidad nacional y armonizarlo con las tendencias regionales e internacionales, y fortalecer el buen gobierno y la transparencia.

La meta para el gobierno de Santos es reducir el desempleo a un dígito, lo

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.24



que según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), a abril de 2011 ya se había logrado en algunos departamentos del país. Sin embargo, este fenómeno no se debió precisamente a la Ley del Empleo aprobada por el Congreso de la República, iniciativa que pretende la creación de plazas para sectores vulnerables como jóvenes y madres cabezas de familia con más de 35 años, a través de beneficios tributarios para los empleadores; se debió más al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que aunque se ha dado sobre todo por la locomotora de la minería —que no es un sector que tradicionalmente reporte muchos empleos al país—, ha servido para impulsar la economía.

5. El valor obtenido en la *subdimensión económica* ha sufrido un fuerte descenso, perdiendo lo obtenido en el año anterior (gráfico 3.25). Colombia ocupa el décimo lugar del *ranking* regional de este año, perdiendo cuatro lugares con respecto al año anterior, aunque logra mantenerse por encima del promedio regional de desarrollo económico.

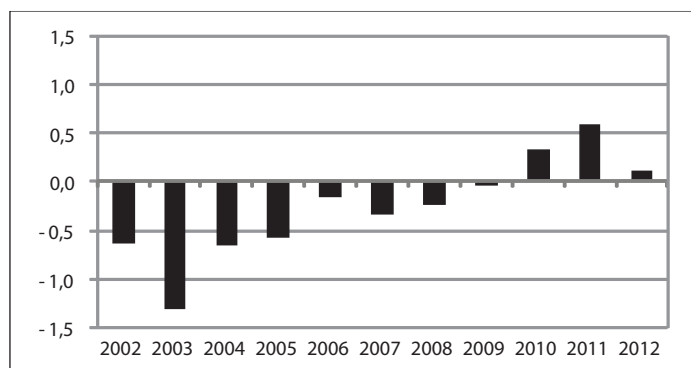
Se observa un peor desempeño en algunos de los indicadores, excepto en los referidos a *endeudamiento e inversión*. La variable que más ha retrocedido es aquella que

Debilidades

- Mortalidad infantil
- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza
- Gasto público en salud

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.25



Debilidades

- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Inversión

mide la *brecha de ingreso*, evidenciando que pese a los esfuerzos estatales uno de los mayores problemas de la sociedad colombiana, la inequidad, continúa sin resolverse.

La reforma a las regalías, el incremento de los barriles de petróleo generados diariamente y la expedición del decreto para regular el gas fueron los logros que destacó el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, durante un balance de gestión presentado al cumplirse el primer año de Gobierno del presidente Santos. El fundamento político y moral del acto legislativo que permitió la reforma a las regalías es la equidad y el desarrollo social y regional, que irrigarán recursos hacia las zonas y las personas más pobres de Colombia. En segundo lugar, mientras en julio de 2010 el país producía 783.000 barriles de petróleo por día, en la actualidad la cifra llega a 930.000 barriles por día. Como tercer logro se destaca la regulación del gas natural, un combustible limpio, barato y práctico,

del cual gozan seis millones de hogares colombianos.

El ministro de Economía había considerado que “se están alineando los astros”, puesto que Colombia “está viviendo el mejor escenario económico posible: costos de mano de obra al mismo nivel de China, TLC con Estados Unidos sin trabas, interés de los inversionistas internacionales, recaudo alto de impuestos, crecimiento del PIB superior a lo esperado, inexistencia de obstáculos en materia financiera, buen flujo de caja, perspectivas de crecimiento para este año que están entre 5 y 6%”. Tanto optimismo estuvo precedido por el otorgamiento del grado de inversión a la deuda soberana de Colombia por la calificadora de riesgo Fitch, sumándose a las de Standard & Poor’s y Moody’s Investors Service. Sin embargo, como admite el propio director de Fitch, “la deuda del gobierno colombiano, que llega al 42% del PIB, está en niveles más altos que los de otros países con la misma calificación”.

Por otra parte, el déficit corriente de la balanza de pagos persiste y la economía se ha vuelto más vulnerable a los ciclos mundiales, dada la gran volatilidad de los precios de las materias primas. Los productos estrella de Colombia en otras épocas fueron el añil, luego el tabaco o el café. Ahora son el petróleo, el carbón, el ferroníquel, el oro y el café, sin que en los últimos cuarenta años se hayan introducido productos que agreguen valor a estas producciones primarias.

COSTA RICA

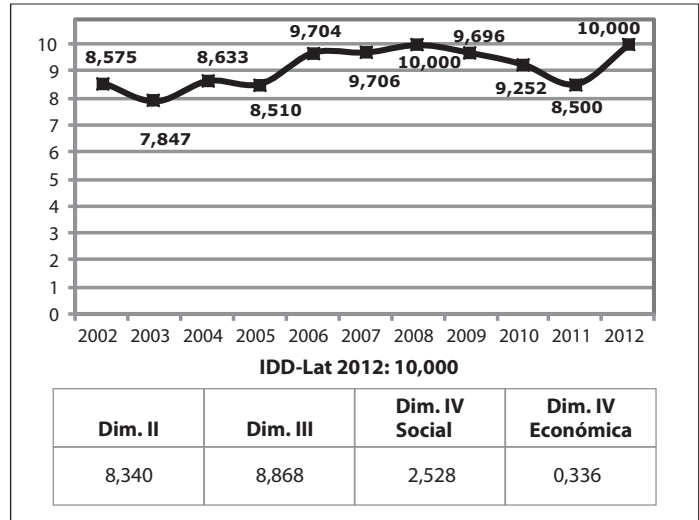
1. Costa Rica ocupa en esta edición del IDD-Lat el primer lugar en el *ranking* regional, y ello es resultado de un aumento de más del 17% de su puntuación en el índice general (gráfico 3.26). Esto es producto de la mejor puntuación que obtuvo en todas las dimensiones, más fuertemente en aquella que mide los resultados económicos y sociales, aunque también denota el impacto que, por causas metodológicas, ha tenido la caída este año de Chile, que en años anteriores había obtenido la mayor calificación de nuestro índice.

La democracia en la práctica no alcanza un estado ideal sino que es un imperfecto camino de convivencia y desarrollo. Por eso, siempre remarcamos que la posición de liderazgo en el desarrollo democrático no implica el logro de un estado ideal sino que, en el marco comparativo regional, la sociedad local y sus dirigentes han logrado una mejor evolución que el resto de los países de la región en los diversos componentes del desarrollo democrático. Como prueba de que Costa Rica no es un *paraíso democrático*, el panorama de cierre del año 2011 mostraba un gobierno con gabinete desarticulado, que no parecía responder plenamente al liderazgo presidencial, una bancada oficialista dividida, un partido de Gobierno bajo una profunda crisis ideológica y proyectos económicos y sociales que no terminaban de arrancar. La conflictividad social tuvo diversas manifestaciones a lo largo de todo el año con huelgas, manifestaciones, paros y bloqueos, protagonizados por sectores tan diversos como distintos eran sus planteos y objetivos.

Las encuestas indicaban que el liderazgo de la presidente pasaba desapercibido

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Costa Rica

Gráfico 3.26

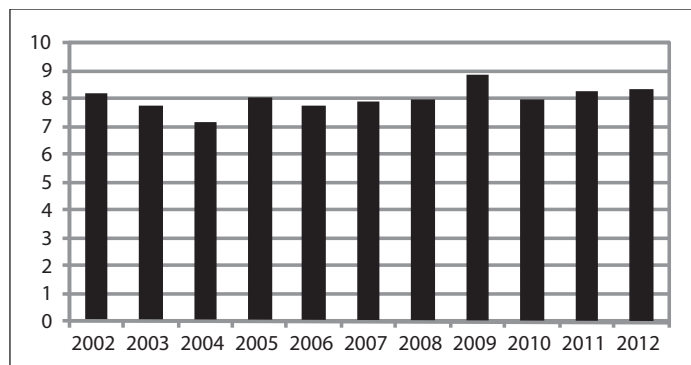


y que muchos de los ciudadanos consideraban que no sabía tomar las riendas de la nación.

En febrero de 2010 Laura Chinchilla había ganado cómodamente las elecciones presidenciales con el 46,7% de los votos. Desde entonces la aprobación de su gestión cayó a una franja del 41 al 37% según reconocidas encuestadoras locales. Las preocupaciones de los costarricenses se basan principalmente en el incremento de la criminalidad. La seguridad y la creación de una Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil fueron los temas centrales de la campaña electoral de la presidente pero, según las encuestas, el gobierno no alcanzó los objetivos fijados en ese sentido. A fines de 2010 y en el transcurso de 2011, diferentes acontecimientos influyeron en la imagen negativa del gobierno: la renuncia de varios ministros, la disputa territorial con la vecina Nicaragua por la isla Calero y el anuncio de problemas financieros en la Caja Costarricense de Seguro Social que ponen en peligro la seguridad social.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.27



Fortalezas

- Puntaje en el índice de respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos
- Género en el Gobierno

Debilidades

- Inseguridad

2. El comportamiento de la dimensión de *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles* presenta un leve crecimiento de un 1,6% respecto del año anterior (gráfico 3.27) y se mantiene entre los valores más altos de la región. Este pequeño ascenso permite que el país se pueda mantener en un lugar destacado, el segundo del *ranking* regional, solo precedido por Chile. El indicador que mide *inseguridad* ha tenido una leve caída que confirma la preocupación social ante este fenómeno. La única variable que ha mostrado un comportamiento positivo es la que mide la *participación política de la mujer en el Estado*. El resto de los indicadores se ha mantenido estable.

La lucha por mejorar la seguridad fue la principal bandera que enarboló en campaña electoral la mandataria Laura Chinchilla Miranda, pero en la ejecución de sus compromisos no ha logrado grandes resultados. Incluso debió desplazar a su ministro de Seguridad Pública, el abogado José María Tijerino —quien había llegado al cargo con la experiencia de haber sido fiscal general de la República—, y poner en su lugar a Mario Zamora, quien ejercía como viceministro de Gobernación.

El Poder Ejecutivo había presentado el 14 de febrero de 2011 un documento llamado

“Política integral y sostenible de seguridad ciudadana y promoción de la paz social” (Polsepaz), que fue recibido con muchas más críticas que elogios y solo contó con una tímida defensa del Gobierno. El plan había sido realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y proponía, entre otras medidas, la profesionalización urgente de la fuerza pública, el involucramiento activo de los gobiernos locales para detener el crimen y la violencia, mecanismos para el control de la corrupción, la intervención efectiva frente a la violencia contra las mujeres, así como la aplicación de acciones inmediatas para lograr la permanencia y el regreso de jóvenes al sistema educativo. Otras de las acciones contenidas en Polsepaz eran: mejora de la capacitación policial, ampliación de la capacidad carcelaria del país, programa de intervención en comunidades en riesgo mediante acciones policiales y preventivas, y combate al crimen organizado.

La preocupación nacional por la inseguridad muestra un incremento vertiginoso en los últimos meses. De acuerdo con la medición que realiza Unimer, en marzo del 2011 se ubicaba en un 38% y tan solo tres meses después había ascendido a un 49%.

3. El valor obtenido en la dimensión de *calidad institucional y eficiencia política* coloca al país en el primer lugar de la tabla, con la mejor puntuación desde el año 2002, con lo cual supera ampliamente el promedio regional (gráfico 3.28). El alto puntaje en la mayoría de los indicadores se muestra estable y resalta una nueva mejora en el indicador de *accountability*. No obstante, el país debe avanzar en algunas de las cuestiones institucionales relacionadas con la

protección de los derechos, tales como el acceso a la información y el hábeas data. La única variable que ha sufrido un retroceso ha sido el *índice de percepción de la corrupción*.

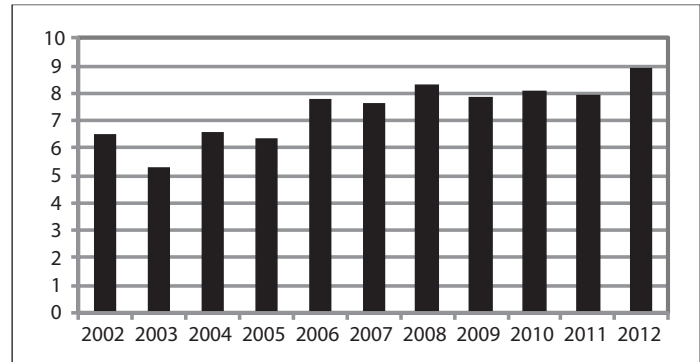
Los resultados de las últimas elecciones presidenciales habían confirmado una fractura del sistema bipartidario con la irrupción de un gran número de partidos en la Asamblea Legislativa. Luego de que el Movimiento Libertario retirara su apoyo al Partido Liberación Nacional (PLN) se formó por segunda vez la llamada coalición parlamentaria opositora de la que también formó parte el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). La coalición cuenta con mayoría en el Parlamento, de modo que la presidente depende del respaldo de la oposición para todas las decisiones importantes.

No obstante, las encuestas actuales muestran que aumentan las críticas a la coalición opositora, a la que se acusa de afectar la gobernabilidad. Originalmente muchos costarricenses (53% según las encuestas) creyeron que el ascenso de la coalición implicaría una mejora en el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Esta opinión se ha modificado por completo: luego de seis meses, apenas el 9% comparte esta opinión, en tanto que el 70% cree que la nueva coalición no ha servido para mejorar el trabajo. Surgieron disputas en virtud de la aprobación del plan financiero, manifestándose diferencias de opinión dentro de la propia coalición.

En ese marco, la discusión sobre el paquete de impuestos trascendió lo meramente técnico y se transformó en una disputa política. Allí, tanto los sectores del pacto Solís-Chinchilla como los sectores que apostaban por la concreción de

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.28



alianzas de nuevo tipo se estaban jugando sus cartas en ese momento. La arena de la discusión sobre el pacto fiscal expresaba las tensiones entre proyectos políticos diferentes, disputa cuyo balance podía no solamente implicar cambios importantes en el acomodo de las correlaciones de fuerzas en el país, sino también sellar buena parte de la suerte de la Alianza por Costa Rica. Los sectores del pacto Solís-Chinchilla tomaban nota de ello. Tanto el ofrecimiento de parte de Óscar López, líder del PASE, de los votos de su bancada parlamentaria al PLN para la elección del directorio legislativo en mayo, como las manifestaciones del diputado Martín Monestel en el sentido de que "la Alianza por Costa Rica es un fraude", eran particularmente claras en este sentido. Todos los dardos dirigidos contra la Alianza.

A mediados del 2011 el Gobierno enfrentó una serie de cuestionamientos por incumplimiento de deberes, corrupción, uso ilegal de fondos públicos, supuesta violación a la Ley de Enriquecimiento Ilícito y tráfico de influencias, entre otros.

4. En la dimensión que mide el *poder efectivo para gobernar, subdimensión social*, Costa Rica mantiene valores muy por encima del

Fortalezas

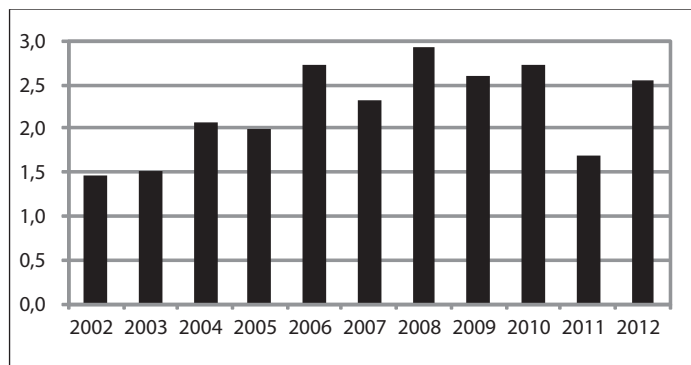
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.29



promedio regional, y ha mejorado en más del 50% con respecto a los valores obtenidos en el 2011, en una clara recuperación de la situación social tras el impacto de la crisis internacional de 2009 (gráfico 3.29). Esta recuperación le permite, aunque no lidere el *ranking* de esta subdimensión, subir al segundo lugar, detrás de Argentina. La recuperación ha sido notoria en los indicadores de eficiencia en educación y en salud, pero la situación no ha sido positiva en los indicadores que miden el desempleo y la población bajo la línea de la pobreza, que no logran mejores resultados.

En materia de pobreza la cifra promedio pasó de 21,3% a 21,6%. El gobierno de Laura Chinchilla recibió una pesada herencia de su antecesor. Costa Rica había recibido un fuerte impacto social y económico de la crisis internacional y el gobierno no había logrado morigerar ese impacto, vinculado con un enorme déficit fiscal, tan grave que la presidente se vio obligada a convertir el plan fiscal en su proyecto estrella, iniciativa que en cualquier país genera controversia, pues imponer nuevos impuestos a la población y empresas nunca es bien recibido.

La generación de empleo no se correlacionó significativamente con la recuperación

económica y el incremento en las exportaciones. Por ello los indicadores de empleo no marchan al mismo ritmo que la producción. A su vez, la crisis ha vuelto más cautelosos aun a los empresarios respecto de la política salarial y esto perjudica principalmente a los grupos de menores ingresos.

5. También el desempeño en la subdimensión *económica* ha mejorado fuertemente en relación con el valor obtenido en el 2011 (gráfico 3.30). Este registro, aunque no está lejos de los mejores valores de la serie, logrados en 2003 y 2007, muestra nuevamente a Costa Rica por encima del promedio de la subdimensión. Solo en 2011 el país había caído por debajo del promedio regional. Esta mejora justifica su ascenso de cinco posiciones en el *ranking* regional y lo lleva a ocupar el séptimo lugar. Este mejor comportamiento de la subdimensión se origina en una recuperación en la *brecha de ingreso* y por el valor obtenido en *nivel de endeudamiento*. Los indicadores que presentan peores valores en la subdimensión económica son los que miden *libertad económica e inversión*.

Durante el 2011, la presidente Chinchilla insistió en que el Congreso aprobara su proyecto de reforma fiscal para generar recursos frescos que ayudaran a disminuir el déficit, que ese año, según la misma mandataria, iba a rondar el 6% del producto interno bruto (PIB). El plan fiscal que impulsaba el Gobierno pretendía aumentar la recaudación en al menos un 1,5% del PIB a través de la creación de nuevos impuestos, como el del valor agregado que gravaría los servicios y la renta mundial y global. El plan fiscal contaba con los votos necesarios para su aprobación, pero diputados opositores al proyecto utilizaron herramientas

Fortalezas

- Eficiencia en salud
- Eficiencia en educación

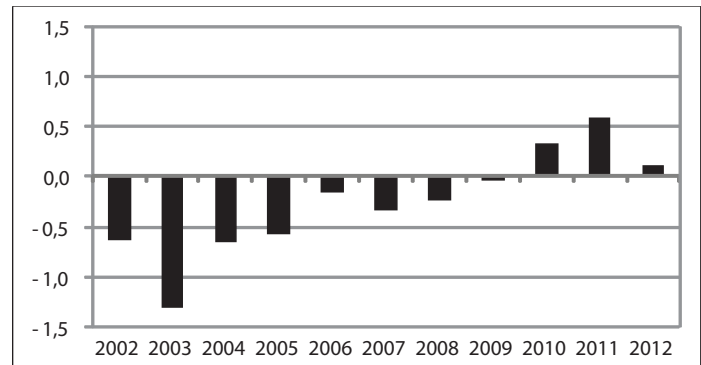
Debilidades

- Hogares bajo la línea de la pobreza
- Desempleo
- Endeudamiento
- Brecha de ingreso

contempladas en el reglamento legislativo para evitar que se llegara a una votación en el plenario, complicando las aspiraciones de la mandataria y el financiamiento de los programas del Gobierno.

Dimensión IV. Subdimensión económica

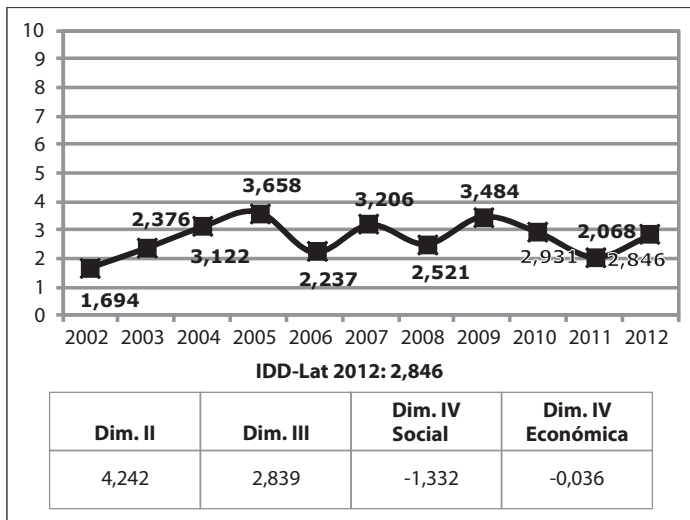
Gráfico 3.30



ECUADOR

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Ecuador

Gráfico 3.31



1. Ecuador ha sido uno de los dos países que más ha mejorado su clasificación respecto a la de 2011 (37%), solo aventajado por Guatemala (gráfico 3.31). Ambos países se recuperan tras haber sido los que más retrocedieron en el año anterior. A pesar de este avance, Ecuador mantiene su ubicación en la tabla y continúa en el 16.º lugar entre 18 países. El principal argumento del crecimiento en el índice de desarrollo democrático ha sido el avance verificado en todas las dimensiones, destacándose el mostrado en la dimensión III, *democracia de las instituciones*, y en la subdimensión *económica*.

El presidente Rafael Correa —el primer mandatario ecuatoriano en permanecer cinco años en el poder, tras más de una década de inestabilidad política que impidió a sus antecesores cumplir con sus períodos de mandato— se situaba, en diciembre de 2011, con una aprobación del 55%, mientras la credibilidad de su palabra se ubicó en 51%, de acuerdo con la encuestadora

Cedatos Gallup. El reporte señalaba entre las principales razones de ese apoyo: las obras realizadas en vialidad, educación y vivienda, así como la atención a grupos de menores recursos. Entre quienes desaprobaban la gestión de Correa los motivos expuestos eran la corrupción, el desempleo y la inseguridad.

Pasado el esplendor de alto precio del petróleo, que ha permitido incrementar fuertemente el gasto público, crece la brecha fiscal y el Gobierno ha tenido que recurrir al endeudamiento con el Banco Interamericano de Finanzas (BIF). En la actualidad, el mayor gasto que había en los programas sociales (bono de desarrollo, de entre 15 y 30 dólares, dirigido a los dos quintiles con menores ingresos) reflejaba una forma de gobierno y eso mantenía relativamente contenta a una población cada vez más desmovilizada, aunque dependiente de los programas gubernamentales. La ecuatoriana es una economía planificada (SENPLADES), pero que requiere de inversión extranjera, particularmente bajo un modelo extractivista de minerales. Correa ha cambiado su discurso inicial antiempresarial por uno de llamado a la inversión nacional y extranjera.

Esta evolución económica se da en un marco político-institucional preocupante. Desde la sanción de la nueva Constitución en 2007, se ha venido consolidando una creciente concentración del poder público en la persona del presidente. Pese a su popularidad, Correa no aparece como el presidente de todos los ecuatorianos, sino solo el dirigente indiscutido de su comunidad de seguidores. Sus posiciones tampoco parecen tener un perfil o proyecto político propio, sino que responden al combate que él y su gobierno libran contra quienes ejerzan cualquier forma de crítica a su gestión política y

de gobierno, como si fuera un ataque a su honor personal.

Su estilo de imponer decisiones ha terminado por neutralizar al Parlamento unicameral; unificó el aparato judicial con la consiguiente interpretación de las normas constitucionales a gusto del presidente, desactivó la sociedad civil organizada como masa crítica e impuso considerables limitaciones a la libertad de expresión y de prensa.

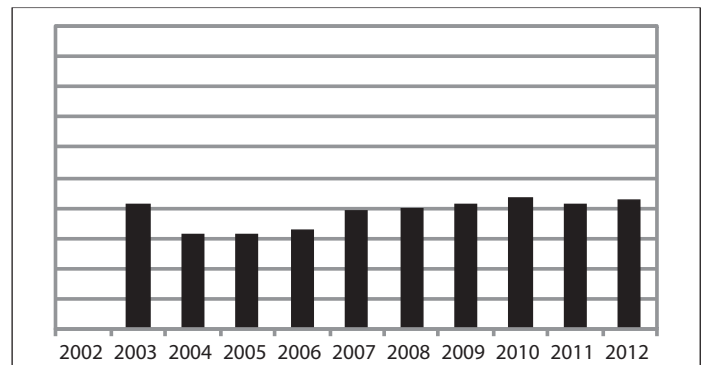
Toda esta situación ha provocado que hoy resulte difícil reconocer una división de poderes en un sentido democrático. Las decisiones que incumben tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo parecen estar concentradas hoy en la persona de Rafael Correa.

2. En la dimensión II el valor obtenido es levemente superior al alcanzado el año anterior (gráfico 3.32). Este leve ascenso se debe al mejor comportamiento del indicador que mide la *participación de las mujeres* en puestos de dirección del Estado y a un leve ascenso del indicador que mide el *condicionamiento de libertades y derechos*. A pesar de estos comportamientos positivos, todas las variables de la dimensión se mantienen en niveles muy bajos con respecto al resto de los países de la región, destacando en ese panorama negativo lo que concierne al *respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos*. La leve suba del valor de la dimensión le permite superar los 4,200 puntos y ganar un lugar en el *ranking* con respecto a la medición del 2011, alcanzando el 14.º, pero con un nivel por debajo del promedio latinoamericano.

La sublevación policial del 30 de setiembre de 2010 —o golpe de Estado, según el correísmo— había dividido a la sociedad ecuatoriana en dos, acentuando la polarización y, al mismo tiempo, los rasgos más

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.32



autoritarios del gobierno de Correa. La débil participación de elementos de la policía en respuesta a la sublevación significó una grave señal de alerta para el Gobierno. Cada vez existía una menor participación social, aunque se mantenía un mayoritario apoyo a Correa. Pero simultáneamente, la sociedad ecuatoriana sufría una transformación profunda, caracterizada por el creciente deterioro del tejido social, permeado por problemas globales y por un crecimiento local del mundo de lo ilícito, como es el caso del sicariato, del testaferrato, particularmente en las provincias de Esmeraldas y Los Ríos. La situación de inseguridad creciente, expuesta por los medios de comunicación, ha servido para que el Gobierno asuma un discurso de *mano dura* y establezca el uso de tipos penales abiertos para casos de *terrorismo, desacato y sabotaje* que resultan totalmente funcionales a la criminalización creciente de la protesta social.

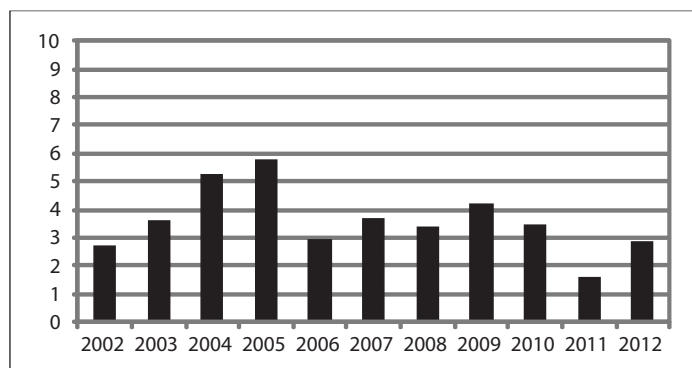
Esto ha ayudado a promover un régimen progresivamente militarizado, sin declaración formal de un estado de excepción. Después del intento de golpe del 2010, las fuerzas armadas empezaron a recibir progresivamente mayores beneficios, tales como aumento de sueldos, mayor equipamiento para la frontera norte, creciente injerencia

Debilidades

- Índice de respeto de las libertades civiles y los derechos políticos
- Condicionamiento de las libertades por inseguridad

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.33



Debilidades

- Índice de Percepción de la corrupción
- *Accountability*
- Desestabilización de la democracia

en el control del orden interno, manejo de la Inteligencia por un militar, etc. A eso se sumaba la presencia de 12.000 soldados en la frontera norte.

El modelo económico de acumulación capitalista de extracción de recursos naturales impulsado por el Gobierno avanzó en su consolidación durante este año y determinó efectos violatorios de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, en cuyos territorios ancestrales están ubicados estos recursos naturales. Los derechos colectivos y de la naturaleza se vieron seriamente amenazados por la adopción del Plan Nacional del Desarrollo del Sector Minero 2011. Las nuevas rondas de licitación petrolera en bloques que afectarán directamente a territorios de los pueblos en aislamiento voluntario y a territorios ancestrales indígenas, la proyección de negociación de campos maduros sin reparar los pasivos ambientales, la renegociación de bloques de explotación petrolera que se han extendido a áreas protegidas y el anuncio de que se iniciaría la explotación del bloque 31, que está en un 80% dentro del parque nacional Yasuní, constituyen un panorama de avasallamiento de derechos de esos pueblos.

3. En la dimensión *calidad institucional y eficiencia política*, Ecuador superó en más del

80% el valor al que había caído el año anterior (gráfico 3.33), pero todavía no llega a los 3,000 puntos y está lejos de alcanzar los mejores valores obtenidos en el IDD-Lat 2004 y 2005. Recordemos que en el IDD-Lat 2011 había sufrido un retroceso de más del 50%, con un puntaje de 1,558 puntos (gráfico 3.33). Los factores que explican esta mejora relativa son: por un lado, las mejores puntuaciones obtenidas en los indicadores de *percepción de la corrupción y participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo*; por el otro, porque se ha suspendido la aplicación del *factor de anormalidad democrática* que había reflejado la gravedad de la crisis institucional sufrida por el país en el 2010, consecuencia del alto grado de tensiones que la democracia ecuatoriana no había tenido capacidad de procesar en un marco de plena vigencia institucional. Por esta situación el país mejora su posición en el *ranking* regional subiendo dos peldaños, del 17.º al 15.º lugar.

Debemos destacar que el indicador de *accountability* ha sufrido un nuevo retroceso, alcanzando el valor más bajo de su serie histórica, desde el 2002 a la actualidad. Allí uno de los subindicadores que comprometen el comportamiento de esta variable es el que mide la *libertad de prensa* y todos los que corresponden a *accountability social*.

Desde el ascenso al poder de Rafael Correa, en 2006, se produjeron varias situaciones importantes: el proceso constituyente, la adopción de una Constitución que muchos consideran absolutamente progresista y garantista pero irrealizable, hasta cambios fundamentales en materia de derecho penal. Las leyes aprobadas hasta el momento no guardan relación con los principios de la Carta: las leyes de Aguas, Minería, Seguridad Pública, Educación, son tan solo

un ejemplo. El presidente Correa ha convertido a la Asamblea en una institución que solo tramita las leyes que vienen del Ejecutivo, mientras que el Gobierno se maneja sobre la base de sucesivos decretos. Solo existieron dos procesos de participación relativa de la Asamblea que se dieron durante la discusión de las leyes de Medios y de Aguas.

En este contexto, Correa dispuso llamar al cuarto proceso electoral de su mandato mediante consulta popular el 7 de mayo de 2011. El referéndum constitucional y consulta popular fueron dos procesos electorales diferentes que sumaron un total de diez preguntas, las cuales buscaban la aprobación de reformas sobre asuntos relativos al sistema judicial, la seguridad, el medioambiente, la banca y los medios de comunicación. Varias de las preguntas reflejaban un retroceso en materia de vulneración de derechos, competencias, injerencias y riesgos para la institucionalidad. Una de las preguntas de la consulta postulaba la aprobación de una ley de comunicación que permitía crear un Consejo de Regulación para normar la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita. Los resultados se tomaron sobre la base de votos válidos, sin tomar en cuenta votos nulos y blancos, lo que ha motivado un debate constitucional al respecto. La consulta dio el triunfo que el Gobierno deseaba, con más del 50% de los votos para todas y cada una de las preguntas.

La gestión de Correa se caracteriza por la ausencia de intermediadores entre el Gobierno y el pueblo; la agenda se maneja en función de las encuestas de opinión, buscando sostener adhesión popular. No hay procesos ni dinámicas sociales contundentes que definan la agenda política. Ni los movimientos indígenas (CONAIE, ECUARUNARI)

se recuperaron de las sucesivas crisis, ni otros movimientos sociales logran converger sobre una agenda nacional. Fundamentalmente, el presidente Correa se maneja directamente con la población y define las agendas públicas. Por otra parte, ha crecido el aparato del Estado, a través de secretarías y ministerios coordinadores, pero ello no se ha traducido en un incremento de la capacidad de gestión ni en eficiencia gubernamental.

En general, la producción legislativa de 2011 fue baja: hubo 1,6 leyes aprobadas por mes; si se compara con el número total de asambleístas, se determina que cada uno de ellos elaboró un 0,1% de las leyes aprobadas en el año. Los 141 proyectos de ley que se presentaron respondieron a la iniciativa de 61 asambleístas, lo que evidencia que la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional no generó ni siquiera un proyecto en el año. El 87,5% de las leyes aprobadas respondió a la iniciativa del partido de gobierno y solo se aprobó un proyecto proveniente de la iniciativa ciudadana.

La Asamblea Nacional prácticamente ha perdido importancia política. Por un lado, el presidente gobierna mediante decretos ley que siempre cuentan con el aval de la mayoría de la coalición gobernante y, por el otro, mediante la declaración de estados de excepción. Actualmente están en vigencia 140 de estos estados de excepción, pese a que, desde la lógica constitucional, puede haber solo un estado de excepción nacional (por ejemplo en caso de guerra o catástrofes naturales). Al dictarse el estado de excepción, la potestad presupuestaria y el control financiero pasan de la Asamblea Nacional al presidente. En consecuencia, esta actualmente se encuentra al margen de cualquier participación política y fiscal en 140 áreas políticas específicas.

Por otra parte, la mayoría oficialista en la Asamblea bloquea todo intento de la oposición de cuestionar esta forma de gestión política. La falta de crítica a la actuación del gobierno, los permanentes desacuerdos entre los bloques de la oposición y la priorización de intereses personales de los legisladores no hacen más que desacreditar a la Asamblea Nacional en general, a sus diputados y a los bloques de los diferentes partidos ante la sociedad.

Angostura en marzo del 2008, el golpe del 30-S y la situación de criminalidad fueron tres puntos de quiebre en las relaciones del Gobierno con una parte de la sociedad y con las otras instituciones del Estado, las fuerzas armadas y la policía. En ese conflicto fue determinante la relación de Correa con una parte importante de la prensa, con un punto culminante en la denuncia del presidente al diario *El Universo*. En la querrela, presentada el 21 de marzo de 2011, Correa pedía tres años de cárcel para los cuatro acusados y una indemnización de 80 millones de dólares. En julio del mismo año, el juez Juan Paredes condenó a tres años de prisión a tres directivos del diario y a su jefe de opinión Emilio Palacio, quienes además debían pagar 40 millones de dólares al presidente. Envalentonado por este triunfo judicial, el 10 de agosto, fecha en la que Ecuador conmemora su independencia, el presidente Correa dedicó cerca de 42 minutos de su informe a la nación para descalificar a la prensa y los periodistas, a quienes él consideraba enemigos que querían “dañar al gobierno”. El discurso del primer mandatario fue político y por primera vez intervinieron nueve ministros, quienes fueron los encargados de hacer un balance de las gestiones de cada una de las carteras de Estado. El presidente Correa enfocó su discurso en la libertad de

expresión y el derecho a la honra; recalcó que no permitiría que nadie se metiera con su honor y calificó a los medios de comunicación de *poder fáctico*, y a los periodistas que lo atacaban, como “sicarios de tinta escondidos detrás de un tintero”. “Durante estos cuatro años y medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de una prensa que ocupa legítimamente el espacio de una partidocracia derrotada”, dijo el primer mandatario.

La conflictividad en el país se ha incrementado levemente si se la compara con las cifras de 2010. En este año se han producido 280 conflictos, frente a 268 en 2010. De los 280 conflictos de 2011, 37% están relacionados con los derechos de libertad; 24% con los derechos del buen vivir; 18% con los derechos de participación; 13% con los derechos de protección; 5% con los derechos de los pueblos y 3% con los derechos de los grupos de atención prioritaria. Persiste el inadecuado manejo de la conflictividad expresado en lo ideológico, político, económico, organizativo, a través de un gran despliegue mediático.

El Gobierno dio apertura al diálogo con los gremios empresariales, mientras cerró las posibilidades de hacerlo con el movimiento indígena, con los trabajadores y con periodistas, dando más bien paso a procesos discrecionales de criminalización de la protesta social y de la opinión pública.

El derecho a la justicia enfrentó obstáculos por el clima de tensión y presión política. Las reformas introducidas mediante el proceso de enmienda constitucional y consulta popular, que fue avalado por la Corte Constitucional y obtuvo el respaldo popular, alteraron el diseño constitucional de la Función Judicial; le restaron independencia y limitaron así su calidad de garante

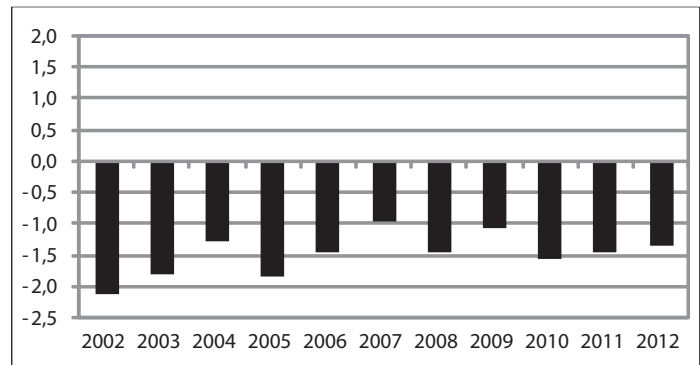
de los derechos y contrapeso en el poder del Estado. Bajo este marco de falta de independencia judicial continuó la utilización de la justicia penal como un selectivo mecanismo de criminalización de la protesta social y de la opinión: 204 líderes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza –en su mayoría indígenas– fueron enjuiciados por sabotaje y terrorismo; se registraron diez casos de persecución y criminalización contra 48 dirigentes sindicales y 20 procesamientos a periodistas.

La justicia deberá ser reestructurada en el término de 18 meses, lo que requerirá de un esfuerzo verdaderamente enorme. Está previsto que este proceso, que abarca desde la capacitación y renovación de jueces hasta las necesidades totales de infraestructura en todos los ámbitos de la Función Judicial, y que también se instrumenta bajo la forma de estado de excepción, se complete hacia fines de 2012. Existe el riesgo de que, en el transcurso del proceso de reestructuración, todo el aparato judicial termine siendo transformado en un organismo absolutamente dependiente del Ejecutivo y en particular de la persona del presidente.

4. Las dos subdimensiones que conforman la dimensión *ejercicio de poder efectivo para gobernar* han tenido un comportamiento similar. La subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar* tuvo un mejor desempeño que el año anterior (gráfico 3.34), debido al leve descenso de los niveles de mortalidad infantil y a la suba en los indicadores que miden *eficiencia en educación*. A pesar de mostrar una mejor puntuación, el mejor rendimiento alcanzado por Guatemala hizo que Ecuador cayera un peldaño en el *ranking* regional, y ocupe ahora el lugar 17.º Aún está lejos de alcanzar la mejor

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.34



puntuación que fue la obtenida en el IDD-Lat 2007 y continúa lejos del promedio regional.

El desempleo bajó a 5,1% en diciembre de 2011, en tanto que el subempleo cayó a 44,2%, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El mayor valor alcanzado por ambas variables desde que se realiza el reporte de la entidad, según el índice trimestral de desempleo, fue de un 9,1% en marzo de 2010, mientras el registro de subempleo había alcanzado un pico de 53,7% en junio de 2007. El empleo se expandió debido a los altos precios del petróleo y a la sostenida inversión pública realizada por el gobierno de Correa. En tanto, la tasa de ocupación plena se ubicó en 49,9% en diciembre de 2011, cuya población activa es de 8 millones de personas, de los cuales casi 4,5 millones están empleados. Estimaciones privadas indican que el número de trabajadores en el sector privado ha descendido, mientras que los empleados en el sector público se han incrementado (se han creado entre 80.000 y 100.000 empleos públicos en este período).

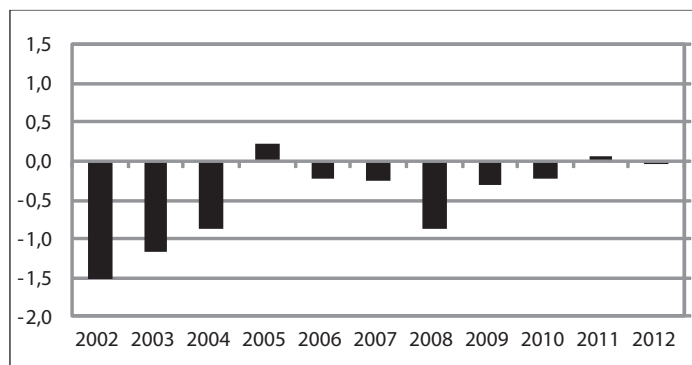
Los indicadores sociales son los que muestran una mejor cara. Se ha reducido la pobreza, aunque hay críticos que señalan que la reducción se da a un ritmo menor que en años anteriores. Hay un crecimiento en

Debilidades

- Eficiencia en salud
- Población bajo la línea de la pobreza

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.35



Fortalezas

- Inversión

Debilidades

- Índice de libertad económica
- PIB per cápita
- Endeudamiento

la tasa de escolaridad y en los indicadores de cobertura de servicios básicos. El plan nacional de desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, es el instrumento del gobierno para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. Consta de 12 estrategias nacionales y 12 objetivos nacionales, cuyo cumplimiento permitirá, en palabras del secretario nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) René Ramírez Gallegos, “consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos anhelamos para el buen vivir”. El objetivo que busca la implementación de este plan nacional es el de materializar el proyecto de la *revolución ciudadana*, entendida como el ideal del presidente para alcanzar el bienestar de la sociedad ecuatoriana; la implementación de esas ideas en el campo real se llevará a cabo por medio de los objetivos y estrategias dispuestos.

Existe una amplia y ambiciosa formulación teórica de programas estatales que está resultando difícil de aplicar y concretar en realidades, en buena parte porque quienes diseñan los esquemas y elaboran los proyectos gubernamentales no han llegado nunca a la praxis política y hay un divorcio entre los planes ansiosos y la terrena realidad.

5. En la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica*, el descenso fue leve pero sirvió para volver a colocar a Ecuador por debajo del promedio regional (gráfico 3.35), producto del peor comportamiento de algunos indicadores, entre ellos, *PIB per cápita*, *nivel de inversión y endeudamiento*. Las variables que han mejorado han sido el puntaje de *libertad económica* y la que mide la *brecha de ingreso*. A raíz de este retroceso Ecuador bajó en un lugar en el *ranking*, al puesto al 11.º, y ha perdido lo que lo había caracterizado el año anterior, cuando esta era la única subdimensión en que lograba superar el promedio regional.

El déficit fiscal se ha mantenido en porcentajes de entre 4 y 6 % del PIB. En cuanto al financiamiento, cerradas las líneas de crédito por la ideología del Gobierno de no solicitar créditos a los organismos financieros tradicionales, se ha endeudado con China a tasas del 6 % de interés anual.

La CEPAL determinó en su estudio anual que la economía ecuatoriana ha sido la de tercer mayor crecimiento entre veinte analizadas. En efecto, alcanza una tasa de crecimiento del 8 %, solo superada por Panamá (10,5 %) y Argentina (9 %). Sin embargo, analistas privados advierten que se verifica un incremento de la participación e importancia del Estado en la economía (más inversión pública) y un menor crecimiento de la inversión privada; en macroeconomía esto se conoce con el nombre de *efecto desplazamiento*, que hace que suban las tasas de interés por aumentos en el gasto público, reemplazándose la inversión privada (ante el encarecimiento de las tasas) por más inversión gubernamental.

La economía ecuatoriana se ha caracterizado por implementar una política expansiva

del gasto público desde el 2007. Si bien esta política ha generado crecimiento económico (salvo en el 2009) y recuperación del ingreso per cápita, no ha sido efectiva para disminuir los niveles de desempleo, que se han mantenido entre 7% y 8%; más bien empujó a la demanda interna, de tal forma que se incrementó el consumo de productos importados, lo que afecta a la balanza comercial y a la cuenta corriente, que cada año son más negativas.

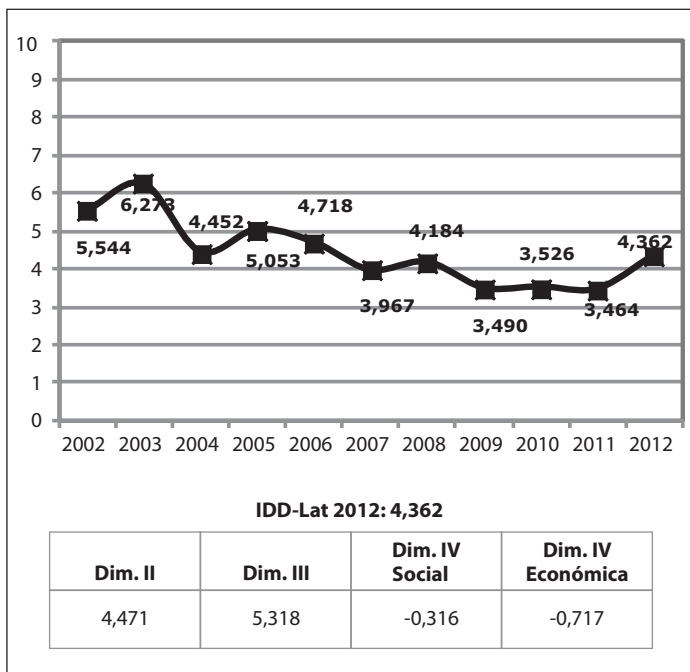
El aumento de la demanda interna por encima de la producción interna, junto con el alto valor de los productos agrícolas y materias primas en el mundo, también inciden en que el nivel de precios observado en la economía ecuatoriana sea ligeramente alto al ubicarse en 4,9% hasta noviembre 2011.

Para 2012 se espera que el gasto público se ubique en alrededor de USD 27.000 millones, tres veces más que en 2006, lo que supone un déficit fiscal de alrededor de USD 4.000 millones (7% del PIB). Este déficit deberá financiarse principalmente con deuda externa. Si bien el nivel de deuda de la economía ecuatoriana (20% del PIB) no es demasiado alto frente al de otras naciones, el reto en 2012 consiste en encontrar prestamistas, dada la volatilidad de los mercados y la situación económica mundial. El gobierno está tomando medidas para evitar la salida de divisas y proteger la balanza de pagos; de esta forma se incrementó el impuesto a la salida de capitales y se han planteado impuestos y aranceles para productos importados.

EL SALVADOR

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en El Salvador

Gráfico 3.36



1. El Salvador es uno de los países que presenta en este informe una tendencia positiva de desarrollo democrático y revierte su trayectoria negativa de los últimos años (gráfico 3.36). Ha mejorado su puntuación en un 26 % respecto al valor obtenido en el año anterior. Este ascenso le reporta un mejor lugar en el *ranking* regional, donde se ubica ahora en el noveno lugar. No obstante, continúa perteneciendo al grupo de países con bajo desarrollo democrático y continúa por debajo del promedio regional. Los resultados positivos obtenidos en esta edición se deben a un mejor comportamiento en las dimensiones *respeto de las libertades civiles y derechos políticos*, *calidad institucional y eficiencia política* y en la subdimensión *social*. La subdimensión *económica* registra nuevamente un comportamiento negativo.

La única dimensión del desarrollo democrático que supera levemente el promedio regional es la que corresponde a la *democracia de las instituciones*, con 5,318 puntos. En todas las otras, el país se encuentra por debajo del promedio regional.

Durante el 2011, el gobierno del presidente Mauricio Funes cumplió dos años de gestión al frente del país. En su balance, el gobierno presentaba una larga relación de logros, principalmente relacionados con la esfera social. Funes asumió el cargo dos meses y medio después de la victoria electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que abrió el camino al primer gobierno con mayoría de izquierda en la historia de El Salvador. El triunfo del FMLN, que apenas 15 años atrás había transitado de la insurgencia a su oficialización como un partido legal, puso fin también a 20 años consecutivos en el poder de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Funes había anticipado que la situación del país era muy difícil debido a que el modelo aplicado por ARENA, según sus palabras, había destruido el tejido productivo del país y lo había convertido en importador, incluso de gran parte de los alimentos que consumía.

Se agrega a esta situación el marco regional centroamericano, cruzado por el fenómeno del narcotráfico, con la infiltración de la sociedad y de las instituciones estatales mediante estructuras criminales paralelas, que no se logra contener, en una realidad institucional caracterizada por fuerzas de seguridad desbordadas, una justicia colapsada y un Estado frágil. La presencia cada vez más abierta de los carteles mexicanos de la droga y su creciente influencia sobre la política, en particular en los corredores de la droga en los países de América Central, así como el

incremento de los hechos de violencia, generan un cuadro de situación preocupante para El Salvador.

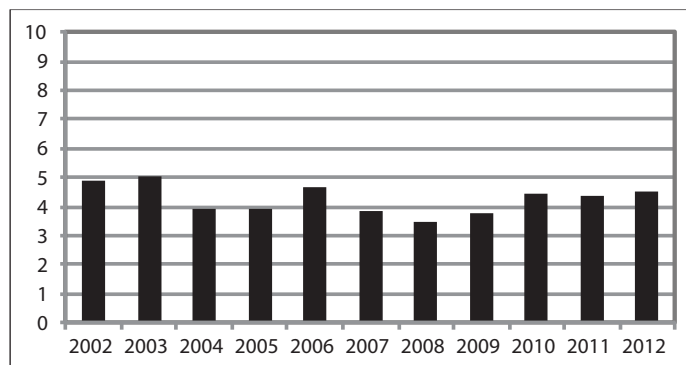
2. La puntuación obtenida en la dimensión II, que mide el *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, crece apenas un 2% por encima de la medición anterior (gráfico 3.37) y es producto del mejor resultado en el indicador de *género*, de los pobres resultados en la variable de *condicionamiento de libertades por inseguridad* y de la estabilidad en valores similares en el resto de los indicadores. Esa leve mejora observada le sirve al país para escalar un puesto en el *ranking* regional y ocupar ahora el décimo lugar. Su puntuación sigue por debajo del promedio regional.

Dentro del negativo panorama en el condicionamiento de derechos y libertades por inseguridad, el gobierno define como uno de sus logros el enfrentamiento a la delincuencia, que permitió revertir la escalada de violencia y disminuir en 28% las extorsiones. En mayo de 2011, el presidente confirmaba la existencia de una amplia red de narcotráfico en la zona norte y noroeste del país, llamada cartel de Taxis —relativo al municipio norteño de Texistepeque— en la que estaban implicados empresarios, alcaldes, diputados, policías y jueces. Asimismo, aseguraba que se indagaba acerca de la presencia del grupo narcotraficante y de sicarios conocido como Los Zetas, de México, con presencia activa en la vecina Guatemala.

Según los registros de homicidios de la Policía Nacional Civil (PNC), los crímenes ocurridos en El Salvador durante 2011 superaron a los de 2009 y 2010. El año más violento de la década anterior había sido el 2009, con un total de 4296 asesinatos. De enero a diciembre de 2011, la policía contabilizó un total de 4354 fallecidos a causa de la criminalidad en

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.37



el país, 367 más que en 2010. El Ministerio de Seguridad Pública y Justicia afirma que el 90% de los asesinatos registrados en 2011 cuentan con el sello de las pandillas, aunque la incidencia de los pandilleros en los asesinatos es materia de discusión entre los mismos organismos oficiales.

A fines del 2011, el presidente Mauricio Funes, ante el repunte de la criminalidad, decidió extender el mandato a la fuerza armada para que se involucrara en el tema de la seguridad pública, en medio de críticas de muchos sectores que temían una militarización. Con el nombramiento del militar David Munguía Payés como ministro de Justicia y Seguridad Pública, el país tiende hacia un grado más alto de militarización, lo cual constituye una violación a los acuerdos de paz de 1992, que establecían que un civil debía liderar la seguridad ciudadana, separándola claramente del rol de defensa de la soberanía nacional que es exclusivo de la fuerza armada. El presidente señaló que el nuevo papel otorgado a la fuerza armada conlleva el objetivo de combatir a las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, y criticó a aquellos que, según él, se habían anclado en el pasado por el hecho de rechazar a los militares en labores de seguridad ciudadana.

Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos
- Inseguridad
- Género en el Gobierno

A principio de octubre, un informe de Naciones Unidas situaba a El Salvador como el país con la segunda tasa más alta de homicidios en todo el mundo. Según el Estudio Global de Homicidios, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Crimen, El Salvador presentaba una tasa de 66 homicidios por cada 100,000 habitantes, en segundo lugar mundial después de Honduras, y arriba de Costa de Marfil y de otros países como Afganistán, Irak o México.

A fines de octubre y con algunas contradicciones respecto del informe mencionado, se divulgaba el informe de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo, que catalogaba a El Salvador como el país más violento del mundo. Con más de 60 asesinatos por cada 100.000 habitantes, el país lideraba la lista de los 14 más violentos de todo el mundo. De esos 14, seis eran latinoamericanos y tres de estos pertenecían a Centroamérica. A El Salvador se le sumaban, en la región, Guatemala y Honduras. "Tienen los mayores niveles de violencia letal", rezaba el informe sobre ellos, que indicaba que habían muerto más personas de forma violenta en El Salvador que en Irak, de forma proporcional, entre 2004 y 2009; tomando en cuenta que Irak figura, según este organismo, en el segundo lugar de los países más violentos de todo el planeta, seguido por Jamaica.

Ambos informes, sin embargo, no dejan lugar a dudas acerca del problema: desactivar la violencia es central para pacificar y para desarrollar la democracia en el país, pero las políticas de seguridad de los gobiernos salvadoreños no han estado, hasta el presente, a la altura de la magnitud del problema.

En otra cuestión relacionada con derechos políticos y pese a las críticas teóricas a los sistemas de cuotas para ampliar la

participación de las mujeres en la política y cargos públicos, el incremento que se observa en la región obedece principalmente a leyes que ampliaron obligatoriamente esa participación. En los países en los que no se ha reglamentado un sistema de cuotas para la mujer, la participación es menor. El Salvador es uno de los países latinoamericanos donde sucede este fenómeno, y solo el 19% de todos los cargos públicos son ostentados por mujeres.

Sin embargo, las mujeres salvadoreñas han aumentado en los últimos años su presencia en la vida política y judicial del país, como muestran las cifras que publicó el PNUD en su *Cuaderno de Desarrollo* n.º 10, *La igualdad y la equidad de género en El Salvador*. Por primera vez desde los acuerdos de paz, la Asamblea Legislativa tiene 16 mujeres diputadas. Este número es mayor a la cantidad de diputadas del período 1991-1994, cuando solo se registraban siete. Sin embargo, desde esa época hubo períodos de estancamiento e incluso retroceso en el número de mujeres en el Congreso y, en todo caso, estos números son insuficientes aún.

En el caso de El Salvador existe todavía una brecha muy importante en la participación de las mujeres en la política. Solo existe una mejora sin mayor peso en la política real en la participación femenina en la Asamblea Legislativa y en las alcaldías. El número de alcaldesas a escala nacional sí ha tenido un incremento desde las 17 que se registraban en el período de 2003-2006, hasta las 29 jefas locales en la actualidad. Sin embargo, la proporción de 16 mujeres diputadas, electas en 2009, en un total de 84 legisladores dan una participación menor aún para las mujeres. Y en el caso de las 29 alcaldesas es un número bajo respecto de un total de 262 municipalidades en todo el país y tomando en

consideración que el 52,7% de la población salvadoreña es femenina, según el último censo de 2007.

En el ramo del Poder Ejecutivo, las ministras durante la gestión del presidente Francisco Flores fueron tres, de un total de 13 ministerios; en el período de Antonio Saca fueron solo dos. Y en el actual gobierno fueron dos al inicio pero con las sustituciones que hizo el presidente Mauricio Funes, solo quedó una ministra.

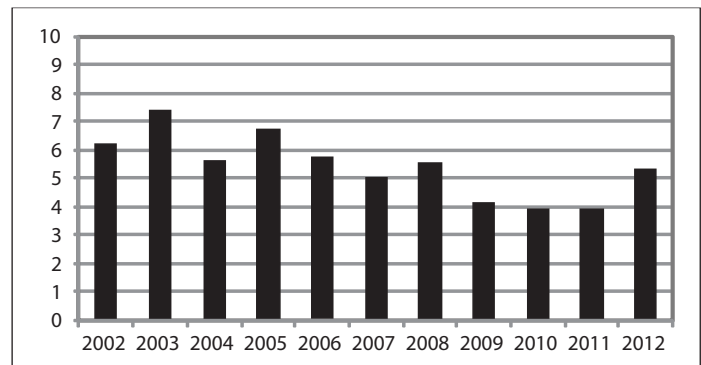
En el ramo judicial, el número de juezas ha aumentado cada año. De 1997 (190 juezas) a 2007 (291), el porcentaje de mujeres a cargo de juzgados aumentó un 9%. Aunque los jueces siempre son mayoría (344 en 1997 y 361 en 2007).

3. En la dimensión *calidad institucional y eficiencia política*, el país logra una recuperación importante, que lo lleva a superar nuevamente el promedio regional, como había sucedido en período 2002-2008. La puntuación recibida creció en más del 36% (gráfico 3.38). El comportamiento de los indicadores que componen esta dimensión ha sido variable; algunos se han mantenido estables (*participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia*), otro ha mejorado (*accountability*) y otro ha empeorado (*percepción de la corrupción*). Pero lo que ha provocado un salto cuantitativo ha sido que El Salvador no ha sido nuevamente castigado con el Factor de Anormalidad Democrática, como lo fue en la edición anterior. Gracias a ello ha ascendido en el *ranking* regional cuatro lugares, del décimo al sexto.

A inicios de su tercer año de mandato, en junio de 2011, el presidente Mauricio Funes decidió las ternas de los designados presidenciales e hizo movimientos en algunas

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.38



carteras de Estado. Los *candidatos designados a la Presidencia* eran Nicolás Salume, Silvia Aguilar, Hato Hasbún, Lorena Peña, Oscar Ortiz y Héctor Silva. De entre estas ternas, finalmente la Asamblea eligió a Nicolás Salume, como primer designado, y a Hato Hasbún, como segundo designado.

Por otro lado, realizó cambios en los ministerios, y fueron juramentados el ministro de Gobernación, Ernesto Zelayandía, quien fungía como viceministro de esa cartera y que sustituyó a Humberto Centeno Najarro, quien pasó a ser ministro de Trabajo. En el caso del viceministro de Trabajo, Calixto Mejía, su renuncia respondió al llamado que hizo el presidente Funes a todos aquellos funcionarios que decidieran hacer proselitismo, por lo que Calixto decidió abstenerse de continuar en el cargo para ir de lleno a la campaña electoral con el FMLN.

Del 31 de julio al 7 de agosto, Nicolás Salume asumió temporalmente la presidencia por ausencia de Funes y de su vicepresidente.

Al acercarse las elecciones del 2012, algunos grupos, asociaciones y sindicatos que hasta el año 2009 mantenían apoyo incondicional a Mauricio Funes, cambiaron de parecer y expresaron su descontento. Sindicalistas del sector salud, judicial,

Fortalezas

- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- *Accountability* legal y social
- Desestabilización de la democracia

estudiantes de la Universidad El Salvador, médicos, gremiales magisteriales, seguro social, lisiados de guerra, fueron solo algunas de las representaciones que daban su apoyo incondicional a Funes, pero que cumplidos dos años de su gobierno decidieron apartarse y criticar su gestión. Al igual que las mencionadas organizaciones sociales, miembros del partido que condujo a Funes a la casa presidencial se expresaron contra las políticas que el mandatario puso en marcha.

Las expresiones eran cada vez más explícitas en las convocatorias donde estaban presentes miembros del partido FMLN, como sucedió en la celebración del segundo año del triunfo del partido de izquierda en el redondel Masferrer, en marzo de 2011, pero también sucedió en la marcha conmemorativa del 1 de mayo, Día del Trabajo.

En el Parlamento el presidente logró mejor apoyo a su trabajo. Allí Funes no solo encontró el beneplácito de la mayoría de los diputados para la aceptación del Presupuesto General de la Nación, sino también para la aprobación del presupuesto para gastos y algunas leyes, entre ellas, la Ley de Proscripción de Maras, la ratificación del convenio de cooperación con Cuba, la derogación de la Ley de Reactivación de Exportaciones (*Drawback*), y la aprobación de un impuesto aplicado a las financieras de origen extranjero.

El desmembramiento del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y del Partido Demócrata Cristiano (PDC) propició el surgimiento de un nuevo actor político, Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANU), quien ha logrado hacer una aritmética positiva a sus intereses para consolidarse como partido político, otorgando su apoyo a muchas de las iniciativas del FMLN. Este inesperado apoyo sumado al del PCN ha permitido que las iniciativas del

presidente Funes sobrepasaran los votos de ARENA y facilitaran el avance de las posturas del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, el tercer año de gobierno de Funes ha presentado un estado de tensión real y pública entre él y el partido que lo llevó al poder. Las diferencias y el distanciamiento entre el gobernante y el FMLN han surgido en el plano orgánico, tanto a nivel de élites como en las bases partidarias. Durante la 28.ª Convención Nacional Ordinaria del FMLN, los medios de comunicación registraron la actitud de sus dirigentes, quienes al referirse al Gobierno no mencionaron al presidente.

Una de las causas de la tensión pública entre el presidente y su partido, y probablemente una de las más relevantes fue, como se dijo, el relevo de la totalidad de los miembros del FMLN del ámbito de la seguridad. Con la sustitución de estos en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), la Dirección General y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección General de Migración (DGM), además del relevo en la coordinación del gabinete de seguridad, el partido en el poder perdió control presupuestario, territorial, de inteligencia del Estado y además poder político al interior del Ejecutivo. Esta decisión presidencial fue duramente criticada por la cúpula y por las bases del FMLN. Se rechazó tanto el desplazamiento del partido del gabinete de seguridad, como el nombramiento de militares en retiro al frente del MJSP y la PNC.

El 27 de octubre de 2011, con una mayoría formada por diputados del FMLN y Conciliación Nacional, se aprobó con dispensa de trámites, el decreto 897 que reforma 36 artículos del Código Electoral. El decreto perseguía, según lo establecido en sus

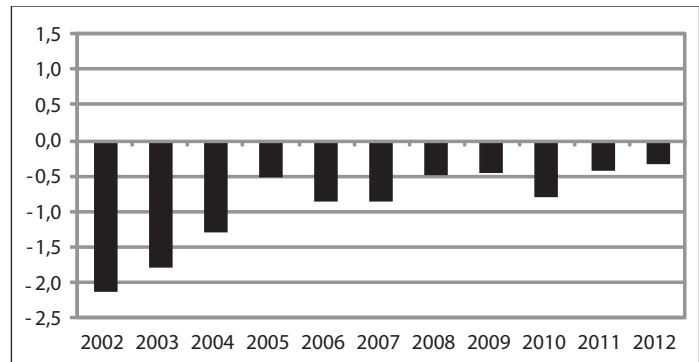
considerandos, “armonizar” la legislación por existir disposiciones “desactualizadas”. Sin embargo, de las 36 reformas mencionadas, tres se orientaban a modificar el sistema de conteo de votos de cara a los comicios de marzo de 2012, a favor de las estructuras partidarias. El proyecto se referenciaba en el decreto 758, y configuraba un mecanismo de conteo de votos que mantenía la prevalencia del orden de la lista del partido cuando se votaba por una bandera. Sin embargo, el mismo decreto 758 establecía que cuando un elector marcara simultáneamente sobre la bandera y su candidato de preferencia, el voto debía favorecer a este último.

En cambio, el nuevo decreto 897 establecía que, de marcarse la bandera y uno de los candidatos bajo esta, el voto debía entenderse a favor del orden de la lista del partido, distorsionando claramente la libertad del voto al desentenderse de la voluntad del elector por un candidato en particular, violentando en esa medida la Constitución.

El 7 de noviembre de 2011, mientras el decreto 897 todavía se encontraba en el proceso de formación de ley, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional varias de las reformas derivadas del decreto 758, especialmente en lo concerniente a la prevalencia del orden de la lista del partido. El 14 de noviembre, el presidente Funes, siguiendo el planteamiento fijado por la Sala, vetó el decreto 897 por razones de inconstitucionalidad sustentándose en el fallo recién emitido. El veto no solo defendió el orden constitucional, sino que evitó que se entrapara la regulación necesaria para definir el conteo de votos a pocos meses de las elecciones de marzo de 2012. Tal decisión refleja un acierto del presidente Funes en referencia a su compromiso con la democracia.

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.39



4. El comportamiento de los indicadores de la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar* ha obtenido en este informe el mejor valor de toda la serie (gráfico 3.39). De hecho, la puntuación general recibida muestra una ganancia de más del 40 % respecto del año anterior, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio regional. El incremento alcanzado es producto de avances en los indicadores que miden *eficiencia en salud y en educación*. Se produjeron retrocesos, nuevamente, en *desempleo y población bajo la línea de la pobreza*. Logra mejorar su ubicación en el *ranking* regional, pasando del undécimo al décimo lugar.

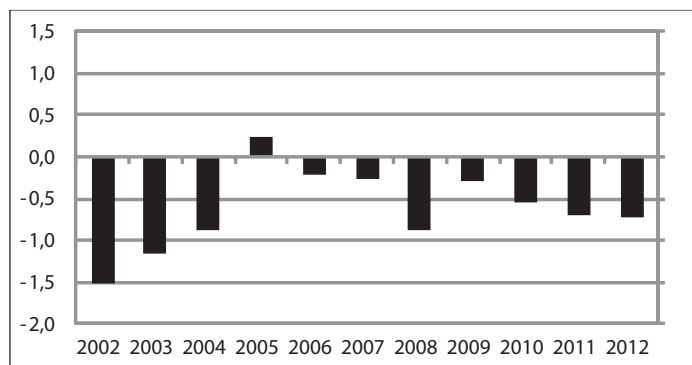
Pese a las dificultades económicas, Funes declaró la política social como una prioridad, con el objetivo de impedir que los costos de la crisis ahondaran los problemas de los sectores más desprotegidos del país. Uno de los programas insignia fue la entrega gratuita de útiles escolares, dos uniformes y un par de zapatos cada curso a más de 1.377.000 alumnos de los colegios públicos, además de un programa de alimentación. El plan, dirigido a los hogares pobres, permitió elevar la matrícula en 7 %, disminuir la deserción escolar y elevar los niveles del aprendizaje.

Debilidades

- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.40



Debilidades

- Libertad económica
- PIB per cápita
- Endeudamiento
- Inversión

Una reforma integral de la salud intentó llevar la atención médica, incluso especializada, hasta los rincones más apartados, en una política cuyo primer gesto fue suprimir los cobros en hospitales públicos.

Otro ambicioso programa, el Plan de Agricultura Familiar, dotaba de semillas, fertilizantes y asistencia técnica a 325.000 pequeños agricultores, a quienes se le facilitaron créditos a bajos intereses y cubiertos por seguros.

También, a partir del mes de mayo de 2011, el Gobierno implantó el subsidio al gas propano focalizado en unos “ochocientos mil hogares pobres del país”, que abarcaba a los consumidores de 200 kwh de energía. Este sistema suplantó el subsidio directo a las empresas gaseras, el cual también fomentaba —según el Gobierno— el contrabando. Sin embargo, no todo es perfecto: para entidades como la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), y la Cámara de Comercio, la inclusión posterior de consumidores de 300 kwh de energía, escuelas y comedores de beneficencia eran muestra de que el Gobierno “no contaba con un plan para impulsar estos proyectos”, y que con el tiempo esas políticas traerían “consecuencias negativas, que tendrán repercusiones en la población más pobre del país”.

5. En la dimensión IV, los indicadores que dan cuenta de la *capacidad de generar políticas que aseguren eficiencia económica* han tenido un peor comportamiento en comparación con el año anterior y muestra la tercera caída consecutiva desde el año 2009 (gráfico 3.40). Esto fue producto, fundamentalmente, de la caída de los indicadores de *libertad económica, PIB per cápita, endeudamiento e inversión*. La única variable que tuvo un comportamiento positivo fue la que mide la *brecha de ingresos*. A pesar del magro desarrollo producido en esta subdimensión, El Salvador sigue ocupando el lugar 14.º del *ranking*. El valor obtenido está por debajo del promedio de la región.

Entre acercamientos y amenazas, la empresa privada ha seguido un sinuoso camino en su relación con el presidente Funes. El mandatario ha hecho diversos llamados a los representantes de la mediana y gran empresa en el país, reclamando su colaboración para crear las condiciones adecuadas para mantener los puestos de empleo perdidos durante la crisis y haciéndoles saber que necesita de su acompañamiento para cumplir una de sus principales promesas de campaña: la “fábrica de empleos”.

A su vez, las entidades empresarias han hecho públicos posicionamientos respecto a la claridad que el gobierno de Funes debe mantener en cuanto a las políticas públicas, en el sentido social, económico y de seguridad, temas que según las gremiales privadas tienen gran incidencia en la proyección de la inversión nacional y extranjera.

La economía salvadoreña ha mejorado en algunos aspectos durante el 2011, al menos en comparación con el año anterior. Sin embargo, esta mejoría parcial no es

suficiente para augurar que el país está ya en la senda del equilibrio macroeconómico. Dos de los principales factores que contribuyeron a esta leve recuperación son el aumento del comercio exterior y de las remesas familiares, factores que son los pilares que dinamizan la economía salvadoreña.

El Salvador recibe crecientes flujos de remesas desde hace 30 años, lo que ha terminado por fortalecer esa dependencia entre la sociedad y la economía. La economía de El Salvador es "adicta" a las remesas familiares del extranjero, que equivalen a 17% de su PIB, lo que debe ser revertido porque no es sostenible, según estimaciones del vicescanciller para Salvadoreños en el Exterior, Juan José García. "Cada vez más necesitamos mayores niveles de remesas para seguir funcionando", señaló García.

Durante 2010, El Salvador recibió más de 3.400 millones de dólares en remesas. De enero a agosto de 2011 el país recibió 2.422 millones de dólares, casi 5 % más

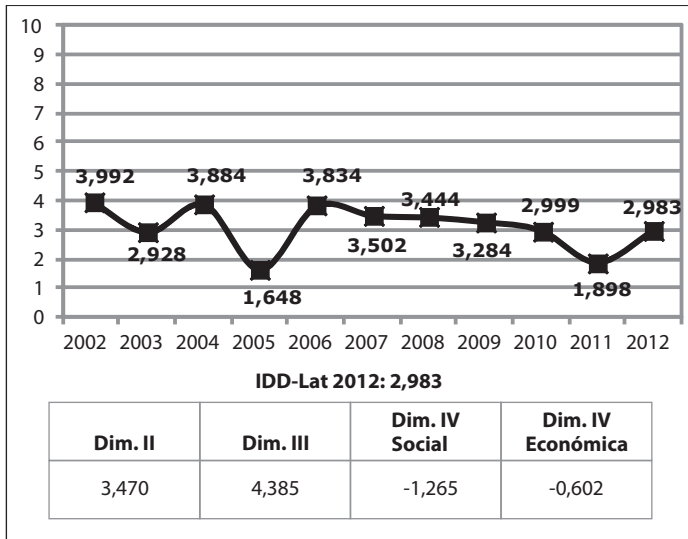
que en el mismo periodo de 2010. El 70 % del PIB de algunas zonas del país, como por ejemplo la Bahía de Jiquilisco en la costa del Pacífico, responde a remesas que provienen de Estados Unidos, y solo el 30 % se genera internamente. Unos 337.000 hogares en el país reciben remesas familiares de los 2,8 millones de salvadoreños que viven en el extranjero (2,5 millones de ellos en Estados Unidos). "Eso no es sostenible. Cualquier crisis o amenaza de crisis en esta economía (estadounidense) va a tener un impacto directo en los hogares", como sucedió con la pasada crisis económica, que hizo caer el flujo de remesas.

El rubro de las finanzas públicas ha presentado un debilitamiento con respecto a 2010. Esto a pesar de un incremento considerable en los ingresos totales a las arcas del Estado, que ha tenido mejores niveles de recaudación, pero, al mismo tiempo, un alto índice de gastos.

GUATEMALA

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Guatemala

Gráfico 3.41



1. Guatemala ha crecido en desarrollo democrático con respecto al 2011 (gráfico 3.41), aunque esto no le significa poder salir del grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Ha mejorado su ubicación en el *ranking* regional, pasando del último lugar al 13.º Su mejor puntuación se debe a mejores resultados en las dimensiones II, *democracia de los ciudadanos*, y III, *democracia de las instituciones*. Las subdimensiones *económica* y *social* presentan peores resultados con respecto al 2011. La puntuación general que obtiene Guatemala rompe una tendencia negativa que había mostrado desde el 2007; sin embargo, el valor actual dista de acercarse a los mejores de la serie, obtenidos en 2002 y 2004. El índice logrado por Guatemala se encuentra muy por debajo del promedio regional.

El presidente Colom no logró cumplir sus grandes promesas de campaña: reducir la pobreza y la violencia. Un 51% de los 14 millones de guatemaltecos vive en la

pobreza, y el país sigue sumido en la violencia, con un promedio de 18 muertos al día, una de las mayores cifras de América Latina. Seguramente su gobierno será recordado porque no logró encontrar la forma de conciliar los intereses de los distintos sectores sociales y políticos del país, y no logró desplegar las capacidades necesarias para enfrentar los problemas primordiales del país. El índice de desarrollo humano 2011 ubicó a Guatemala en el lugar 131 de 187 países calificados, únicamente por encima de Haití en toda América. En ese mismo índice, en el 2008, año en que Álvaro Colom tomó posesión de la presidencia, Guatemala ocupaba el lugar 118, por lo que durante el período presidencial de Colom, bajó 13 escaños en la clasificación. En nuestro índice de desarrollo democrático el país no logró salir de los últimos lugares: en este informe 2012 (con datos de 2011) se ubicó en el 14.º lugar; en 2011 estaba último entre los 18 países de la región; y en los dos años que le precedieron ocupó el 15.º lugar y el 17.º respectivamente. El único legado de Colom será su programa en favor de las zonas empobrecidas.

El año 2011 estuvo fuertemente marcado por la realización de las elecciones presidenciales del 11 de septiembre, en las que Otto Pérez Molina del Partido Patriota (PP), con 36,10% de los votos, y Manuel Baldizón del Partido Libertad Democrática Renovada (LIDER), con un 22,7%, quedaron en los dos primeros lugares, habilitados para competir en la segunda vuelta del 6 de noviembre. Allí Otto Pérez resultó proclamado futuro presidente de la República para asumir el 14 de enero de 2012, al obtener 53,7% de los votos.

Tras la confirmación de su triunfo en los comicios, Pérez Molina prometió solucionar los problemas de seguridad, que crece en círculo vicioso con la violencia y la pobreza.

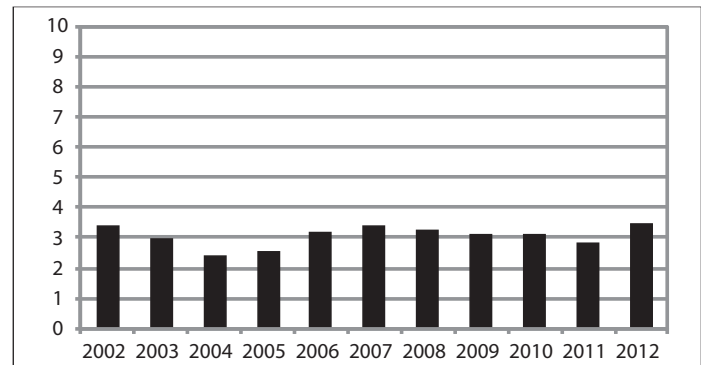
En su primera intervención tras ser proclamado vencedor, dijo que “desde el primer día los guatemaltecos se van a dar cuenta que tienen un presidente comprometido a defender la vida y la seguridad. Un presidente que le va a dedicar el 60% de su tiempo a temas de seguridad”. A la vicepresidencia llega Roxana Baldetti Elías, licenciada en periodismo por la Universidad Nacional de San Carlos, la primera mujer en la historia del país en llegar a la segunda magistratura.

2. El valor obtenido en la dimensión *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, aunque crece, sigue estando por debajo del promedio regional; muestra de ello es que Guatemala pasa a ocupar, nuevamente, el lugar 17.º en el ordenamiento regional, superando solamente a su vecina Honduras (gráfico 3.42). En general, casi todos los indicadores han mejorado, especialmente el de *género* y esto explica la mejor puntuación recibida en esta dimensión, pero de ninguna manera este leve avance significa que Guatemala pueda sentirse orgullosa de los resultados. Muy por el contrario, la puntuación obtenida en cada uno de los indicadores muestra resultados pobres en todas las áreas que abarca esta dimensión; especialmente aquellas relativas a la *inseguridad* y a los *derechos políticos*.

Una de las prioridades para el próximo mandatario será frenar la epidemia de violencia contra las mujeres. Las autoridades reconocen avances en la materia, sobre todo en promover la *cultura de la denuncia*. Pero a pesar de que se han hecho más de 42.000 denuncias por violencia contra la mujer en el transcurso del 2011, cuatro veces más que en 2010, solo 343 han concluido en una condena. La ONU denunció niveles de feminicidios *sin precedentes* en Guatemala, con 448

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.42



mujeres asesinadas entre enero y agosto de 2011, y criticó la falta de financiación y aplicación de los programas para prevenir la violencia machista.

Al nuevo mandatario le aguarda el reto de liderar uno de los países más violentos del mundo, amenazado por la llegada de células de los carteles mexicanos y la expansión del narcotráfico entre bandas locales. Guatemala es el séptimo país del mundo con más muertes violentas (43 por cada 100.000 habitantes, por detrás de Irak, El Salvador, Colombia o Venezuela, entre otros), según el informe Carga Global de la Violencia Armada, presentado por el Instituto Superior de Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.

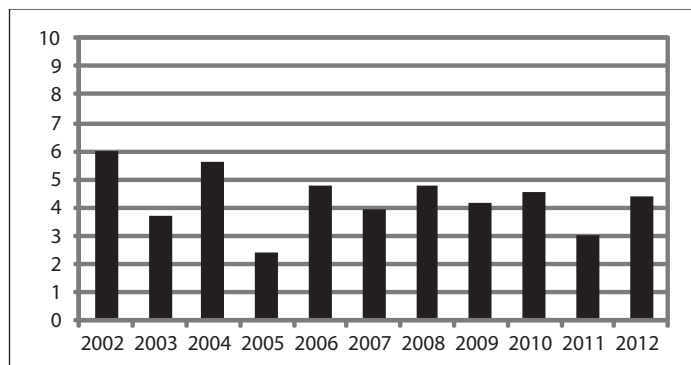
Aunque el gobierno de Colom dice haber reducido el número de homicidios en un 9% durante su mandato, la inseguridad es todavía la principal preocupación de los guatemaltecos. Todavía se producen cerca de seis mil asesinatos u homicidios al año en un país en el que pareciera que corrupción y violencia van de la mano y ponen en jaque a las instituciones de la democracia. El desarrollo de la delincuencia organizada sigue avanzando junto con la proliferación del narcotráfico. Aunque Colom afirmó que para él era “más fácil combatir el narcotráfico que el robo de celulares”, poco éxito hubo ante

Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y los derechos políticos
- Inseguridad
- Género en el Gobierno

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.43



Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- *Accountability* legal y social
- Desestabilización de la democracia

el avance del narcotráfico y el poder de los narcos. La captura de capos y la incautación de drogas no bastaron para detener este flagelo. La complejidad de este fenómeno, la presión de carteles internacionales para los que el territorio guatemalteco es vital para el tránsito de sus mercancías ilegales y la capacidad de reclutamiento de delincuentes cada vez más sanguinarios, tornan casi irrelevante la incautación de cocaína o la captura de algunos capos.

Las escuchas telefónicas a presuntos delincuentes o el fortalecimiento de la oficina de protección al testigo son algunas de las medidas adoptadas por el gobierno contra el crimen organizado, aunque todavía queda mucho por hacer. Queda pendiente para el próximo gobierno profundizar la autonomía del Ministerio Público, garantizar el ascenso de fiscales sobre la base de sus méritos profesionales y depurar las instituciones de justicia, entre otras importantes materias en la lucha contra el crimen.

3. También han mejorado los resultados en la dimensión *calidad institucional y eficiencia política* en casi un 48% (gráfico 3.43), prácticamente compensando la caída del año anterior. Se destacan los comportamientos positivos de los indicadores *partidos políticos*

en el Poder Legislativo, *accountability* y *desestabilización*. Nuevamente el indicador de *percepción de la corrupción* muestra un retroceso. Guatemala subió del 15.º lugar del *ranking* regional al 11.º, con una puntuación de 4,385. Este incremento no alcanza todavía para que el país logre superar el promedio regional.

Colom, en su rol de presidente y al mismo tiempo líder de la mayoritaria Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no pudo o no supo construir la *base política* para aprobar las reformas que había prometido en la campaña de 2007. Una muestra fue la frustración del intento de aprobación de la reforma fiscal y de otras iniciativas. Se puede atribuir parte del fracaso a la propia heterogeneidad de su movimiento político, pues en él había de todo: empresarios que se oponen a pagar más impuestos junto a comunistas de la línea dura.

Se habían generado muchas expectativas y se abrieron muchas esperanzas con la llegada de la UNE al gobierno, con la expectativa del desarrollo de una agenda predominantemente social. Sin embargo, las divisiones en las filas de la UNE fueron fatales.

En agosto una corte había sentenciado a seis mil años de prisión a cuatro exmiembros de las fuerzas especiales guatemaltecas o *kaibiles* por la llamada masacre de Dos Erres en 1982, cuando 201 personas habían sido asesinadas en la región nortea del Petén. Una sentencia *ejemplar* por crímenes contra la humanidad durante el conflicto armado interno. A ello se sumó la detención, en junio, del general retirado Héctor Mario López Fuentes, jefe militar bajo el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt. El exjefe del Estado Mayor del Ejército, de 81 años, estaba acusado de ser el autor intelectual de 12 masacres y varios casos de asesinato que habían

dejado más de 300 víctimas mortales. Esa fue la primera vez en la historia de Guatemala en la que el Ministerio Público presentó cargos de genocidio contra un militar de tan alto rango.

Por estos procesos judiciales, la máxima responsable de esta institución —la única mujer que fue electa para el cargo de Fiscal General— es también la primera que logró ganarse la confianza entre organizaciones civiles y de derechos humanos. El presidente electo se comprometió a mantenerla en su cargo, lo que sería un hito en un país donde la duración media de un fiscal general en el puesto es de menos de dos años, aunque el mandato constitucional es de cuatro.

El presidente electo Pérez Molina logró capitalizar en votos el descontento de una población harta de la situación que coloca a Guatemala como uno de los países de América con la mayor tasa de homicidios. Pérez Molina quiere fortalecer al Ejército y a las fuerzas civiles, a fin de combatir la delincuencia agravada con la creciente presencia de sangrientos carteles del narcotráfico mexicano, como los Zetas.

Pérez Molina se mostró consciente de que casi la mitad de los electores votó por la propuesta del otro candidato, por lo que invitó al candidato de LIDER a sumarse a su proyecto de Gobierno, al que también esperaba que se unieran otras fuerzas políticas del país.

En cuanto a sus objetivos prioritarios reafirmó que, además de la seguridad, la creación de empleo y el desarrollo de las zonas rurales del país serían los ejes centrales de su tarea.

El nuevo gobierno deberá demostrar al inicio de su gestión que cuenta con suficiente capital político para obtener la aprobación de las reformas más urgentes, como son la reforma integral del sistema impositivo, la sanción de un estatuto para funcionarios y

la reforma de la ley electoral y de partidos, de parte de un Parlamento fuertemente fragmentado, ya que de los diputados electos no se puede esperar un fuerte fervor reformador. Por el contrario, la política clientelista en el Congreso parece haber salido fortalecida de las elecciones de 2011.

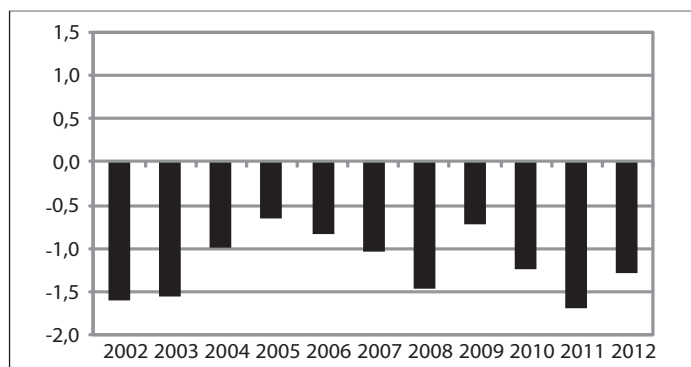
La campaña electoral dividió al país, puso de manifiesto el potencial de conflictos existente e hizo ver a los guatemaltecos la debilidad de las instituciones democráticas, sobre todo el deterioro del Tribunal Electoral.

Asimismo, y pese a la labor de la Comisión de Naciones Unidas contra la Impunidad, Guatemala casi no puede presentar avances en la lucha contra las estructuras paralelas en el Estado y en la sociedad. Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en México, Guatemala se ha convertido en el lugar de retirada ideal para los carteles de la droga. Se estima que en aproximadamente un 40 % del territorio nacional el Estado ya no ejerce en forma exclusiva el monopolio de la fuerza. Cabe esperar que el Gobierno enfrente una fuerte presión para alcanzar una mejora en las condiciones de seguridad; sin embargo, este problema no puede ser atacado en profundidad si la lucha queda limitada al plano nacional.

Según el índice de percepción de la corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, Guatemala bajó nuevamente su puntuación, situándose con 2,7 puntos sobre 10 y posicionada en el lugar 120.º entre 182 países, solo por encima de Nicaragua, Honduras y República Dominicana, de toda América Latina. Este puntaje es el segundo más bajo de los últimos 13 años, solo empeorado en 2004 cuando el país obtuvo 2,4 de 10 puntos posibles. Siempre se ha mantenido en los últimos lugares, solo que ahora es mucho más grave, “porque no hay una política

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.44



consistente en materia de transparencia, lo que ha habido son puras ocurrencias en cada administración”, dijo a este respecto Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, la contraparte en el país que ayuda a realizar el índice de percepción de la corrupción. Uno de los aspectos que más afectó fue la falta de legislación al respecto. Hasta el momento, a pesar de los intentos, el Congreso no logró aprobar la Ley del Secreto Bancario, ni la Ley Anticorrupción, ni la Ley Antievasión ni la Ley de Enriquecimiento Ilícito. “El Congreso es un aliado perfecto para mantener el statu quo de la corrupción”, sostuvo el citado Marroquín.

4. Con respecto a la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren bienestar*, Guatemala ha conseguido mejorar la puntuación del 2011, que había sido la peor de la serie. De todas formas, se mantiene lejos del promedio regional (gráfico 3.44). Su rendimiento en esta subdimensión se explica por las mejoras obtenidas en las variables correspondiente a *mortalidad infantil*, *gasto en salud* y *desempleo*; y por los pobres resultados en los indicadores que miden *pobreza*, *gasto en educación* y *matriculación secundaria*. El mal desempeño del país en estas variables da cuenta de una situación social con enormes diferencias entre los distintos estratos, con una gran

parte de la población en condiciones de extrema pobreza. Guatemala tiene mucho camino por recorrer hasta lograr valores similares al promedio de la región. Su puntuación final ubica al país en el puesto 16.º del ranking regional, subiendo un peldaño.

En referencia a la educación, el gobierno del presidente Colom terminó con un ciclo escolar de 90 días, cuando oficialmente los ciclos escolares anuales deben durar alrededor de 195 días. Los paros encabezados por el líder sindical Joviel Acevedo y la falta de respuesta del Gobierno frente a los requerimientos de los maestros desde el inicio de la gestión de Colom fueron los detonantes de esta situación. También el déficit en infraestructura es importante y no proporciona un panorama optimista para el futuro inmediato.

En el tema del empleo, el presidente Colom había prometido en su campaña electoral la creación de 700.000 trabajos nuevos. Sin embargo, la tasa de desempleo no se redujo, sino que más bien aumentó de 3,2% en el año 2007 hasta 5,9% en el año 2010, según información del Ministerio de Trabajo, y esto sin tomar en cuenta que el 75% de la población guatemalteca aún se desempeña en la economía informal.

Un logro importante del gobierno fue la implementación del programa social Mi Familia Progresá, por medio de transferencias condicionadas y bolsas solidarias. Es el primer programa social que realmente ha sido ejecutado con constancia, y seguramente seguirá existiendo por muchos años más. No obstante, el alto grado de discrecionalidad con el que se implementa le resta legitimidad. El programa de transferencias condicionadas, que consiste en entregar Q 300 a las familias indigentes para que lleven a sus hijos a la escuela y a los hospitales, es un buen paliativo pero claramente no resuelve

Debilidades

- Eficiencia en salud y en educación
- Población bajo la línea de la pobreza

el problema de la indigencia y de la pobreza estructural. Los niveles más extremos de la pobreza se dan entre la población indígena, que afecta al 73 % de los más de 5,8 millones de personas de las diferentes etnias, que sufren discriminación y exclusión, también de los programas estatales.

El presidente Colom reconoció que, a pesar de lograr algunos avances en su mandato, deja “profundos rezagos”, tales como la pobreza e inseguridad que deberá enfrentar Otto Pérez.

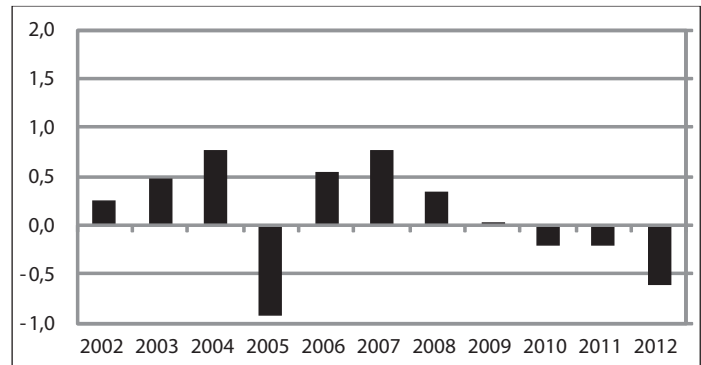
5. Nuevamente, el valor de la subdimensión económica vuelve a estar por debajo del promedio y agrava la caída que se había verificado el año anterior (gráfico 3.45). Los indicadores que descienden son el puntaje en el índice de libertad económica, PIB per cápita, endeudamiento e inversión. La única variable que muestra un leve repunte es la que mide brecha de ingreso. Por este peor desempeño, Guatemala desciende dos lugares en el ranking regional, pasando del 11.º lugar al 13.º, ubicándose por debajo del promedio regional.

La falta de transparencia presupuestaria y el gasto ineficiente del Gobierno contribuyeron a que la deuda externa contraída para sufragar las políticas públicas haya aumentado desde los USD 3908 millones en el año 2008 en que tomó posesión, a USD 17.500 millones en el 2011, es decir, un aumento de casi 448%. Por otro lado, la deuda interna también ha ido en aumento durante este período de gobierno, pues de Q 24.920 millones en el año 2008, cuando Colom tomó el cargo, ha ascendido a Q 40.310 millones en el año en que dejará la Presidencia, es decir, un aumento aproximado del 62%.

En gran medida, las políticas del programa de gobierno del nuevo presidente, Otto

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.45



Pérez, dependerán del desempeño económico del país. Existe un serio riesgo, en medio de la crisis económica internacional, el estancamiento y la ausencia de crecimiento robusto en Estados Unidos, un mercado al que Guatemala está muy atado. El país se encuentra en una especie de círculo vicioso: para solucionar la criminalidad tiene que incrementar el crecimiento, y para aumentar el crecimiento tiene que generar inversión; pero para generar inversión tiene que reducir la criminalidad.

El déficit que arrastra el Estado afectará su capacidad de financiar cualquier tipo de programa. Y restringirá desde el inicio las intenciones que tenga el gobierno de invertir en programas sociales e incluso en políticas de mayor seguridad.

Según el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe presentado por la CEPAL a finales de 2011, Guatemala estaba en un proceso económico ascendente después del *magro* crecimiento económico de 2009. El crecimiento preliminar de 2011 fue de 3,3 %, superior al 2,8 % de 2010 y al 0,5 % de 2009. Sin embargo, también resaltó que el país tiene una inflación interanual de 7,2 %, un déficit fiscal en torno al 2,9 % del PIB y un déficit comercial de más del 11 % del PIB.

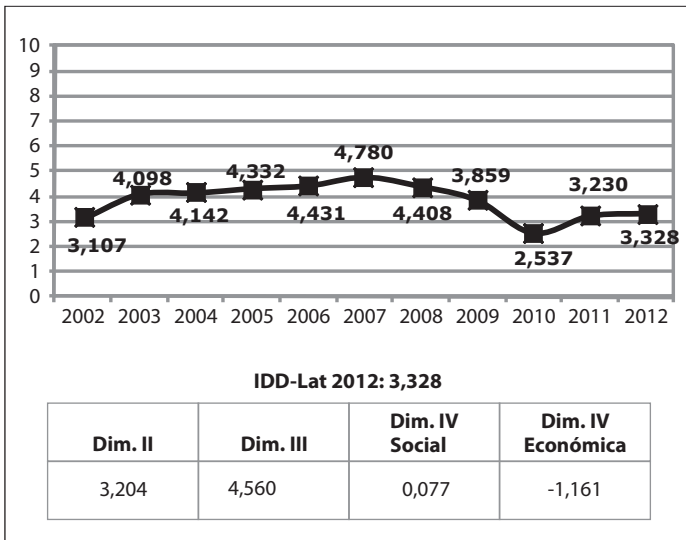
Debilidades

- Índice de libertad económica
- PIB per cápita
- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Inversión

HONDURAS

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Honduras

Gráfico 3.46



1. Honduras ha mejorado nuevamente su puntuación final, en más del 3%. En 2011 se produjo un crecimiento más leve con respecto al año anterior, lo que significa que el país no ha recuperado los valores por encima de los 4,000 puntos que mantuvo en el período 2003-2008, antes de su grave crisis institucional de 2009-2010. A pesar de la mejora de los últimos dos años, aún continúa siendo un país con bajo desarrollo democrático (gráfico 3.46). Ha recuperado dos posiciones en el *ranking*, pasando del 14.º lugar al 12.º Este comportamiento positivo se debe a la recuperación en la dimensión *calidad de las instituciones y eficiencia política*. Un leve retroceso se da en la dimensión *respeto de las libertades civiles y derechos políticos* y también en las subdimensiones *social y económica*.

En un tránsito hacia la finalización de la crisis político-institucional generada por la salida forzada del poder del presidente Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009, Porfirio Lobo

Sosa asumió el poder de la nación el 27 de enero de 2010. El presidente Lobo cumplió en enero de 2011 su primer año de gobierno, marcado por la herencia de una alta inestabilidad política, la asfixia económica y el aislamiento de Honduras de la comunidad internacional. Aislado, sin recursos y con un país dividido y polarizado, Lobo había asumido un mandato de cuatro años, en lo que se consideraba una de las elecciones más votadas en el país, y con los retos de un gobierno que debía encauzar a Honduras en el fortalecimiento institucional y participativo de la democracia.

De la herencia de problemas que recibió, Lobo ha logrado enfrentar con relativo éxito algunos, tales como la ruptura del aislamiento internacional y la consecución de recursos económicos para el 2011, tras la suscripción de un acuerdo *stand by* con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como los primeros pasos para la reconciliación del país con la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Con una calificación positiva del 51%, los hondureños evaluaron el primer año de la administración Lobo Sosa. Esta calificación muestra que la gestión gubernamental es reprobada por una parte importante de la sociedad, con base en los principales fracasos atribuidos a la actual gestión, que son el crecimiento de la violencia e inseguridad, el desempleo, la situación económica, el alto costo de vida y la falta de cumplimiento de las promesas de campaña.

El 22 de mayo se firmó el Acuerdo de Cartagena de Indias por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el canciller de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. El 1 de junio de 2011, la asamblea general extraordinaria de la OEA decidió la reincorporación de

Honduras al seno del organismo. El 5 de junio, en la asamblea general de la OEA realizada en El Salvador, Honduras participó con plenos derechos.

2. La dimensión II, que mide la *democracia de los ciudadanos* en derechos y libertades, desciende en apenas un 4% con respecto al año anterior (gráfico 3.47). Este descenso es producido por el retroceso de algunos indicadores y la permanencia de otros en valores muy mediocres. Por ello Honduras ocupa el último lugar del *ranking* y desciende una posición con respecto al año anterior. El índice hondureño de *democracia de los ciudadanos* sigue estando muy por debajo del promedio de la región. En este marco de deterioro destacan la baja puntuación recibida en el *índice de libertades civiles y de derechos políticos* y los aún altos niveles de *inseguridad* que sufre la ciudadanía hondureña.

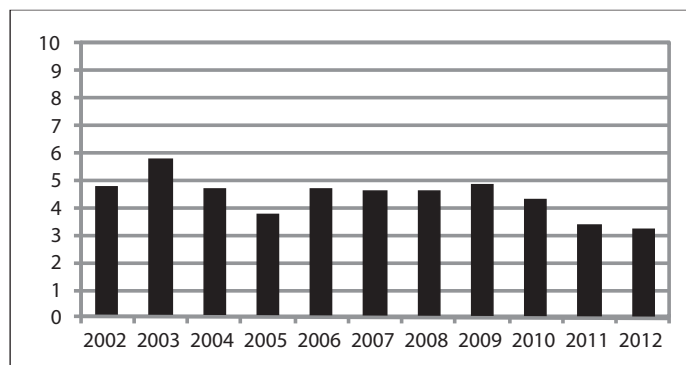
Entre los muchos déficits que tiene la administración de Lobo Sosa en su primer año de gobierno, la nota roja la encabezan la inseguridad, la violencia y el avance del crimen organizado. Honduras no puede revertir las cifras de muertes violentas. A ello se suma el avance de los carteles de la droga en zonas estratégicas del país que si bien no pueden considerarse aún como *territorio pleno* de los capos mafiosos, ese camino se abre peligroso y veloz.

En defensa de estas cifras, las autoridades dicen que ese crecimiento de la violencia es porque no fue "atacada" en los últimos cuatro años, pero las historias de la prensa revelan que en ese círculo vicioso la complicidad policial con el crimen es preocupante, sin que se vean esfuerzos reales de depuración policial.

Solo a nivel de percepción, la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA de

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.47



El Salvador y el ERIC de Honduras, de la comunidad jesuita, indica que un 51% de la población hondureña considera que la presencia del narcotráfico en el país *ha aumentado*, mientras un 23% de la ciudadanía reveló haber sido víctima directa de un hecho delictivo en el transcurso del 2010. Un dato revelador relacionado con la imagen de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública es que la mitad de los entrevistados (50,8%) cree que la policía está involucrada con la delincuencia, mientras que solo un poco más de la quinta parte (22,9%) considera que la policía protege a los ciudadanos frente a los delincuentes.

El presidente Porfirio Lobo anunció, en octubre, que iba a incrementar el número de policías y militares para frenar la violencia en el país, y reiteró que no estaba satisfecho con lo que se estaba haciendo en materia de seguridad. No precisó cuántos nuevos policías tendría la Secretaría de Seguridad, que ya disponía de unos 14.000 agentes.

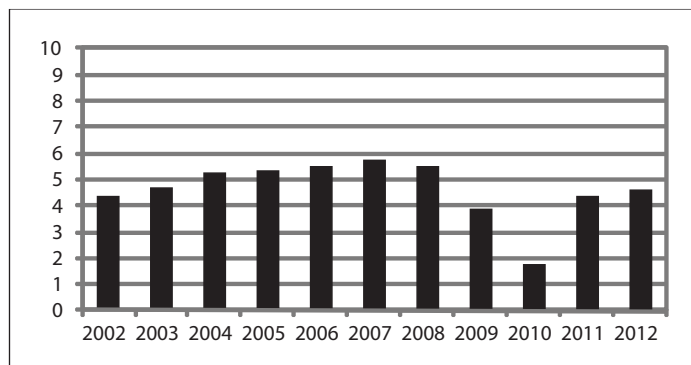
El gobernante también anunció que dividiría el país en ocho regiones para ejercer un plan de seguridad efectivo con la policía y el ejército. Eso implicará la contratación de más policías y militares, para lo que hacen falta recursos económicos de los que no se dispone, pero el secretario de Finanzas, William

Debilidades

- Índice de libertades civiles y derechos políticos
- Inseguridad
- Género en el Gobierno

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.48



Fortalezas

- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- *Accountability*

Chong Wong tiene instrucciones de buscar esos fondos, indicó Lobo. Dos de las ocho regiones estarán constituidas por Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más importantes de Honduras.

3. El valor obtenido en *calidad institucional y eficiencia política* ha sido nuevamente más alto que el del 2011 (gráfico 3.48) y esto es producto principalmente del aumento producido en los indicadores de *percepción de la corrupción* y de *desestabilización*.

El resto de los indicadores se mantuvo estable en valores no tan óptimos, salvo la variable de *accountability*, que ha descendido en un 14%. En esta dimensión se ubica por debajo del promedio regional y baja tres posiciones, pasando del sexto al noveno lugar.

El primer aniversario del gobierno de facto de Porfirio Lobo estuvo marcado por una marcha de los movimientos sociales en su contra. El Frente de Resistencia exigía una asamblea constituyente y la anulación de los juicios contra el mandatario Manuel Zelaya. Es importante destacar que el presidente Porfirio Lobo había impulsado una reforma constitucional, que fue aprobada el 11 de enero de 2011 por el Congreso y que permitió la realización del plebiscito y el

referendo para la legislación de la reelección presidencial.

El tema de los derechos humanos ha sido un punto gris en la administración del presidente Lobo, ante las denuncias de continuidad de violaciones humanitarias que caracterizaron la crisis política de 2009. Si bien el Gobierno ha reiterado que es y será respetuoso de los derechos humanos, los asesinatos de periodistas (diez en un año) y las denuncias sobre violencia política, entre otras, son señales que preocupan a la comunidad internacional por los niveles de impunidad con que se han manejado.

Así, con las cartas puestas en la mesa, Lobo se apresta a ejecutar las reformas políticas recientemente aprobadas, con las llamadas *ciudades modelos* con las cuales busca despegar a Honduras y ponerla a competir con Singapur y Hong Kong, según sus analistas económicos.

La agenda internacional desplazó temas básicos como la pobreza, el empleo, la seguridad, la salud, la educación y la corrupción, entre otros aspectos. Los dos años del presidente de la República tienen aspectos negativos y positivos. Uno positivo es que logró estabilizar el reconocimiento del país a nivel internacional; sin embargo, el presidente de la República no ha podido ejercer el liderazgo que necesita el país.

4. El peor valor obtenido en la subdimensión *social* se origina en un pobre rendimiento del país en los indicadores de *gasto en salud, desempleo y pobreza* (gráfico 3.49). El resto de los indicadores muestra avances, especialmente el de *mortalidad infantil* y el de *matriculación secundaria*. Se estabiliza su permanencia en el séptimo lugar del *ranking* regional. Su puntuación se ubica levemente por debajo del promedio.

El presidente Lobo destacó los logros que tuvo el país en materia política y social. Incluyó entre esos logros el reconocimiento internacional a su gobierno, la instalación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para indagar sobre lo ocurrido antes, durante y después del golpe del 28 de junio de 2009, y las obras ejecutadas en favor de los sectores más pobres.

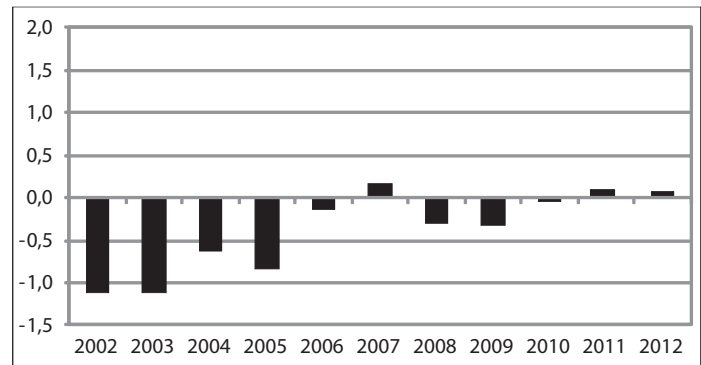
Tras el incumplimiento de la meta de 200 días de clases, el presidente aseguró que no iba a pagar a los docentes ausentes, quienes organizaron paros educativos en exigencia de su salario aun sin dar clases. Pese a que el Gobierno se mantuvo al día con los pagos salariales, los maestros continuaron con sus paros. En otros aspectos del tema educativo, la administración Lobo logró estructurar la Ley Fundamental de Educación y una nueva Ley del Instituto Previsional del Magisterio (Inprema), aunque todavía no se alcanzaba el ansiado sueño de los 200 días clases en el sistema educativo. Las huelgas y enfrentamientos de los maestros con el Gobierno impidieron que durante el 2010 y 2011 los niños y jóvenes recibieran una educación de calidad, que el presidente había prometido durante su campaña.

En materia de salud, si bien se han realizado esfuerzos por mejorar y equipar los centros asistenciales, aún existe una significativa cantidad de hondureños fuera de los servicios de salud.

Con relación a la disminución de la pobreza, el gobierno ha enfocado sus esfuerzos en la entrega del denominado Bono 10 Mil, que a dos años de gobierno ha llegado a unas 300.000 familias de escasos recursos en todo el país. La iniciativa consiste en la entrega de diez mil lempiras al año (833 por mes) a todas las madres solteras de escasos recursos, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela y acudan a los centros de salud. El titular del

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.49



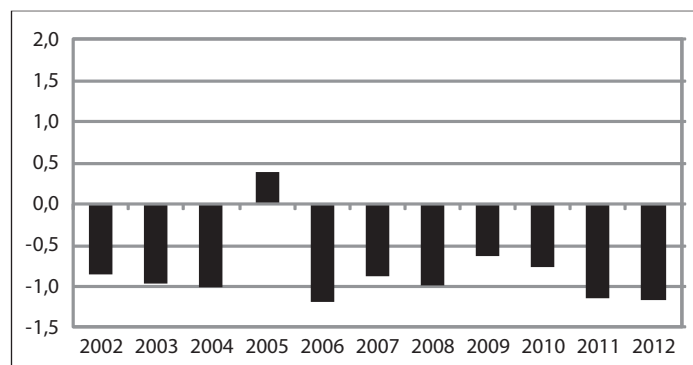
Ejecutivo proyecta, al término de su gobierno, beneficiar a más de 600.000 familias en todo el país. El programa se lanzó el 21 de marzo de 2010 y la cantidad de diez mil lempiras se entregaba a lo largo de doce meses. Al finalizar los cuatro años de esta gestión, se espera reducir la pobreza extrema de 43 % a 37 % y el coeficiente de desigualdad (Gini) de 0,54 al 0,51.

5. En lo relativo al *desarrollo económico*, el otro componente de la dimensión IV, *poder efectivo para gobernar*, las mejores puntuaciones recibidas en las variables de *brecha de ingreso* e *inversión* no logran compensar las caídas registradas en los indicadores de *libertad económica*, *PIB per cápita* y *endeudamiento*, lo que ha generado que Honduras muestre un leve descenso en esta subdimensión (gráfico 3.50) y obtenga su tercer peor valor en la serie. No obstante, al no ser el único país con problemas en esta materia, logra mantener el lugar 16.º en el *ranking*, que ya había ocupado el año anterior y también en el 2008. Su índice continúa muy por debajo del promedio regional.

Durante su campaña, Lobo había prometido generar al menos 800.000 nuevos empleos anuales hasta reducir en diez puntos porcentuales la población con problemas de

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.50



Debilidades

- PIB per cápita
- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Inversión

empleo. Sin embargo, el país cerró el 2011 con la generación de apenas 200.000 nuevos empleos, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La falta de seguridad ha impedido un mayor repunte en las inversiones en el país. Otro aspecto en el que la administración Lobo está en deuda es el relacionado con

el manejo adecuado de los recursos del Estado. Si bien el año anterior el gobierno aprobó un Plan de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la transparencia en el gobierno ha quedado en dudas tras la aprobación de *oscuros* contratos. Uno de ellos es el relacionado con la compañía de 100 megavatios de energía sucia, fuertemente cuestionada por diversos sectores de la sociedad, y también los contratos aeroportuarios aprobados por el Congreso Nacional y después vetados por el Poder Ejecutivo.

Hay que recordar que a finales de 2011 el país quedó fuera de los beneficios de la Cuenta del Milenio, debido a que Honduras no logró superar cuatro de los 21 indicadores que le permitirían acceder a la iniciativa. Uno de esos indicadores era el relacionado con la percepción de la corrupción en el país.

MÉXICO

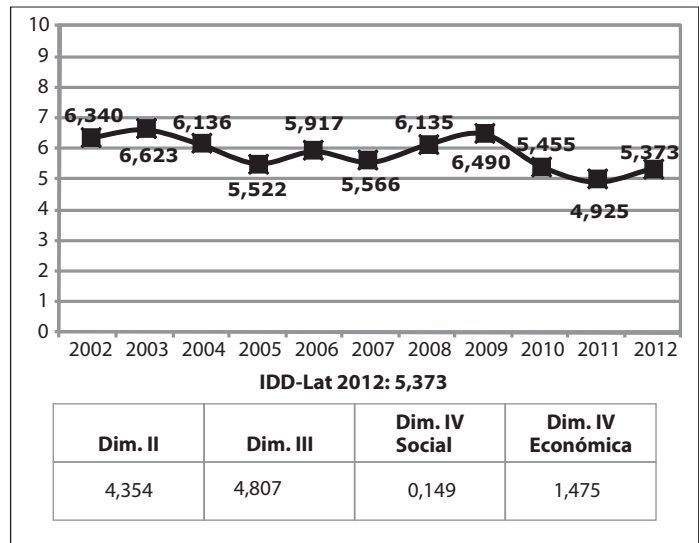
1. México ha mejorado este año su puntaje del índice de desarrollo democrático en un 9%, alejándose del peor valor de su serie, que fue obtenido el año anterior (gráfico 3.51). Forma parte del grupo de países con desarrollo democrático medio. El desempeño de los otros países de la región le hace mantener su ubicación en el séptimo lugar del *ranking* y continuar integrando el selecto grupo de países que está por encima del promedio. El comportamiento de las dimensiones ha sido parejo; en casi todas ellas han tenido un mejor comportamiento, salvo la subdimensión *social*.

La permanente tensión entre orden y violencia, en el marco de la *guerra contra el narcotráfico* y su imposibilidad de ganarla, a menos de un año de la finalización de la gestión del presidente Felipe Calderón, y las definiciones y preparativos para el enfrentamiento electoral de las próximas elecciones presidenciales, signaron la marcha política e institucional del país durante el año 2011.

Al pronunciar un discurso sobre el balance de su quinto año de gobierno, Felipe Calderón fustigó a las fuerzas políticas que no habían querido aprobar las reformas estructurales que tanto necesitaba el país para seguir “avanzando por el camino del crecimiento y la generación de empleos”. Enfatizó que “la pasividad de los gobiernos terminó ayudando a la expansión de los carteles” en el país, que la violencia constituye “una amenaza para todos y a la que juntos sin titubeos debemos cerrarle el paso”, y que “para ganar es necesario que todas las fuerzas políticas expresen, sin regateos, su repudio (a la delincuencia). No hay espacio para mezquindades ni cálculos políticos”. También denunció

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en México

Gráfico 3.51



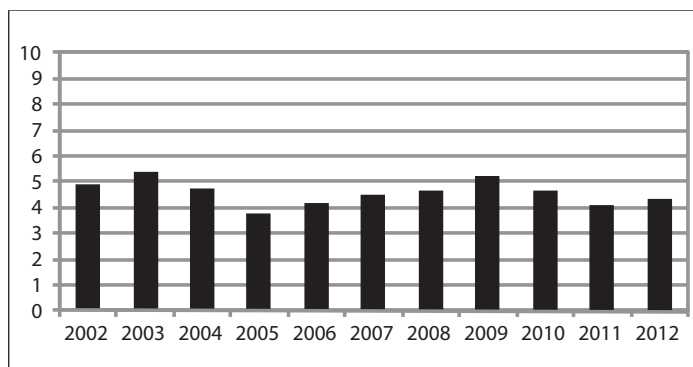
“la intervención palmaria y evidente de los delincuentes en procesos electorales”, pero la oposición exigió que si tenía pruebas de la intromisión de los delincuentes en las campañas y los comicios, las hiciera públicas y las presentara ante las instancias legales correspondientes.

2. El puntaje alcanzado en la dimensión de *derechos y libertades*, que mide la *democracia de los ciudadanos* ha sido más alto que el obtenido en el 2011 y se ubica muy cerca del valor promedio de la serie (gráfico 3.52). México ocupa el 12.º lugar en el ordenamiento regional de este año, ascendiendo dos escalones con respecto al año anterior. Este avance es producto principalmente de un mejor resultado en el indicador de *género*, a pesar de que mantiene los pobres valores obtenidos en los indicadores que miden el *respeto de las libertades civiles y los derechos políticos*. El único indicador que ha sufrido un leve retroceso es el de *inseguridad*.

En cuanto al panorama político, el 30 de enero de 2011 se eligieron gobernador,

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.52



Debilidades

- Voto de adhesión política
- Respeto de libertades civiles y derechos políticos
- Inseguridad

diputados y alcaldes en Guerrero; el 6 de febrero las mismas posiciones en Baja California Sur; el 3 de julio en Coahuila (gobernador y Congreso), Estado de México (gobernador), Hidalgo (presidencias municipales) y Nayarit (gubernatura, diputaciones y alcaldías); cerró el año el 13 de noviembre en Michoacán con elecciones generales. De las seis gubernaturas en disputa, el PRI obtuvo cuatro: Estado de México, Nayarit, Coahuila y Michoacán, una más de las que tenía; el PAN ganó solo en Baja California Sur; y el PRD solo logró mantener Guerrero y perdió Michoacán.

En Acción Nacional el proceso preelectoral arrancó con tres bloques de varios aspirantes: el del gabinete, el de los legisladores y el de gobernadores. Del bloque de legisladores solo llegaron a la recta final Santiago Creel Miranda y Josefina Vázquez Mota. El año 2011 sin duda le sirvió a la excoordinadora de los diputados, pues logró remontar la preferencia que mantenía Santiago Creel. Por el contrario, en el PRI se impuso la decisión de sostener una candidatura temprana y única, pese a la apuesta de Manlio Fabio Beltrones que buscaba competir en una interna pero no se pudo sostener, al consolidarse la candidatura del exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

En tanto, al interior del PRD se observó una tenaz lucha entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubon que, encuestas mediante, terminó en favor de López Obrador.

El 2011 cerró con un dato significativo: por primera vez, desde el inicio del intento del estado federal por controlar la violencia, se detuvo la espiral creciente y hubo un número de víctimas inferior al del año anterior: 12.903 contra los 15.274 muertos del 2010. Solo diez de las 32 entidades del país no han bajado su nivel de homicidios. Entre ellas, Chiapas, Guanajuato, Quintana Roo, Tlaxcala, Nayarit y Nuevo León. Subsisten, sin embargo, las deficiencias del sistema de justicia, ya que más del 80% de los homicidios permanecen impunes y se mantienen bajos los niveles de inversión en las policías locales, lo que vuelve a los estados y a los gobiernos locales más y más dependientes de la ayuda federal para combatir el delito.

Se mantuvo la estrategia del Ejecutivo, con golpes duros y contundentes a las bandas, pero de igual modo se sostuvo la intensidad de la agresión delincinencial. La percepción sobre la seguridad sigue siendo baja, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en su Encuesta Continua sobre la Percepción de la Seguridad Pública (ECOSEP).

El hallazgo en abril de 2011 de 193 cadáveres en fosas de San Fernando, Tamaulipas, así como el atentado contra el Casino Royale en agosto, con 52 personas muertas, fueron los eventos de mayor impacto; pero hubo múltiples enfrentamientos de criminales con las autoridades y entre ellos, con mensajes tales como Boca del Río, Arcos del Milenio, Estadio Corona, etc., que dejaron su estela de muerte e inseguridad a lo largo del país. Un hecho que tuvo implicaciones particulares fue el

homicidio del hijo de Javier Sicilia, que derivó en la organización del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que activamente trabajó para establecer algunos acuerdos de agenda común con las autoridades.

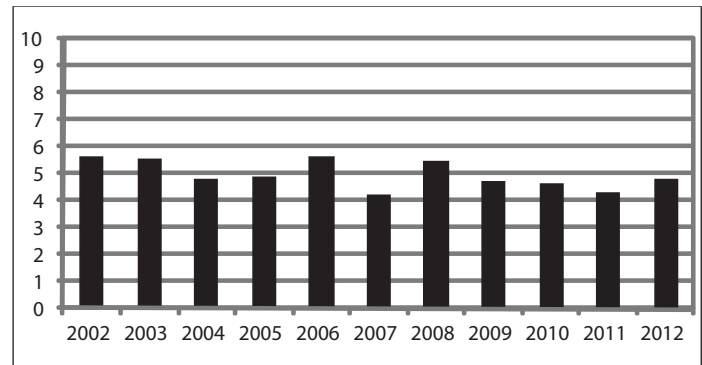
Javier Sicilia, quien fue seleccionado por la revista *Time* como una de las personalidades del año por su lucha contra la violencia en México, pidió a los legisladores la aprobación urgente de una ley de víctimas y garantizar su cumplimiento, "dadas las condiciones de emergencia nacional". El poeta volvió a exigir la creación de una comisión de la verdad que investigue qué delitos correspondieron a los criminales y cuáles al Estado, porque sin ella no se llegará a la paz ni a la reconciliación en México.

3. El valor obtenido en *calidad institucional* y *eficiencia política* ha crecido (gráfico.3.53) casi hasta igualar los valores obtenidos en el 2004 y 2005. Este comportamiento se explica por los avances en los indicadores de *accountability* y *desestabilización de la democracia*. La única variable que tuvo un comportamiento negativo fue la de *percepción de la corrupción*. A raíz de este ascenso, el país mejoró un lugar en el *ranking* regional, pasando del octavo al séptimo lugar, en el cual ya se había situado en el 2010.

El presidente Calderón remarcó repetidas veces que será difícil de lograr una victoria para el Estado, si persisten la corrupción de los cuerpos policíacos estatales y la ausencia de colaboración de los gobernadores, y sostuvo que "ni el mejor general puede ganar una batalla sin soldados leales y confiables". Durante la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, convocada precisamente para evaluar los avances en la depuración de los cuerpos policíacos, se quejó de que solo se registraba un avance

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.53



de 17% en esa tarea, y no desaprovechó la oportunidad para señalar la vulnerabilidad y la debilidad de las instituciones de seguridad pública. La corrupción es un gran costo para la sociedad. El hecho de que México se ubique en el lugar 100 a nivel internacional en cuanto a corrupción refleja claramente que las empresas y las personas deben incurrir en un gran costo para sacar adelante sus actividades de negocios.

En abril de 2011, la Cámara de Senadores aprobó en lo particular, y con modificaciones, la reforma política, que incluye la sustitución del Ejecutivo federal en caso de falta absoluta, y las candidaturas ciudadanas para la elección presidencial de 2012. El pleno modificó la redacción de los artículos 35, 71, 73, y 83 de la Constitución, para introducir ciertas precisiones que no cambiaron sustancialmente el contenido de estos artículos. De último momento, el pleno aprobó una propuesta del senador del PAN Ramón Galindo para reformar el artículo 115 constitucional, no incluido en el dictamen. En dicha propuesta se planteaba que fueran las Constituciones de los estados las que determinaran si procedía en cada entidad la reelección de los presidentes municipales, con lo que se abría la puerta para esta eventualidad. La reforma política también

Fortalezas

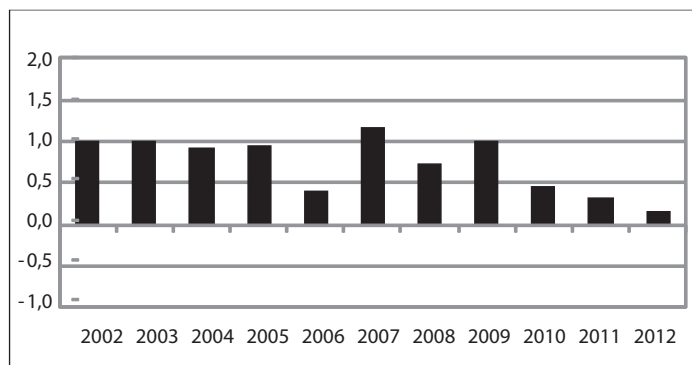
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Percepción de la corrupción
- *Accountability* legal y social

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.54



Debilidades

- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza
- Eficiencia en salud y en educación

prevé la reelección de senadores y diputados federales, la iniciativa ciudadana y la iniciativa preferente. Además, otorga al Senado la facultad de ratificar a los titulares de los órganos reguladores como las comisiones Federal de Telecomunicaciones, Federal de Competencia y Reguladora de Energía, que serán designados por el Ejecutivo.

4. En la dimensión IV, *poder efectivo para gobernar*, las dos subdimensiones que la componen no tuvieron similares comportamientos. El subíndice *social* presenta una importante caída, consecuencia de las pérdidas en *desempleo*, *gasto en salud* y *población bajo la línea de la pobreza*, a pesar de los mejores resultados que muestran las variables de *mortalidad infantil* y *matriculación secundaria*. México se mantiene en el sexto lugar del *ranking* regional (gráfico 3.54), por debajo del promedio. El valor alcanzado este año es el peor de la serie, en tanto que el mejor fue el obtenido en el año 2007.

La recesión económica iniciada en Estados Unidos a finales de 2007 impactó de la forma más cruel en México al sumar 3,2 millones de personas a las filas de la pobreza, según las estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). El número de personas en

situación de pobreza en México subió de 48,8 millones a 52 millones entre 2008 y 2010, lo que significa que el 46,2% de la población se encuentra en esa situación, contra el 44,5% de 2008. Por su parte la pobreza extrema, la que tiene tres o más carencias sociales, pasó de 10,6% a 10,4% de la población total, con lo que se mantiene en el nivel de 11,7 millones de personas; mientras que el número de personas vulnerables por ingreso pasó de 4,9 millones en 2008 a 6,5 millones en 2010; 28 millones de personas tienen carencias en el acceso a la alimentación, lo que representa un aumento de 4,2 millones en dicho periodo. Un elemento fundamental que explica el aumento en la pobreza fue la reducción del ingreso en el contexto de la crisis internacional; el sector que más se vio afectado fue el urbano; un segundo factor fue la carencia en el acceso a la alimentación (por el aumento en los precios de los alimentos).

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del cuarto trimestre de 2011 dejó en claro que la precarización del mercado laboral mexicano es un problema estructural. Los datos muestran que el número de mexicanos ocupados en la economía informal asciende a casi 14 millones; de ellos, 4,2 millones pertenecen a la población ocupada que no recibe ingresos; 6,4 millones perciben cuando mucho un salario mínimo, y otros 10,8 millones ganan entre uno y dos salarios mínimos.

En materia social, el presidente Calderón sostuvo que se había llevado el programa Oportunidades a 6,5 millones de familias y se había apoyado a 4,6 millones más con créditos y subsidios para adquirir o mejorar su vivienda. Señaló que el programa 70 y Más apoyaba con 500 pesos mensuales a los adultos mayores de 70 años que vivían en localidades de hasta 30.000 habitantes y se

habían abierto más de 9.000 estancias infantiles que habían atendido a 839.000 niños. También se entregaron más de 30 millones de becas, es decir que en promedio se otorgaron 6,1 millones en cada ciclo escolar, y expresó que “queremos más becarios y menos sicarios”.

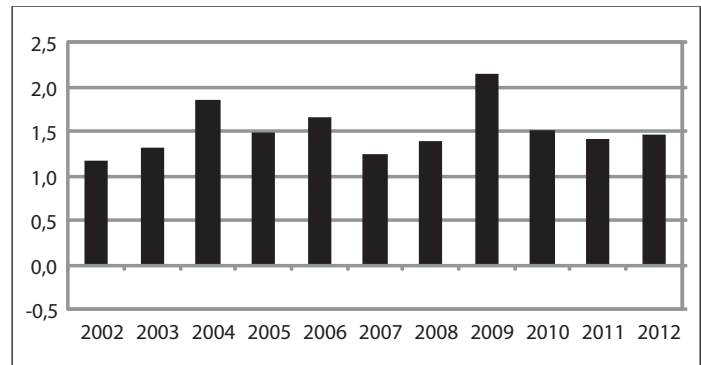
Como parte de su agenda futura, el presidente Calderón afirmó que en los próximos meses habría *cambios de fondo* para mejorar la calidad de la educación en México, al impulsar la transformación del programa de Carrera Magisterial, la creación del Sistema de Evaluación Universal para los docentes y la autonomía al Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE). El mandatario aceptó de esa forma la propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y su presidenta Elba Esther Gordillo Morales, para hacer de la calidad de la educación una política de Estado.

A tres años de acordada la Alianza por la Calidad de la Educación con el SNTE, el presidente Calderón presentó un balance en el que afirmó que se habían concursado 82.000 plazas de maestros, se creó un catálogo de 700 programas de capacitación, se hizo de las pruebas nacionales e internacionales un ejercicio continuo y público en sus resultados, con lo cual se ha podido medir que hay un avance de 16 puntos en matemáticas y en español. Refirió que los padres de familia están más cerca de la escuela, mediante los consejos de participación social, y se mejoró la infraestructura de 42.000 planteles. Anunció que en 2011 se invertirían 3.000 millones de pesos para este propósito.

5. En la restante subdimensión de la dimensión IV, que da cuenta de la *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica*, el país ha mejorado su puntuación y

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.55



se aleja del peor valor de la serie, obtenido en el 2002 (gráfico 3.55). Este comportamiento le permite seguir manteniendo el primer lugar del *ranking*. Las bajas operadas tanto en el indicador de *libertad económica* como en el de *endeudamiento*, *PIB per cápita* e *inversión* no fueron de una magnitud tal que provocaran el descenso en esta subdimensión. La única variable que tuvo un comportamiento positivo fue el que mide la *brecha de ingreso*.

Las cifras evidencian el crecimiento económico de 2% en promedio. En cuanto al bienestar social, si bien se han hecho esfuerzos por ayudar a la población, México tiene un rezago en progreso social y es evidente porque la generación de empleo está muy por debajo de lo que realmente necesita el mercado; eso se traduce en una limitación del ingreso familiar y de los niveles de consumo de la gran mayoría de los mexicanos. Las épocas de crisis recurrentes han sido el principal factor de que los avances económicos y sociales se vuelvan a perder. El hecho que el PIB mexicano haya caído más de 6% en 2009 hizo que desaparecieran las incipientes ganancias que se habían logrado en los años anteriores. El gran problema de México es que todavía no tiene una economía con fundamentos importantes y con políticas

Debilidades

- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Libertad económica

que permitan generar un crecimiento más estable en el tiempo.

En este sexenio hubo un manejo adecuado de las finanzas públicas, se preservó la estabilidad macroeconómica y se restablecieron las fuentes para poner a la economía en la trayectoria del crecimiento, pero con un crecimiento limitado y sin que se produjera bienestar social. A la fecha, México se ubica en el lugar 14.º entre las economías más importantes del mundo.

Parte de la estrategia que lograron las economías emergentes ha sido impulsar a una clase media que es más sólida y a su vez se encuentra más estable y funciona como motor de la economía interna. Al mismo tiempo, la estabilidad interior las coloca como nuevos agentes de la política exterior

contemporánea, al estar ahora en posiciones de poder en el sistema financiero internacional. En contraste, México tiene problemas para solidificar su clase media porque el gasto público no actúa de manera completamente eficiente. México tiene un gasto corriente muy elevado; la mayor parte se va a sueldos y salarios y muy poco se destina a capital, o sea obra pública o servicios públicos, además de que la población no está dispuesta a pagar más impuestos porque sabe que su dinero está siendo mal utilizado. El gasto en el país se ha concentrado en resolver problemas que requieren una solución inmediata, pero no en condiciones estructurales, por lo que los impuestos que se recaudan en México tampoco están eficientemente dirigidos.

NICARAGUA

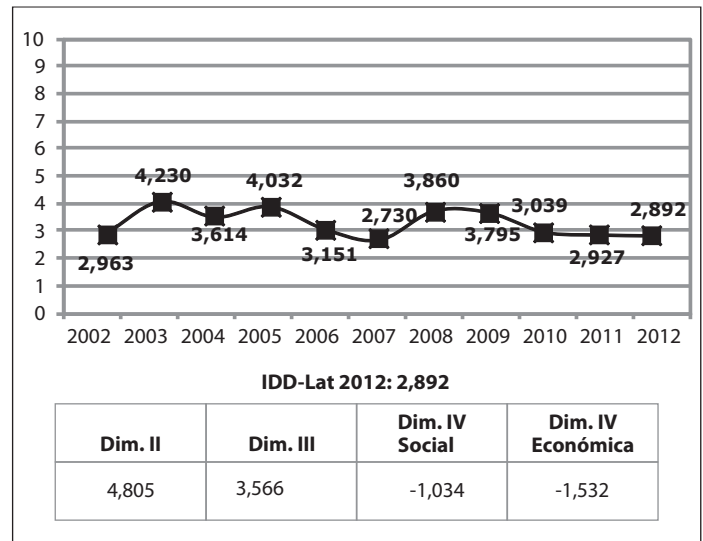
1. Nicaragua nuevamente retrocede con respecto al 2011 en más de un 1 % en su desarrollo democrático. Por cuarta vez cae por debajo de los 3,000 puntos, aunque no llega a igualar su peor comportamiento, registrado en el IDD-Lat del año 2007 (gráfico 3.56). La tendencia levemente negativa se evidencia en el comportamiento de la dimensión IV. Mejoran los resultados de la dimensión *respeto de los derechos políticos y libertades civiles* —que supera mínimamente el puntaje del 2011— y la dimensión *calidad de las instituciones y eficiencia política*, que muestra una puntuación de 11 % más alta que la del 2011. Forma parte del grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Su peor desempeño se expresa también en el *ranking* regional, donde cae dos peldaños con respecto al año anterior, pasando del lugar 13.º al 15.º

Durante el 2001 se realizaron elecciones generales y al Parlacen, las quintas celebradas en Nicaragua desde la aprobación de la Constitución de 1987. Hubo una atmósfera de profunda polarización y desconfianza, con numerosas acusaciones de fraude electoral y de competencia en desigualdad de condiciones. La oposición cuestionó la legitimidad de las elecciones por la candidatura presidencial de Daniel Ortega (que se abrió paso pese a la prohibición constitucional) y por la pérdida de credibilidad del Consejo Supremo Electoral tras las elecciones municipales de 2008, pero aun así decidió participar. Pese a la polarización, la campaña fue, en general, pacífica.

Los resultados otorgaron al presidente saliente Daniel Ortega, del oficialista FSLN, la victoria en primera vuelta con el 62 % de los

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Nicaragua

Gráfico 3.56

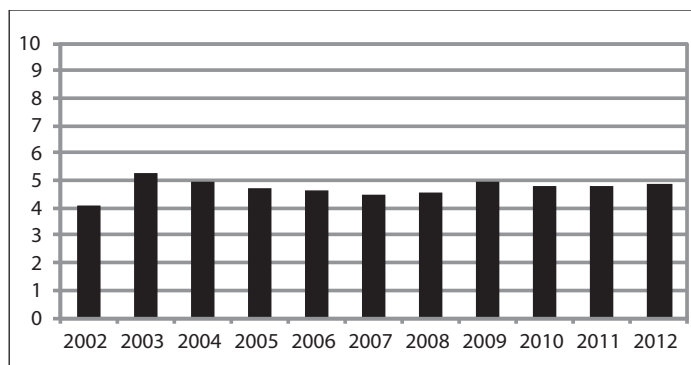


votos. Fabio Gadea, de la alianza PLI, obtuvo el 31 % y el ex presidente Arnoldo Alemán, del PLC, el 5,9 %.

2. En relación con la dimensión II, que mide el comportamiento de la *democracia de los ciudadanos*, ha habido un leve incremento, aunque continúa sin alcanzar el nivel del promedio regional. Nicaragua ha tenido, en todos los años de la medición, un comportamiento relativamente estable entre los 4,000 y los 5,000 puntos (gráfico 3.57). Esta leve variación positiva le alcanza para modificar su lugar en el *ranking* regional, donde se posiciona en el octavo lugar, subiendo dos ubicaciones. El resultado final de la dimensión es producto del avance en la puntuación de los indicadores *voto de adhesión política, condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad y género*. Estos avances lograron compensar la peor puntuación recibida en el indicador de *respeto de los derechos políticos*, donde Nicaragua es castigada con la peor valoración de la región.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.57



Fortalezas

- Género en el Gobierno
- Voto de adhesión política

Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos
- Inseguridad

A las elecciones de 2011 concurren cinco fuerzas políticas. Por un lado, la alianza creada en torno al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentó la candidatura a reelección de Daniel Ortega, que fue admitida tras una discutida sentencia de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Frente al oficialismo, en el campo liberal, los dos contendientes principales fueron las alianzas articuladas alrededor del Partido Liberal Independiente (PLI), con Fabio Gadea como candidato a la Presidencia y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), de Arnoldo Alemán. Otras dos agrupaciones de raíz liberal, el partido Alianza Liberal Nacionalista (ALN) y la Alianza por la República (APRE), con expectativas muy bajas en las encuestas preelectorales, completaron la boleta. Los sondeos de opinión vaticinaban una nueva victoria del oficialismo e indicaban una clara tendencia a la concentración en el PLI de los votos liberales o de oposición al presidente Ortega. Las principales incógnitas políticas que se planteaban en la fase previa a las elecciones eran la magnitud de la mayoría oficialista en la Asamblea nacional y, tras el precedente de las elecciones municipales de 2008, la propia transparencia del proceso electoral.

Además de los partidos políticos, otro de los actores que asumió un papel relevante durante el período electoral fue la Iglesia Católica, aun cuando no todos sus representantes compartieron el mismo mensaje. Cerca de un mes antes de las elecciones, la Conferencia Episcopal emitió una carta pastoral, bajo el título «Sombras que oscurecen el proceso electoral», donde apoyaba la acreditación de observadores nacionales, mencionaba la falta de confianza en la autoridad electoral, las dificultades que tenían los ciudadanos para obtener sus cédulas de identidad y la posible falta de legitimidad de algunos candidatos, lamentaba la intolerancia y la violencia y decía que “pone en entredicho el carácter de legalidad, honestidad y respeto a la voluntad popular”.

Por su parte, la Asamblea Nacional quedó integrada solamente por las tres alianzas, arriba mencionadas. El FSLN, con 62 diputados, ostentaba una mayoría cualificada en la Cámara que le permitirá acometer reformas constitucionales o renovar el CSE o la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en solitario. El PLI, con 26 diputados, emerge como principal fuerza de una oposición más unificada que en la anterior legislatura. La presencia del PLC queda reducida a dos diputados.

La elección de 2011 significó un importante paso adelante en términos de equilibrio de sexos en la Asamblea Nacional. El número de mujeres parlamentarias se incrementó de 20 a 36, lo que significaba un crecimiento del 21 % al 39% de los miembros del cuerpo. Este incremento no significa, sin embargo, que haya habido una mejora general en igualdad de sexos en todos los partidos políticos, sino que se debe exclusivamente al mayor compromiso del FSLN, que fijó una cuota en sus estatutos, con el principio de

igualdad de representación, y a su crecimiento en la Asamblea.

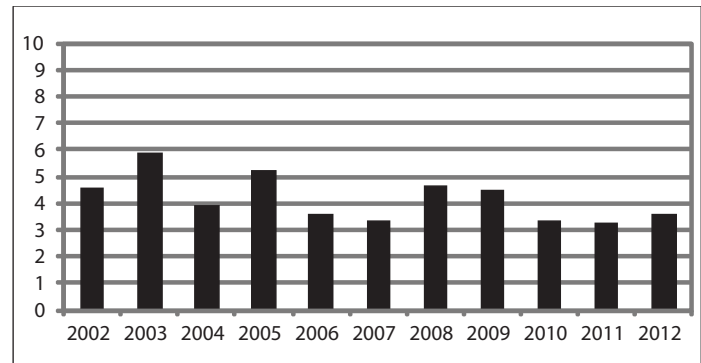
3. La variación de la dimensión III que evalúa la *democracia de las instituciones* ha sido levemente positiva y logra superar el valor del año anterior, que había sido el peor de la serie 2002-2012 (gráfico 3.58). El avance en esta dimensión se debe al retiro del castigo recibido en el 2011 por el *factor de anormalidad democrática*, debido a la crisis institucional que había sufrido el país durante el 2010 y por avances en los indicadores de *percepción de la corrupción y accountability*. El resto de las variables consideradas se mantuvo estable. Nicaragua obtuvo el 13.º lugar, mejorando un peldaño su ubicación con respecto al *ranking* regional 2011. Sigue manteniéndose por debajo del promedio de la región y lejos de la mejor puntuación que había obtenido en el IDD-Lat 2003.

Terminó el 2011 con miles de opositores que protestaron en Nicaragua contra la "fraudulenta reelección" del presidente Daniel Ortega, y exigieron aplicar la Carta Democrática Interamericana en su país y nuevos comicios. Además, demandaron la presencia de "un grupo de alto nivel internacional" para mediar por "el retorno de la democracia" a este país. El empresario de radio Fabio Gadea, ex candidato presidencial por la alianza Partido Liberal Independiente (PLI), principal fuerza de oposición en el país, participó en la protesta y se declaró "legítimo presidente electo". Gadea sostuvo que, en los comicios, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había cometido fraude al falsificar miles de votos y entregar cédulas de identidad, imprescindibles para ejercer el derecho al sufragio, a menores de edad.

Un comunicado leído por Violeta Granera, dirigente de la Unión Ciudadana

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.58



por la Democracia (UCD), repudiaba todas las "violaciones a la Constitución", los "abusos de poder" del gobernante nicaragüense y el "fraude" en los comicios del 6 de noviembre.

El acto violento más grave ocurrió el 8 de noviembre, dos días después de las elecciones, cuando tres simpatizantes del PLI fueron asesinados en la comunidad de El Carrizo, perteneciente a la municipalidad de San José de Cusmapa, en Madriz. Se culpó de las muertes a activistas del FSLN, que se decía que habían actuado con la complicidad de agentes policiales y autoridades electorales. Se arrestó a cuatro agentes de policía y a un representante del FSLN por su implicación en los hechos. El mismo día, el secretario del FSLN, en Siuna, fue asesinado en la comunidad Coperna II, en la RAAN. Se arrestó a varios simpatizantes del PLI por su presunta implicación en los hechos.

El llamado pacto Ortega-Alemán, por el cual el entonces presidente había permitido cambios legislativos estratégicos y cuotas de poder político favorables al orteguismo, a cambio de beneficios económicos personales y para la cúpula del PLC, permitió que, una a una, las instituciones del Estado fueran siendo cooptadas y controladas directamente por el presidente Ortega y sus círculos más cercanos. Ortega terminó su trabajo de

Fortalezas

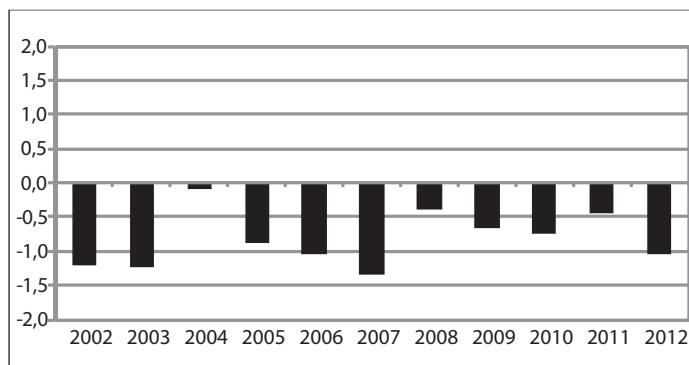
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Índice de Percepción de la corrupción
- *Accountability* legal y social
- Desestabilización de la democracia

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.59



Debilidades

- Eficiencia en salud y educativa
- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza

apoderarse de los otros poderes del Estado y pudo manipular de esta manera el sistema judicial a su antojo, lo mismo que el Legislativo y el Poder Electoral, y convirtiendo en verdaderas oficinas partidarias sandinistas la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría y las fuerzas de seguridad (Policía Nacional y Ejército de Nicaragua).

El presidente, basado en una serie de violaciones al orden constitucional, reeligió ilegalmente a magistrados de la Suprema Corte de Justicia, a miembros del Consejo Supremo Electoral, destituyó y restituyó diputados del Poder Legislativo, y llegó, después de una innumerable cantidad de irregularidades, a establecer su reelección casi como un capricho personal, violando claros preceptos constitucionales y a través de un fallo de un Tribunal de Justicia que de ninguna manera cumplió con las estipulaciones de la Carta Magna de Nicaragua.

4. En la subdimensión *social* su desempeño ha sido peor que en 2011 (gráfico 3.59), motorizado por un descenso en casi todas las variables que la componen, salvo el indicador que mide la *mortalidad infantil*. Los peores resultados se observan en los indicadores de *desempleo y pobreza*. Este comportamiento produce que Nicaragua baje tres

posiciones en el *ranking* regional, pasando del 12.º al 15.º lugar, y además se aleja aún más del promedio de la región, ubicándose entre las cuatro peores puntuaciones.

El empleo, los impuestos, la reducción de la pobreza y la mejora de los servicios de salud y educación fueron los temas que dominaron la campaña. El 42,5 % de la población de Nicaragua vive en condiciones de pobreza (2,08 dólares al día) y el 14,6 % en extrema pobreza (1,08 dólares al día), principal reto para la administración que surgiera de las elecciones. El desempleo estaba en el 6,8 %, aunque un 70 % de los empleos correspondían al sector informal.

Daniel Ortega iniciará en enero de 2012 su tercer mandato, enfocado ahora en atacar la pobreza en que vive el 45 % de los casi 6 millones de nicaragüenses, pese a años de crecimiento económico moderado. Para erradicar la pobreza se necesita un crecimiento del 6 al 7 % anual.

En su último gobierno, Daniel Ortega se vio beneficiado por la cooperación económica de Venezuela, que según cifras del Banco Central de Nicaragua, rondó los 500 millones de dólares anuales (7 % del PIB). Este acuerdo le permitió a Ortega articular una serie de programas sociales que le han posibilitado ganar cada vez más espacio electoral: Plan Techo, Hambre Cero, Usura Cero, Casas para el Pueblo, láminas de zinc para las casas de los más pobres, subsidio al transporte público, etc., además de un bono solidario mensual para los empleados públicos, de 33 dólares. Con estos subsidios se ha permitido una leve reducción de la extrema pobreza que ha tendido a alimentar las ilusiones políticas en el orteguismo, aumentando la base social electoral histórica del FSLN.

Ante las críticas de adversarios por la persistencia de la pobreza, Ortega ha respondido

simplemente que la mejoría no se notaba debido a lo gigantesco del rezago social. El Gobierno, sin embargo, insistía en sus logros. Entre 2007 y 2011 “se crearon las condiciones y las bases para impulsar con más fuerza el desarrollo del país”, dijo el viceministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Recordó que lo primero que hizo Ortega fue restablecer el sistema energético, que estaba colapsado traducido en apagones de varias horas diarias y afectaba seriamente la economía, por no hablar de la vida cotidiana de la población.

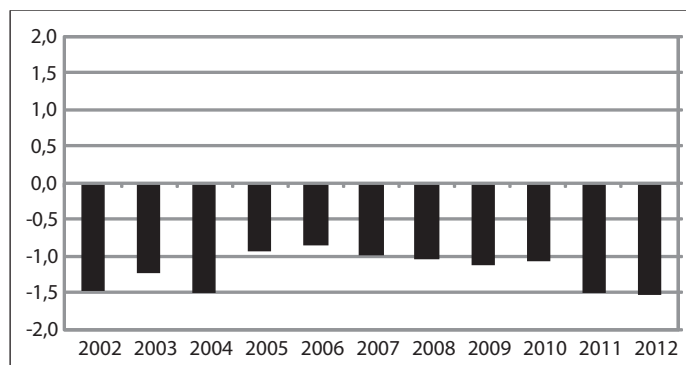
El sandinismo afirmaba que su prioridad para el nuevo período de gobierno era poner en marcha una estrategia educativa como medio de desarrollo, porque sin acceso a la tecnología, la educación y conocimiento para transformar la economía, un país no puede ser competitivo.

5. Nicaragua retrocede levemente respecto a los valores del año anterior en *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica*, e iguala su peor comportamiento registrado en los años 2002, 2004 y 2011 (gráfico 3.60). Esto se debe a un incremento del nivel de endeudamiento de la economía con una simultánea caída del indicador de *inversión*, un leve descenso del *PIB per cápita* y una peor puntuación recibida en el *índice de libertad económica*. El único indicador que muestra un comportamiento positivo ha sido el que mide la *brecha de ingreso*. Su índice está muy por debajo del promedio regional y ocupa el 17.º lugar del *ranking*, manteniendo la ubicación que tenía desde el 2010 y superando solamente a Bolivia, que es el país de peor comportamiento en esta subdimensión.

Nicaragua cerró el 2011 con buenas notas económicas, con un crecimiento del 4,8%. La minería, la construcción, el sector pecuario y

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.60



la industria tuvieron un buen ritmo de crecimiento, sobre todo por la recuperación de la construcción privada. También creció la inversión extranjera directa a tasas bien altas, de entre 15 y 20%, mientras que las exportaciones de mercancías y de zonas francas crecieron en un 20%. En la segunda mitad del 2011 la economía creció lentamente, al contrario del primer semestre, que había iniciado con empuje. Esto se atribuye al escaso crecimiento de la economía de Estados Unidos y a la crisis de Europa.

A pocos días de las elecciones presidenciales, el balance del gobierno de Ortega era positivo desde el punto de vista del crecimiento económico, inversiones, tratados comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea, y las cercanas relaciones con Venezuela. Pero, los índices sociales siguen ubicando a Nicaragua como el segundo país más pobre de la región, seguido de Haití.

La inflación —que en los años ochenta llegó a 33.000%— fue de 4,9% de enero a septiembre de 2011, en tanto las reservas internacionales rondaban los 2.000 millones de dólares, cifra récord para la economía más pequeña de Centroamérica.

El gobierno de Ortega se inició en mejores condiciones que cualquier otro en más de tres décadas: economía en crecimiento,

Debilidades

- Índice de libertad económica
- PIB per cápita
- Brecha de ingresos
- Endeudamiento
- Inversión

sin déficit fiscal y con estabilidad macroeconómica; deuda externa reducida drásticamente y una enorme cartera de proyectos de inversión con financiamiento concesional. La cooperación externa, por la ayuda venezolana, prácticamente se duplicó en términos brutos (en términos netos el crecimiento fue bastante mayor por la dramática reducción del servicio de la deuda), y su gobierno se ha beneficiado de la primera bonanza sincronizada de la historia en los precios de todos los productos de exportación. Además, Ortega no ha tenido ningún préstamo o iniciativa de ley bloqueada en la Asamblea Nacional, ni ha enfrentado trancazos y asonadas.

En el contexto de esas condiciones tan extraordinariamente positivas, el balance de la gestión económica de Ortega es

decepcionante: un crecimiento promedio (2,6%) inferior al de Bolaños y apenas superior al de Violeta Chamorro que heredó un país destruido, absolutamente desequilibrado y totalmente endeudado, después de la guerra civil y los bloqueos de los años ochenta. El salario real promedio es inferior al de hace cinco años; se ha reducido el gasto real en educación y salud; el empleo está estancado y ha crecido la informalidad; y Nicaragua es más dependiente que antes de la ayuda externa. Y los programas clientelares, imposibles de sostener sin cooperación externa, por más que se les llame *populismo responsable*, son un paliativo de la pobreza, pero no una reducción estructural de esta. En resumen, con Ortega las posibilidades de un crecimiento fuerte y sostenible son menores que cuando se inició su gobierno.

PANAMÁ

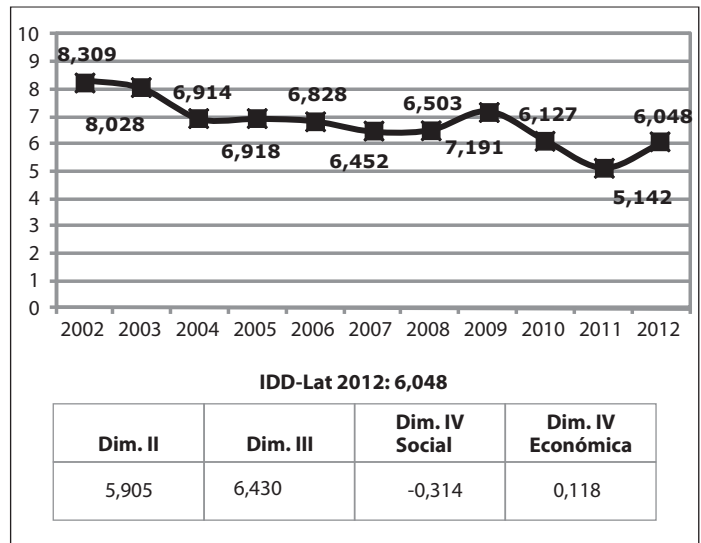
1. Panamá continúa siendo uno de los países con desarrollo democrático medio —nivel al que había descendido en el 2010— y no logra subir de categoría a pesar de que este año mejoró su ubicación en más de un 17% respecto al 2011. Ello se debe al incremento de las puntuaciones recibidas en las dimensiones de *respeto de las libertades civiles y derechos políticos y calidad institucional y eficiencia política*, que compensaron la importante caída en la dimensión IV (gráfico 3.61). Asciende un lugar en el *ranking* regional y se posiciona en la cuarta ubicación.

El presidente Martinelli llega a la mitad de su administración con un desplome en su popularidad y un gobierno ahogado en escándalos de corrupción, en un país que proyecta para 2012 uno de los mayores crecimientos económicos de la región. Ricardo Martinelli cumplió, el 1 de julio de 2011, dos años de una gestión que se ha destacado por los anuncios de megaproyectos y que ha estado marcada por críticas sobre su estilo de gobierno, manejo de la deuda pública y escándalos de corrupción en los que cercanos colaboradores suyos han estado vinculados. No han faltado las polémicas relacionadas con ataques a la libertad de expresión, en medio de un diálogo que se convocó para tratar este tema y que no ha prosperado. El presidente comenzó el año asegurando, en un mensaje de Año Nuevo, que el 2011 era un año de grandes retos y nuevas oportunidades para el país.

La pobreza bajó en el 2011 del 33,4 al 29%. El gobierno conducía millonarios proyectos en infraestructuras (15.000 millones de dólares en cinco años) y anunciaba novedosos proyectos sociales con el fin de convertir

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Panamá

Gráfico 3.61

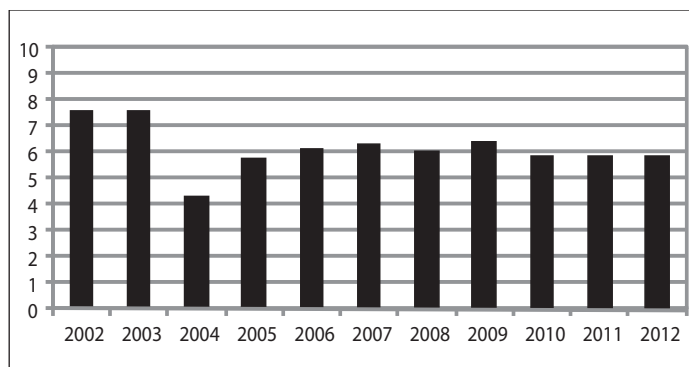


a Panamá en el Singapur o el Dubái de las Américas, según proclamaba Martinelli. Sin embargo, el mandatario perdió puntos en la ciudadanía, de acuerdo con los sondeos, con índices de popularidad de entre 31 y 47%, lejos del 90% que había marcado tras arrasar en las elecciones de 2009 con más de un millón de votos, cifra récord en el país. Analistas consideraban que el desplome derivaba de la corrupción, la permanente confrontación de Martinelli con diversos sectores, sus intenciones de controlar todos los órganos del Estado y el descontento ciudadano por la inseguridad y el alza del costo de vida.

2. En la dimensión II, que mide el *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, los indicadores se han mantenido estables, salvo el correspondiente a *condicionamiento de las libertades civiles por inseguridad*, que ha desmejorado levemente. En este nivel de paridad del comportamiento de los indicadores respecto del año anterior, registra un índice final apenas superior al del 2011 (gráfico 3.62). Panamá ocupa el quinto lugar del

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.62



Fortalezas

- Puntaje en el índice de derechos políticos

Debilidades

- Inseguridad
- Género en el Gobierno

ranking, manteniendo la misma ubicación que el año anterior. Su valor en esta dimensión se ubica, en los últimos siete años, en torno a los 6,000 puntos y continúa superando el promedio regional.

Hubo 704 homicidios en el país durante el año 2011, a un promedio de 1,9 casos diarios, según cifras del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC). Esta cifra da cuenta de una disminución de 55 casos en relación con los 759 de 2010 o, lo que es lo mismo, 7,2% menos. Si se toma en cuenta la población total del país, de 3.405.813 personas según el censo de 2010, la tasa de homicidios en 2011 fue de 20,6 por cada 100.000 habitantes, la menor en los últimos tres años (23,7 en 2009, la más alta de la historia del país; 21,6 en 2010). Igualmente la tasa sigue estando por encima de la de otros países de la región como Costa Rica (9) y Nicaragua (11), y muy por encima de una cifra *tolerable* de homicidios según la Organización Mundial de la Salud, de 9 casos cada 100.000 habitantes. Esto coloca el fenómeno de la criminalidad del país en la categoría de epidemia.

3. Panamá ha mejorado el nivel de la dimensión III por el avance importante del indicador de *desestabilización*, que compensó los retrocesos producidos en las variables *índice*

de percepción de la corrupción y accountability y por no recibir el castigo del *factor de anormalidad democrático*. El avance permitió que el país superara ampliamente el promedio regional y ganara tres lugares en la tabla regional, pasando del séptimo al cuarto (gráfico 3.63), ubicación que ya había alcanzado en el 2010.

Durante este período la gestión del presidente Martinelli se vio caracterizada por fuertes antagonismos. Por un lado, el país mostró un fuerte crecimiento económico, en tanto que por el otro, el gobierno aplicó una política socioeconómica muy controvertida. Su forma autoritaria de ejercer el poder generó resistencia en la oposición y entre las organizaciones de la sociedad civil, lo cual llevó a una polarización de la sociedad y de los partidos políticos. El presidente socavaba cada vez más la división de poderes. En un procedimiento jurídicamente cuestionable, designó dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además le solicitó la renuncia a la procuradora general de la Nación. Se sancionó un derecho penal más severo y se limitó el derecho a las manifestaciones, además de intimidar a periodistas. Martinelli seguía empeñado en reformar la Constitución para permitir su reelección.

Existe en la sociedad la percepción de que el Gobierno está fallando en materia de transparencia e institucionalidad, cosa que puede socavar las bases de crecimiento a largo plazo. Respecto a la transparencia, hay que reconocer que, desde sus inicios, esta Administración intentó mejorar el flujo de información y el acceso a la prensa, con el restablecimiento de las conferencias semanales del Consejo Económico Nacional (CENA) o respuestas directas e inmediatas de los principales voceros del equipo económico a través de las nuevas herramientas

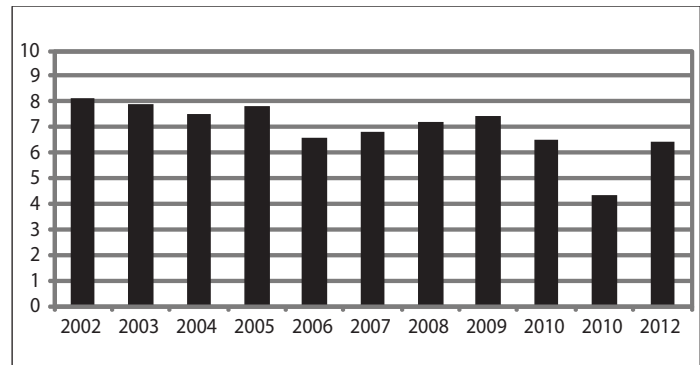
tecnológicas, entre otras cosas. Pero ese flujo ha sido más limitado durante el segundo año de administración y le ha faltado transparencia y divulgación oportuna y suficiente al manejo de muchos temas relevantes, como proyectos de leyes fiscales (ley 31 de 2011, por ejemplo), el cronograma de pagos de los proyectos llave en mano que Capital viene solicitando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y los cambios y actualizaciones hechas a la programación financiera del plan de gobierno 2010-2014.

La intención del gobierno de vender las acciones estatales en las empresas mixtas de electricidad y telefonía generó el rechazo de amplios sectores del país, con objeciones que llevaron a Martinelli a retirar sus propuestas del Parlamento, paralizado por la oposición. El tema fue llevado por el Gobierno a una mesa de concertación —integrada por varios sectores sociales— pero también fue rechazado, pese a que insistió, empeñado en obtener recursos para cubrir un déficit fiscal de 400 millones de dólares. Martinelli rompió con la alianza de gobierno con el Partido Panameñista (PPA), luego de destituir como canciller al vicepresidente Juan Carlos Varela, a quien acusó de tener varios sombreros, como funcionario y como aspirante presidencial. Varela, convertido en un férreo opositor, se unió con sus rivales ideológicos del exgobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) para, con varios sectores sociales, crear un Frente por la Democracia enfrentado a lo que llaman imposiciones de Martinelli.

También, como parte de las protestas, los opositores lograron que el mandatario revirtiera la creación de una nueva sala en la Corte Suprema de Justicia, que según la oposición sería usada por Martinelli para buscar una eventual reelección en 2014.

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.63



4. En la dimensión IV, que mide el *poder efectivo para gobernar* la democracia panameña, en la subdimensión *social*, se registra un retroceso que, por segunda vez en la serie del IDD-Lat (gráfico 3.64), lleva al país por debajo del promedio regional, a pesar de que algunos indicadores han tenido leves incrementos, tales como las variables que miden *mortalidad infantil* y *matriculación secundaria*, aunque no alcanzan a compensar los retrocesos del resto de los indicadores, salvo *gasto en educación*, que se mantuvo sin variaciones. A pesar del deterioro en la puntuación de la subdimensión, Panamá no ha empeorado su lugar en el *ranking* regional, manteniéndose en el octavo lugar obtenido en el 2011.

Aunque Panamá ha registrado crecimientos económicos sin precedentes en los últimos años, con un promedio de 6,5% en el último quinquenio, la pobreza aún afecta al 32% de los 3,2 millones de panameños. Cifras oficiales señalan que el porcentaje de población pobre se redujo de 36,8 a 32 puntos entre 2003 y 2008, periodo en el cual el país registró uno de los crecimientos más altos en su historia (en 2007, con 12,1%).

El promedio de desarrollo en el quinquenio anterior fue de alrededor de 3,6%, mientras la pobreza se redujo en tres puntos.

Fortalezas

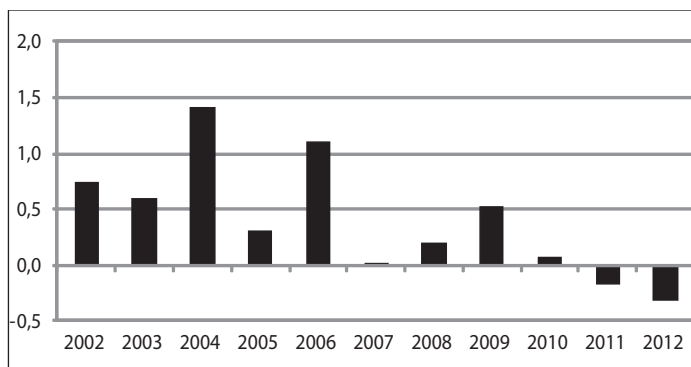
- Partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Puntaje en el índice de percepción de la corrupción
- *Accountability*

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.64



Fortalezas

- Eficiencia educativa

Debilidades

- Eficiencia en salud
- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza

El PIB se desaceleró de manera abrupta en 2009 (de 9,2 a cerca de 3%), producto de la crisis económica mundial, con una proyección similar para 2010 y con expectativas de crecimiento del desempleo.

Para paliar la pobreza, el gobierno continuó con Red Oportunidades, programa condicionado de asistencia a las familias pobres iniciado en el gobierno de su antecesor Martín Torrijos, como un mecanismo para llevar los beneficios del desarrollo a más panameños. El programa se retrasó unos cuatro meses por adecuaciones realizadas por el Gobierno. En noviembre de 2011 el Ministerio de Desarrollo Social reanudó los pagos mensuales de 300 dólares a unas 51.000 familias entre las más pobres del país. En forma paralela, Martinelli cumplió una de sus promesas de campaña e implementó el pago mensual de 100 dólares a las personas mayores de 70 años sin jubilación.

Las declaraciones del presidente Martinelli en la cadena de noticias CNN en Español, donde dijo que Panamá no presentaba problemas de desempleo, generaron reacciones entre políticos y ciudadanos. El ministro de Comercio e Industrias Roberto Henríquez tuvo que salir en defensa del presidente diciendo que este se había basado en claras cifras estadísticas. Por otra parte,

Henríquez consideró que Panamá estaba preparada para enfrentar los retos que se presentarán cuando Estados Unidos ratifique el TPC. Explicó que Panamá es una plataforma logística de América y que tan solo la expansión del canal está produciendo grandes inversiones en los puertos de la costa este de Estados Unidos.

5. El índice de *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica* es inferior al del año anterior (gráfico 3.65). El retroceso es consecuencia de peores resultados en los indicadores *puntaje en el índice de libertad económica, brecha de ingreso, endeudamiento e inversión*, que no pudieron compensar el avance de la variable *PIB per cápita*. El puntaje obtenido hace retroceder a Panamá del octavo al noveno lugar en este índice, y sin poder superar el promedio regional.

El manejo de la economía podría catalogarse como uno de los grandes aciertos del actual gobierno en sus dos años de gestión, reconocido no solo por los grupos empresariales locales, sino también a nivel internacional por las calificadoras de riesgo Fitch, Standard and Poor's y Moody's, que otorgaron en 2010 el grado de inversión al país y lo han mantenido y mejorado en el 2011.

Apoyados en la ejecución de megaproyectos como la ampliación del canal de Panamá —de más de cinco billones de dólares—, el inicio de la construcción de la primera línea de tren metropolitano de la ciudad de Panamá, el proyecto de saneamiento de la ciudad y bahía de Panamá y la construcción de importantes carreteras, entre otros, la economía del país creció en 2010 un 7,5% y es una de las estrellas de la región, luego de haber sorteado el año anterior la crisis económica mundial y con una tasa de crecimiento

de 3,2%, nada despreciable en momentos en que la mayoría de los países del planeta tenían números rojos.

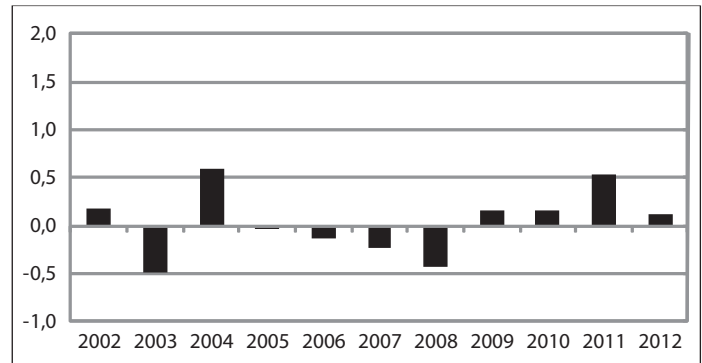
El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, reconoció que es precisamente en la justa distribución de la riqueza donde el país tiene una asignatura pendiente, pero que el actual Gobierno ha trabajado fuertemente en el combate al flagelo de la pobreza. Programas como Red de Oportunidades, 100 a los 70, Mi Primer Empleo, Becas Universales, proyectos de vivienda, subsidios a la electricidad y gas, el aumento del salario mínimo, y el más importante de todos: inversión en educación, son mencionados por el Gobierno de Martinelli como su estrategia para repartir riquezas.

Las leyes de mayor impacto en los planes económicos del Ejecutivo durante esta primera mitad de mandato han sido las reformas tributarias, el aumento en 40% del impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (ITBMS) que pasó de 5% al 7%. Con esta modificación se buscaba recaudar 300 millones de dólares adicionales para financiar los principales proyectos. En el orden social, las leyes que crearon el programa 100 a los 70 y la beca universal permitieron al Gobierno cumplir con algunas de sus promesas de campaña en los primeros 30 meses de administración.

Panamá ha experimentado una impresionante tasa de crecimiento promedio anual del PIB de un 8,6% en los últimos cuatro años y hasta el primer semestre del 2011, incluyendo la considerable desaceleración del 2,4% del 2009 como consecuencia de la crisis económica internacional. Cuando se desagregan estas cifras, se observa que los líderes del crecimiento han sido los rubros transporte y comunicaciones con un 24,3%,

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.65



inmuebles, servicios a empresas con 14,8% y comercio con un 14,4%.

Panamá ostenta el tristemente célebre reconocimiento de ser uno de los países con peor distribución del ingreso. De acuerdo con la encuesta de hogares realizada por el INEC en el año 2009, el 20% de la población de menores ingresos recibía apenas el 5,1% del ingreso total en tanto que el 20% de la población de mayores ingresos percibía el 48,5%. Es importante señalar que, si bien de acuerdo con el MEF los porcentajes de pobreza en Panamá han disminuido, todavía el 29% de sus habitantes sigue siendo pobre, mientras que el 11,4% vive en niveles de indigencia.

El Gobierno nacional señala con orgullo que con una cifra del 4,5% de desocupación ha alcanzado técnicamente el pleno empleo. Del total de la población ocupada, aproximadamente el 41,1% lo hace de manera informal; la población ocupada que realiza las labores que encuentra independientemente de su preparación profesional, ha crecido del 11% en el 2008 al 14,7% en el 2010.

Aunque se ha logrado mejorar el nivel de empleo, el costo de la vida y la agudización de la desigualdad no logran emparejarse con el alto nivel de crecimiento. Además, los grandes gastos para el financiamiento de las

Fortalezas

- PIB per cápita

Debilidades

- Brecha de ingreso
- Endeudamiento

megaobras han desatado una vorágine por la consecución de recursos que provocan una tenaz oposición política y ciudadana. El sector agropecuario ha sido relegado para favorecer el desarrollo de infraestructuras y el turismo.

La apuesta del Gobierno por la venta de los activos del Estado para financiar sus proyectos le llevó a diseñar un presupuesto histórico de 14.451 millones de dólares para el 2012. Pero la presión política y popular, atizada por la ruptura de la alianza del gobernante Cambio Democrático con el Panameñista, frenó las aspiraciones de la administración

Martinelli y colocó en una encrucijada al Ministerio de Economía y Finanzas para reducir los gastos, balancear el presupuesto y obtener los recursos para continuar con los megaproyectos.

Martinelli entra a su cuarto año de gestión con un hueco de 400 millones de dólares en el presupuesto. Y mientras el Gobierno lucha por obtener recursos, el panameño común sufre el alto nivel de inflación, los impuestos, los precios de la canasta básica y la reducción en su poder adquisitivo, pese al incremento de entre 15 y 18% (\$ 432 y \$ 490) en el salario mínimo a finales del 2011.

PARAGUAY

1. Paraguay ha avanzado levemente en desarrollo democrático, en alrededor de un 5 %, aunque mantiene prácticamente inalterado su nivel por debajo de los 4,000 puntos desde el año 2006 (gráfico 3.66). El incremento de la puntuación es producto de un escaso ascenso en la dimensión *respeto de las libertades civiles y derechos políticos* y más fuertemente de la subdimensión *social*. La dimensión de *calidad institucional y eficiencia política* y la subdimensión *económica* han sufrido retrocesos, con más intensidad en la dimensión III.

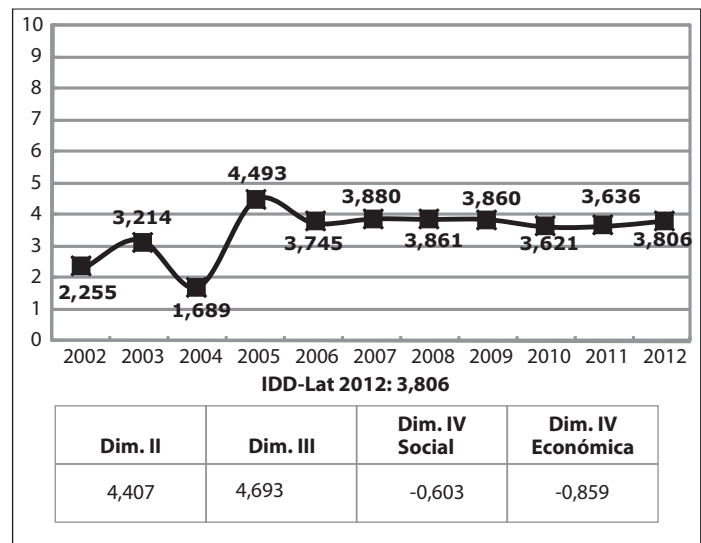
En el *ranking* general, a pesar de este leve incremento pierde un lugar, pasa al puesto n.º 11 y continúa en el grupo de países con bajo desarrollo democrático.

El presidente Fernando Lugo cumplió su tercer año de mandato a mediados de 2011, en medio de críticas de la oposición por la falta de avances y de propuestas para dar solución a los problemas de la ciudadanía. El presidente reconoció que el proceso que se inició tras su llegada al gobierno no fue el esperado. “Nos encontramos con la agradable sensación de un proceso. Pese a que no ha sido el que soñamos, fue con creces el que pudimos encarar dejando hitos en materia de logros que fundarán un nuevo Paraguay y que ni los profesionales del pesimismo pueden negar”. Entre los logros, el presidente citó el ritmo de terminación de la represa de Yacyretá, obra que fue finalizada bajo su gobierno.

En el Partido Colorado, la dirigencia criticaba la falta de liderazgo y de proyectos de la administración ejecutiva. La cúpula colorada advertía, con ironía, que Lugo se había transformado en el principal jefe de campaña para esa tienda política, porque el desgobierno

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Paraguay

Gráfico 3.66



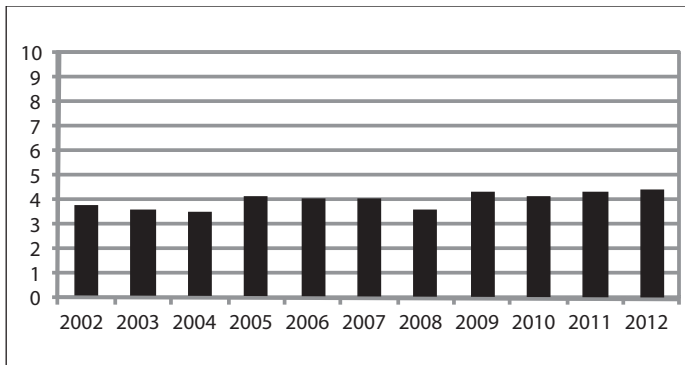
le pasaría la factura a la coalición oficialista en los comicios presidenciales de 2013. En el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), principal sostén del gobierno, algunos dirigentes resaltaban el repunte económico como el punto central en los tres años de la gestión de Lugo, pero admitían que había aumentado la inseguridad y fracasado la reforma agraria.

El gobierno logró despejar el constante acoso opositor que amenazaba con un juicio político. Pero si el panorama se aclaró en dicho sentido, una nueva lógica política empezó a desarrollarse en torno a las elecciones generales previstas para el 21 de abril de 2013. Gobierno y oposición entraron en un proceso temprano y traumático en búsqueda de una fórmula de victoria para las elecciones de 2013. Hacia finales del año la confusión iba *in crescendo*. La predicción de los observadores era que el 2012 sería un año complicado y problemático.

La alianza que llevó a Lugo al poder fue de carácter esencialmente electoral y no logró consolidarse como alianza política con

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.67



Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y los derechos políticos
- Género en el Gobierno
- Inseguridad

proyección al futuro. Eso hizo que los primeros tres años de gobierno se caracterizaran por una lucha sin cuartel entre los diferentes componentes de la alianza en aras a posicionarse con vistas al 2013.

2. El pequeño avance de la dimensión que evalúa la *democracia de los ciudadanos*, coloca a Paraguay apenas por encima de los cuatro puntos. Esto se debe en gran medida a la estabilidad de los valores alcanzados en las distintas variables que componen esta dimensión en niveles críticos y a la mejora observada en los indicadores *condicionamiento de libertades civiles por inseguridad y género*. A tono con su comportamiento general en el IDD-Lat, en esta dimensión Paraguay fluctúa entre los 3,000 y los 4,000 puntos, aunque entre 2009 y 2011 ha estado levemente por encima de ese guarismo (gráfico 3.67). El país ocupa el 11.º lugar del *ranking* regional, subiendo dos escalones como consecuencia del mayor deterioro en este campo de la República Dominicana y Colombia, que en la medición anterior le precedían. Pero no logra alcanzar el promedio regional.

Todo el año 2011 estuvo marcado por el electoralismo, que estableció la pauta del debate político superestructural y también en las bases. Los aliados de Lugo insistían en

que se postulara como candidato a senador, tras el fracaso del plan que buscaba introducir en la Constitución la figura de la reelección para las elecciones generales de 2013. El proyecto de eliminación de la senaduría vitalicia tenía como objetivo allanar el camino para que Lugo pudiera postularse a esa Cámara en dichas elecciones.

La supuesta “necesidad” de continuar con el *proceso de cambio* iniciado por Lugo y el PLRA era el eje central del oficialismo. En cualquiera de los casos esto podría implicar el relanzamiento de la Alianza para el Cambio. Su discurso central sería: “Todos contra el retorno del Partido Colorado” y “Consolidemos el proceso de cambio”. La izquierda luguista era la vanguardia en este tema, tomando las más variadas iniciativas, como la campaña por la reelección o la eliminación de la senaduría vitalicia. Ninguno de los dos planes pudo prosperar. Los liberales reclamaron a los izquierdistas liderar la lista presidencial, pero los aliados de Lugo se opusieron. Las discusiones se tornaron más amargas ante la falta de un plan B del Gobierno cuando el Congreso, dominado por la mayoría opositora, rechazó una enmienda constitucional que hubiera permitido a Lugo presentarse a la reelección.

Por otro lado, el Partido Colorado puso toda su apuesta en volver a gobernar. El discurso central era que el gobierno de Lugo-PLRA no había sido mejor al de ellos sino que, peor, una estafa, un engaño. Y marchaba a paso firme impulsando a su candidato Horacio Cartes, un rico empresario y dirigente deportivo. Los sondeos empezaban a ubicarlo como el candidato con mayor intención de voto, con el 21,6% de las preferencias. El liberal Efraín Alegre —un exministro de Obras que fue cesado y estaba enfrentado con Lugo— aparecía segundo con 11,6%.

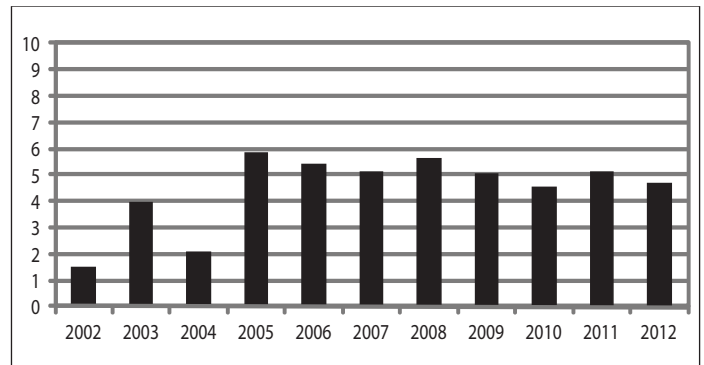
La inseguridad ciudadana es uno de los temas más espinosos del Gobierno, debido a que los sucesivos cambios de ministros del Interior o de comandantes de la Policía Nacional no pudieron dar una solución definitiva a la cada vez más creciente inseguridad que padece la población en general. Según el Estudio Global de Homicidios 2011, de Naciones Unidas, Paraguay ocupa el séptimo lugar entre los países sudamericanos con mayor cantidad de crímenes.

3. En la dimensión de *calidad institucional y eficiencia política*, Paraguay ha empeorado con respecto al año anterior en más del 8% (gráfico 3.68) y se volvió a ubicar por debajo del promedio regional, aunque todavía lejos del nivel alcanzado en el año 2002, donde logró su peor rendimiento. El descenso obedece a peores resultados en los indicadores de *participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo y desestabilización de la democracia*. Las variables que mejoraron son *índice de percepción de la corrupción y accountability*. Ocupa el octavo lugar en el *ranking* regional, bajando tres lugares con respecto al año 2011.

A pesar de la mejora en la puntuación del *índice de percepción de la corrupción*, Paraguay ostenta el lugar número 154, ocho puestos por debajo del que tenía en el año 2010. Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) revelaba que —solo en el 2010— el daño patrimonial al Estado paraguayo, producto de la corrupción, había sido de 642.000 millones de guaraníes. Como ejemplo de la gravedad del daño social que esto significa, se señalaba que con ese mismo dinero se podrían haber adquirido 536 millones vasos de 200 ml de leche entera para niños por mes. Además se impidió la adquisición de 1.294 millones de raciones de panificados para niños por año.

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.68



El presidente Lugo afirmó que su Gobierno se esforzaba en transparentar la gestión del Estado y fortalecer la lucha contra la corrupción. Esa fue la primera referencia del jefe de Estado sobre el asunto después de que la organización Transparencia Internacional situara a Paraguay como el segundo país más corrupto de América Latina. Lugo destacó que la calidad de vida de los ciudadanos no iba a mejorar hasta que no se intensificara la lucha contra las prácticas corruptas e indicó que su administración estaba abocada a transparentar *el sector público*. Por su parte, el jefe de Gabinete, Miguel López Perito, recordó que una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) auditaría en 2012 las instituciones públicas del país para emitir un diagnóstico sobre casos de corrupción.

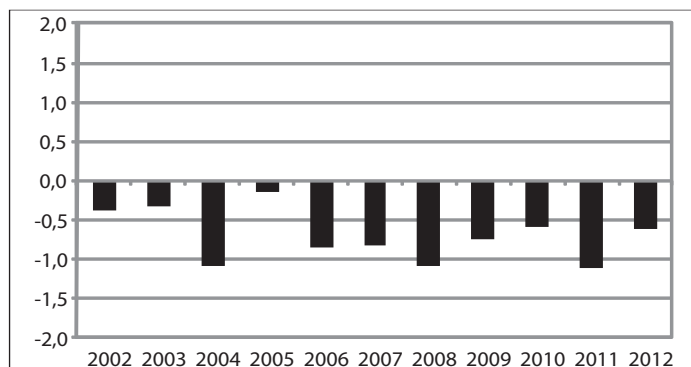
Un tema candente durante el 2011 fue el debate que se desató en torno a la posibilidad de la reforma de la Constitución. La Carta Magna dispone que, terminado el mandato, cada expresidente puede asumir una senaduría vitalicia con voz pero sin voto, y parte del oficialismo pretendía cambiar ese artículo. La iniciativa había pasado con éxito por la Cámara de Diputados, que le dio media sanción, pero el Senado rechazó el proyecto. El petitorio, con aproximadamente 100.000

Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- *Accountability* legal y social
- Desestabilización de la democracia

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.69



Debilidades

- Mortalidad Infantil
- Gasto en salud y en educación
- Población bajo la línea de la pobreza
- Desempleo
- Matriculación secundaria

firmas para que el Parlamento tratara en el recinto la iniciativa, había sido presentado el 27 de junio por el Frente Guazú, la coalición de izquierda que apoyaba al presidente. Los 31 senadores presentes votaron en contra, luego de una moción de estudio propuesta por el senador Alfredo Jaeggli, del Partido Liberal, teniendo en cuenta que no figuraba en el orden del día de la sesión. La Constitución de Paraguay prohíbe la reelección presidencial en cualquiera de sus formas, ya sea consecutiva o alternada. La iniciativa proponía una enmienda del artículo 229 para que fuera sometida a plebiscito en octubre, junto con la consulta sobre el voto de los paraguayos que viven fuera del país.

El voto en contra del plenario de senadores estuvo precedido por un informe negativo de la Comisión de Legislación de la Cámara alta. "Lo correcto hubiera sido que el Congreso escuche la voluntad popular. Los legisladores tenían que haber establecido 70.000 falsedades antes de rechazar, pero no les importaron las 100.000 firmas", manifestó el asesor jurídico de la presidencia, Emilio Camacho. El presidente Lugo, quien había manifestado en reiteradas ocasiones que no accedería a una reelección, no hizo declaraciones con respecto al rechazo de la

modificación de la enmienda del artículo 229. Los seguidores de Lugo pasaron a intentar la eliminación de la senaduría vitalicia. Con esta decisión del Senado, cuando terminara su periodo de gobierno, en agosto de 2013, Lugo debería ser senador vitalicio, pero sin voto, de acuerdo con la norma vigente. Al respecto, Lugo consideró que la Cámara alta hizo muy bien en rechazar el proyecto de ley sobre la senaduría vitalicia.

4. En la dimensión que evalúa el *poder efectivo para gobernar*, el puntaje recibido en el subdimensión *social* logra superar el nivel alcanzado el año anterior, en que había obtenido la peor puntuación de toda la serie (gráfico 3.69), por mejores resultados en los indicadores de *gasto en salud* y *eficiencia educativa*, a pesar de las caídas en *mortalidad infantil*, *pobreza* y *desempleo*. Paraguay aún presenta valores muy por debajo de los promedios regionales y, en consecuencia, sigue mostrando carencias profundas en sus resultados sociales. Ocupa el décimo lugar del *ranking* (ganó cinco lugares con respecto al 2011), aunque se mantiene lejos del promedio regional.

Como el motor principal del crecimiento ha sido nuevamente el sector capital-intensivo de la soja y la carne, las altas tasas de crecimiento se reflejaron solo parcialmente en el empleo. Así la tasa de desempleo de 2011 para Asunción y la región central, que concentran más del 60% de la población económicamente activa urbana se situó en torno al 7%, similar a la del 2010, y la de subempleo aumentó ligeramente de 23,9% a 24,5%.

Similar en líneas generales fue el comportamiento de los porcentajes de pobreza. En 2010 el 34,7% de la población se encontraba por debajo de la línea de la pobreza y el 19,4% vivían en la indigencia. La pobreza,

como es de esperar, afecta con mayor fuerza a la población rural.

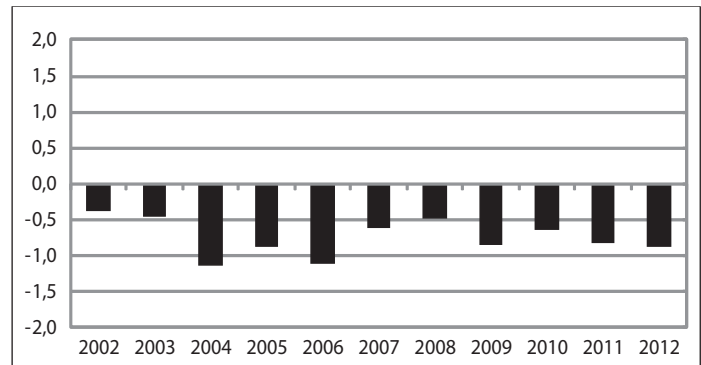
La evolución de la pobreza en los últimos tres años ha sido contradictoria. El total de la población bajo la línea de pobreza disminuyó de 37,9% en 2008 a 34,7% en 2010. Esta reducción obedece a la disminución drástica de la pobreza urbana entre 2008 y 2009, pues entre 2009 y 2010 los guarismos cambiaron poco. Además, la pobreza rural y la indigencia, rural y urbana, aumentaron ligeramente.

La relatora de las Naciones Unidas para la extrema pobreza dijo que, pese al crecimiento del PIB, del 15% en 2010, en Paraguay la desigualdad “es abismal”. Paraguay ha conocido un retroceso importante en el índice de desarrollo humano, que mide las desigualdades económicas y sociales, situándose en el puesto 107 de un total de 185 países. Además la ONU precisó que más de un tercio de la población actual (34,7%) sigue siendo pobre y que un 19,4% viven en la extrema pobreza, porcentaje que no ha variado desde el período presidencial de Nicanor Duarte (2003-2008).

Pero más allá del problema del empleo y la pobreza, la tensión social se centró como desde hace tiempo en el problema del acceso a la tierra. La campaña de Lugo había hecho de la reforma agraria su bandera principal en el campo de la política doméstica, pero los años fueron pasando sin progresos significativos. El INDERT, el instituto encargado de la reforma agraria, es lo más parecido que existe a un barril sin fondo de corrupción, y el Gobierno, con excepción de la breve gestión del ingeniero Eugenio Alonso, poco o nada hizo por sanearlo. Al contrario, las viejas prácticas continuaron, y nuevos privilegiados se aprovecharon de la estructura ya montada para continuar con el mismo juego.

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.70



5. Paraguay obtiene nuevamente un peor puntaje en la subdimensión *económica* —en otra demostración de que el crecimiento no siempre viene acompañado de desarrollo— por puntajes más bajos en *brecha de ingreso*, *inversión* y *puntaje en el índice de libertad económica* (gráfico 3.69). Los indicadores restantes, *PIB per cápita* y *endeudamiento*, han tenido un mejor comportamiento con respecto al año anterior, aunque no logran compensar las caídas del resto de las variables. En el *ranking* regional mantuvo su ubicación en el 15.º lugar, por debajo del promedio regional.

El modelo de desarrollo económico de Paraguay sigue siendo tradicional. Las exportaciones de soja y las remesas del extranjero siguen siendo la principal fuente de divisas. El Gobierno reflató el proyecto del impuesto a la renta personal (IRP), paralizado en el Congreso desde la época de Nicanor Duarte, como uno de los pilares de la formalización de la economía del país, que en 2010 apuntó la mayor tasa de expansión de su historia: el 15,3%. Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja y el quinto productor global de esa oleaginosa; la segunda fuente de ingresos radica en la carne, de la que es productor número 16 y octavo exportador en el mundo. El país se subió a este carro de los buenos precios de las materias primas,

Debilidades

- PIB per cápita
- Brecha de ingreso
- Endeudamiento
- Inversión

con su agricultura primero y la ganadería después, a partir de 2005, motorizado por la demanda de alimentos en Rusia y Chile, los principales destinos de la carne bovina.

Paraguay cerró el 2011 con una inflación del 4,9%, cercana a la banda media de la meta referencial y sustancialmente por debajo del 7,2% del año anterior, pese al temor por un descontrol de los precios en el primer trimestre del año.

Las cuentas externas mostraron también un saldo favorable, pese al déficit de la balanza comercial, gracias a los ingresos de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá, las remesas de los paraguayos en el exterior y la afluencia de capitales externos.

El comportamiento de la política fiscal ha sido sólido. En 2011 Paraguay cerró el octavo año consecutivo de superávit fiscal primario, 1,4% del PIB. La deuda externa disminuyó del 18% del PIB en 2007 a 9,8% en 2011.

Luego de la crisis de 2008, que llevó a una caída del PIB del orden del 3,8% en 2009, las efectivas políticas anticíclicas produjeron

una recuperación económica en 2010 cuando Paraguay alcanzó la tasa de crecimiento más alta de su historia, 15,3%, guarismo superado solo por Qatar. En 2011, el crecimiento fue más moderado y la tasa fue del 4%. A pesar del alto crecimiento económico, en el plano social los conflictos se incrementaron, especial pero no únicamente en torno a la problemática del acceso a la tierra y la polémica en torno a la *sojización* de la agricultura paraguaya y el rol en esta de los llamados *brasiguayos*.

Estos resultados económicos extraordinariamente positivos crearon un ambiente de optimismo en el Gobierno y en el sector empresarial, que lamentablemente no pudieron ser capitalizados en todo su potencial debido a conflictos sociales latentes y una coyuntura política enredada. A esto se agrega que se pronosticó que en el año 2012 el país podría de nuevo caer en recesión debido a la fuerte sequía del último semestre, el rebrote de la fiebre aftosa a fines de 2011 y las trabas comerciales impuestas por Argentina a las exportaciones paraguayas.

PERÚ

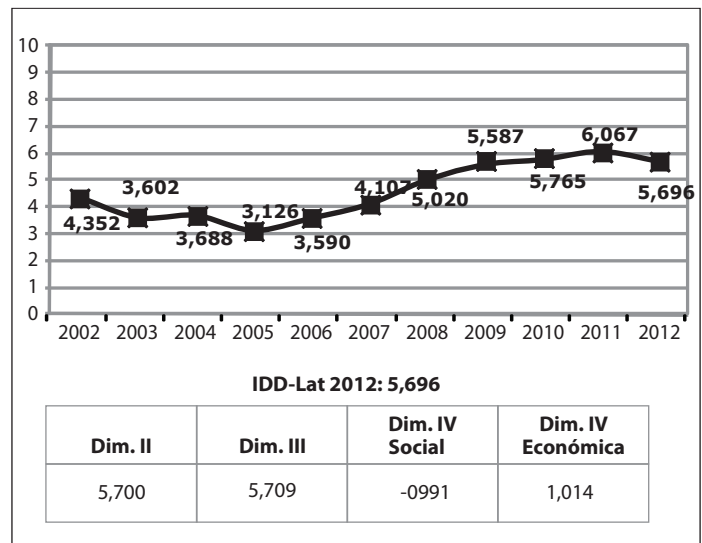
1. Perú muestra, después de seis incrementos consecutivos de su puntuación, un descenso en su puntaje final de desarrollo democrático. Desciende más del 6% respecto de la medición anterior y baja su posición en el *ranking* regional, pasando del cuarto al quinto lugar (gráfico 3.71). Aun con este comportamiento sigue permaneciendo en el grupo de países con desarrollo democrático medio. El retroceso se debió a los peores resultados en la dimensión III y fundamentalmente en la subdimensión *social*. La caída en estas variables no pudo ser compensada con los avances en la dimensión II y en la subdimensión *económica*.

El presidente Alan García Pérez culminó su cargo el 28 de julio de 2011, con un nivel de aprobación popular de 46,2%, tras cinco años de mandato. El Perú que dejó tiene altos índices de crecimiento económico y grado de inversión. Durante su gestión, el presidente García incentivó la apertura de mercados con varios acuerdos de libre comercio y promovió inversiones privadas que casi alcanzaron los 19.000 millones de dólares solo en minería e hidrocarburos, entre 2000 y 2009. A pesar del éxito en el campo económico, García se vio acechado por escándalos de corrupción en el ámbito político. Aunque no hubo un caso que lo vinculara directamente, varios miembros de su gobierno sí estuvieron implicados en graves irregularidades en la licitación de lotes petroleros. Ese escándalo derribó a su entonces gabinete ministerial.

El 28 de julio de 2011 asumió Ollanta Humala, quien fue elegido en segunda vuelta. Solo contaba con 47 diputados del total (130) y para alcanzar la mayoría se vio en la

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Perú

Gráfico 3.71



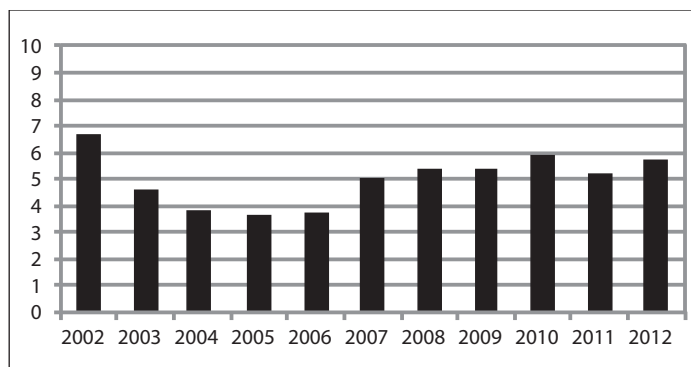
necesidad de concertar con Perú Posible y firmar una hoja de ruta impuesta por sus aliados.

La dirección económica del gobierno pretendió facilitar sobre todo las inversiones provenientes del exterior como fuente de ingresos y mantener su calificativo de país financieramente sólido apoyándose en notaciones internacionales de empresas calificadoras de riesgos financieros como la Standar&Poor's y la Moody's (que le otorgaban buenas calificaciones A y B). Ni bien asumió Humala las riendas del país, optó por la continuidad en materia económica y encargó la cartera de Economía y Finanzas al viceministro del MEF durante el gobierno de Alan García, Luis Miguel Castilla. Además, dejó sentado en su asiento al titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

2. La puntuación en la dimensión II, *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, ha detenido la caída del año anterior y avanzó en más del 9% con respecto

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.72



Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y los derechos políticos
- Género en el Gobierno

a la puntuación de este, pero sin alcanzar el mejor puntaje de la serie, obtenido en 2002 (gráfico 3.72). La variación positiva es producto de ascensos en los indicadores de *voto de adhesión política e inseguridad*. El resto de las variables se mantuvo estable en valores aún muy bajos, fundamentalmente con respecto al *respeto de los derechos políticos* y el único indicador que ha sufrido un retroceso es aquel que mide la *participación de la mujer en la vida política*. Sigue ocupando el sexto lugar del *ranking* regional. Su índice vuelve a estar por encima del promedio regional.

Las elecciones generales del Perú de 2011 se realizaron el 10 de abril, con el fin de renovar los cargos políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La segunda vuelta electoral se realizó el 5 de junio, entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, es decir Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Cerca de 20 millones de peruanos fueron convocados a las urnas para elegir el sucesor de Alan García, quien había vencido en el 2006 al ahora nuevo presidente. Con una base electoral mayoritariamente indígena, concentrada en la parte meridional andina y ajena a la incipiente prosperidad de las grandes urbes, Ollanta Humala se alzó con la victoria. Se proclamó presidente

en una segunda vuelta muy apretada, con 50,9% de los votos.

En relación con la medición de derechos y libertades, los puntajes asignados por Freedom House se han mantenido estables desde el 2002; estos son en las escalas de *derechos políticos y libertades civiles* de 2 y 3, respectivamente. Esto significa que el Perú es un país en el cual los derechos políticos son en general respetados pero existen problemas de corrupción política, violencia y discriminación política contra alguna minoría, o influencia militar indebida en el proceso político. En relación con las libertades civiles, estas existen pero son precarias y algunas de ellas muestran serias deficiencias.

México tiene la tasa más alta de victimización (hechos de violencia o robos) de América Latina con un 42%, seguido de cerca por Perú con un 40%, según el Latinobarómetro 2011. La percepción no tiene nada que ver con los datos objetivos; por ejemplo, en Honduras, que según la ONU es el país más violento del mundo con 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo el 36% de los habitantes dijo haber sido víctima de un crimen. Asimismo, en países como Perú y Argentina, que poseen las tasas de homicidios más bajas del continente, un 40% y un 39% de la población, respectivamente, dijo que fue agredido. A fin del 2011, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) aprobó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social 2012, que priorizará el combate de los delitos desde sus orígenes, mediante la prevención y la educación. El diagnóstico presentado en el Plan demostraba que en el país los casos de violencia familiar o doméstica (58%) superaban a los de violencia delincual (42%), motivo por el cual se incluyeron políticas de convivencia social que buscaban recuperar

los valores y las buenas costumbres en el hogar, la escuela y la vida diaria.

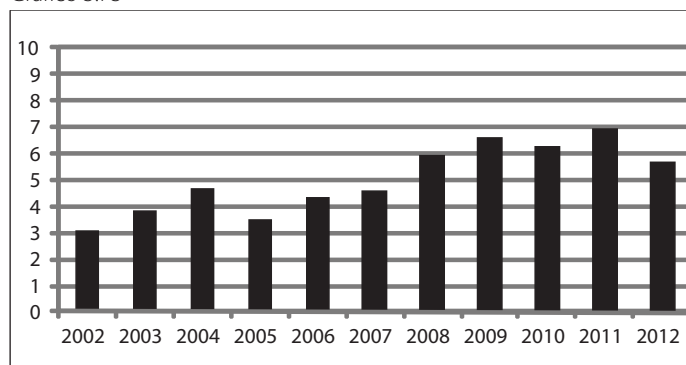
3. El desempeño de la dimensión III, que mide la *democracia de las instituciones* ha tenido un comportamiento negativo, como consecuencia de la obtención de peores valores en los indicadores de *percepción de la corrupción, accountability* y *desestabilización*. El descenso roza el 18% con respecto al valor alcanzado en el 2011 (gráfico 3.73). El indicador que corresponde a la *participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo* es el único que se mantuvo estable. Perú ocupa el quinto lugar del ordenamiento regional, empeorando una posición. Su índice sigue manteniéndose por encima del promedio regional.

De acuerdo con el informe presentado por el contralor Fuad Houry ante el Congreso, el daño directo para el Estado por casos de corrupción entre enero del 2009 y julio del 2011 asciende a S/ 68.094.872. Esta cifra solo corresponde a parte de las auditorías hechas en ese periodo, es decir, que fácilmente se incrementará cuando se determinen las pérdidas de los procesos aún en curso. Uno de los montos más escandalosos es el del Seguro Integral de Salud (SIS), donde se pagó más de S/. 27 millones *en exceso* por “prestaciones tarifadas a los establecimientos de salud”.

El primer caso de corrupción, en los comienzos del gobierno de Ollanta Humana, se presentó con el hermano del presidente, que viajó a Rusia para hacer contrataciones con las autoridades de dicho país. En esos momentos Ollanta Humala era solo presidente electo, por lo que no fue considerada una falta gubernamental, sino solo familiar. Posteriormente, se presentó otro tipo de corrupción disfrazada con nominaciones de

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.73



familiares y conocidos de la pareja Humala, a quienes se favorecieron con cargos públicos (SUNAT, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OSCE, y embajada de Perú en Francia) y la nominación del Sr. Eduardo Roy (abogado defensor del presidente en el caso *Madre Mía*) como asesor jurídico de la Presidencia.

Más de 50 militares y policías fueron asesinados por los remanentes de Sendero Luminoso durante el Operativo Excelencia 777, que desde agosto de 2008 a mediados de 2009 intentó consolidar bases contrasubversivas en la zona liberada de Vizcatán, un recóndito paraje del Valle del Río Apurímac y Ene (VRAE), el principal valle cocalero del país y del mundo. El gobierno reconoció el fracaso de este plan. Para Alan García “el VRAE en Vizcatán es Vietnam. Salvo aceptar que mueran muchos soldados, entrar en esa selva es muy difícil”.

Para los expertos en narcotráfico, la estrategia peruana ha fracasado. Durante el gobierno de Alan García se creó un Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y se ha procesado por este delito al clan de los Sánchez Paredes, una familia norteña sospechosa de levantar un emporio minero gracias a dinero ilícito. Sin embargo, todavía no se hace efectiva la ley contra el

Fortalezas

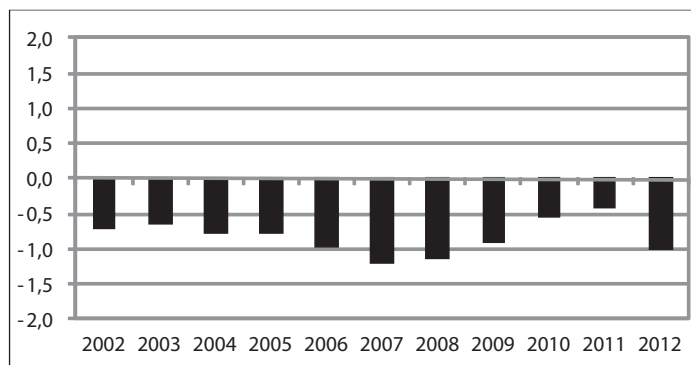
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo

Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- *Accountability*
- Desestabilización de la democracia

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.74



Debilidades

- Eficiencia en salud y en educación
- Población bajo la línea de la pobreza
- Desempleo

tráfico de los insumos químicos necesarios para la fabricación de cocaína y tampoco se han consolidado planes de desarrollo e infraestructuras para los principales valles cocaleros.

El camino del desarrollo basado en la minería, los hidrocarburos y la agroexportación llevó al país al crecimiento, pero también a la inestabilidad social por las protestas de comunidades andinas y amazónicas contra proyectos extractivos. El crecimiento de los conflictos ha sido directamente proporcional al de las hectáreas concedidas para proyectos mineros: de 6 millones en 2006 a 21 millones en 2010, extensión que equivale a casi un 20% del país. Al mismo tiempo, más de un 70% de la Amazonía está lotificada para la exploración petrolera. Durante el gobierno de Humala se ha pasado de 80 conflictos sociales al mes en 2006 a 234, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Según la misma institución, solo en los últimos tres años 80 personas han muerto y 1200 han resultado heridas durante el estallido de protestas.

4. En la dimensión IV, que mide el *poder efectivo para gobernar* de la democracia peruana, se observa un retroceso importante en la subdimensión *social*, casi alcanzando el peor

valor de la serie, que fue el obtenido en 2007 (gráfico 3.74). Esto es producto de retrocesos de los indicadores de *gasto público en salud y en educación, hogares bajo la línea de la pobreza, desempleo y matriculación secundaria*. El único indicador que mostró una tendencia positiva fue el de *mortalidad infantil*. Por todo esto, baja cuatro posiciones en el *ranking* latinoamericano, pasando del décimo puesto al n.º 14.

El reto de Ollanta Humala al asumir era que la prosperidad de dos décadas de crecimiento económico sostenido llegara a los sectores más postergados, en un país con 10 millones de pobres (el 34% de la población). Humala, que hereda un país que ostentaba un incremento del PIB de 7% en promedio anual, prometió, entre otras cosas, aumentar el salario mínimo, otorgar pensiones a los mayores de 65 años, bajar el precio del gas y guarderías para menores de tres años con comida gratuita incluida. La gran incógnita era si lo iba a intentar cumplir a partir de las convicciones de izquierdista radical expresadas en 2006, o con su nueva identidad de moderado seguidor del modelo brasileño o uruguayo.

Por otro lado, Alan García aspiraba abandonar la presidencia habiendo reducido la pobreza de un 49% en 2005 a un 30% en 2011. Pero si bien la pobreza urbana disminuyó, la rural se consolidó. Un 60% de los peruanos rurales es pobre y regiones andinas como Huancavelica o Apurímac superan esta triste media, llegando a más del 70%.

El problema de redistribución económica se perfilaba al término de la presidencia de Alan García. Los salarios habían caído 10% en una década mientras que los beneficios empresariales habían subido un 30%. En las urbes, en las que se concentra la mayoría del electorado peruano, las principales

demandas eran trabajo y seguridad ciudadana por el incremento de la delincuencia, además de progresos en los deficientes sistemas de salud, educación y una mayor regularización laboral. Entre el 2006 y el 2011, el presupuesto del PIB para educación disminuyó de 3,3 %, en el 2006, a 2,9 % en el 2011, a pesar de que en América Latina el promedio era de 4,6 % y que según el proyecto educativo nacional, este debería alcanzar el 6 % del PIB. En las zonas rurales solo el 40 % de niños recibe educación inicial.

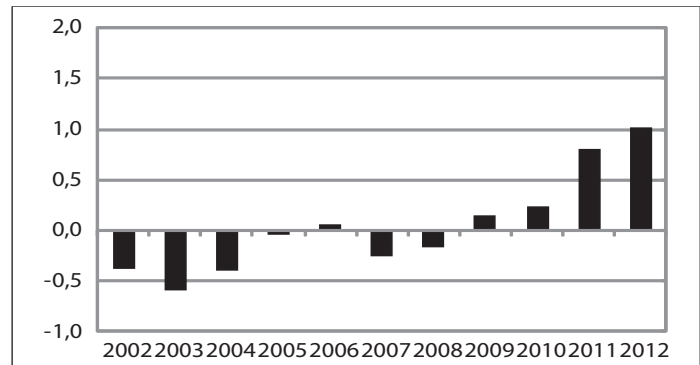
5. En la subdimensión *económica*, el resultado ha sido superior al obtenido en el año anterior (gráfico 3.75), producto de resultados favorables en todos los indicadores menos en las variables de *libertad económica* y *PIB per cápita*. El resto de las variables tuvieron un comportamiento positivo, especialmente el de *brecha de ingreso*. Por este mejor comportamiento, Perú logra ubicarse en el tercer lugar del *ranking* regional, mejorando dos posiciones con respecto al 2011.

De los primeros meses de gestión de Ollanta Humala se pueden destacar tres medidas: Primero, el logro de un aumento sustancial de la contribución de las empresas mineras a través de un acuerdo de consenso que permitió no romper los marcos legales de estabilidad tributaria y límites de competitividad. Aunque algunos sectores de la izquierda cuestionaron el monto y la forma, el ingreso de recursos directos para el Gobierno central para emprender proyectos mayores de infraestructura —importantes no solo para cerrar las brechas del país sino también para incentivar la economía en momentos de crisis— es importante.

Segundo, aunque con muchas más complicaciones, se avanzó en las negociaciones

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.75



para dedicar de manera exclusiva las reservas de gas del proyecto Camisea al mercado interno peruano. Ello es importante no solo por ser una promesa electoral central y por el ahorro que supondría para la nación abastecerse con un gas barato; ante todo es clave porque podría suponer la puesta en marcha de ambiciosos planes de desarrollo gasífero —incluyendo plantas petroquímicas y de fertilizantes— para el sur andino, la región con mayores índices de pobreza y el enclave electoral de Ollanta Humala.

Tercero, la captación de mayores recursos para el gobierno central era justificada por la necesidad de potenciar y redirigir los programas sociales con el fin de reducir dramáticamente la pobreza, especialmente en las áreas rurales. La pronta creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo función es la de centralizar los programas y tornarlos más eficientes evitando los serios problemas de duplicidad y filtración existentes, es señal de la prioridad dada al tema.

En el 2011, Perú tuvo un crecimiento económico cercano al 7 % y la expansión en el 2012 será de 5,4 o 5,5 %, lo que permitirá ampliar el Presupuesto Público para dar más a la población y continuar los programas sociales. El nivel de endeudamiento externo de país es relativamente bajo, pues no

Fortalezas

- Índice de libertad económica
- PIB per cápita
- Inversión

Debilidades

- Brecha de ingreso

llega a 20% del PIB. Además, existe un fondo de Estabilización Fiscal (FEF) de más de USD 7.000 millones y un superávit fiscal de 2% del PIB. Asimismo, se creó el programa Cómprale a mi Perú, con un fondo de más de 300 millones de soles, para reactivar a las micro y pequeñas empresas, y se invirtieron

60 millones de soles en más de 150 proyectos en las localidades del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE).

Perú fue reconocido como una economía emergente en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), lo que lo sitúa como socio estratégico de China.

REPÚBLICA DOMINICANA

1. República Dominicana es uno de los países que descendió en su medición del IDD-Lat con respecto al 2011 (gráfico 3.76), en más del 5 %, lo que ha producido su inclusión en este año en el grupo de países con *mínimo desarrollo democrático*. A pesar del retroceso, República Dominicana logra mejorar en una posición, del 15.º al 14.º lugar. El retroceso es consecuencia de comportamientos negativos en las dimensiones *respeto de los derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política*, y en la subdimensión *social*. La única subdimensión que mejora y fuertemente es la *económica*, donde obtiene puntuación positiva, aunque todavía no muestra valores que indiquen un proceso de transformación económica.

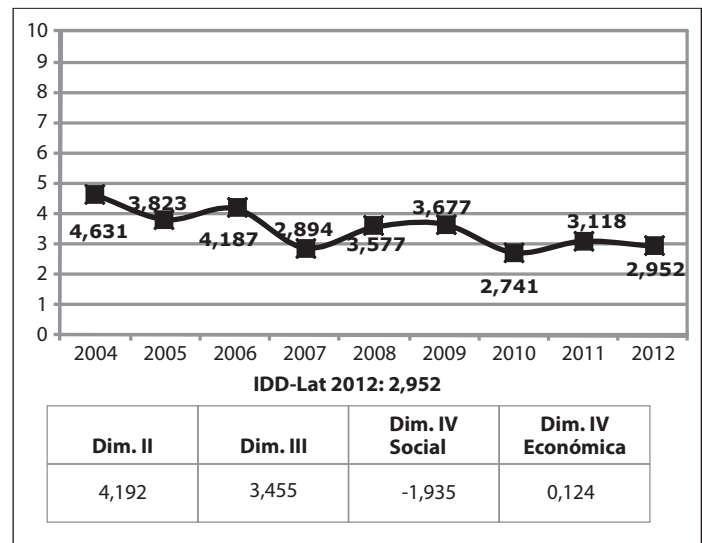
El presidente Leonel Fernández inició en el 2011 el último año de su tercer período gubernamental con importantes retos económicos, institucionales y políticos, entre los que resaltan garantizar un proceso electoral democrático y mantener la estabilidad macroeconómica en medio de graves turbulencias nacionales e internacionales.

Fue relevante que a lo largo del año la República Dominicana resultó reprobada en la generalidad de las evaluaciones internacionales, especialmente en las más acreditadas como las del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial (FEM), Transparencia Internacional, Amnistía Internacional, Programa de Promoción de la Reforma Educativa para América Latina (PREAL) y Latinobarómetro.

El año 2011 concluyó con tantas incertidumbres como comenzó, primero institucionales y políticas, y después en el

Evolución del IDD-Lat 2004-2012 en República Dominicana

Gráfico 3.76

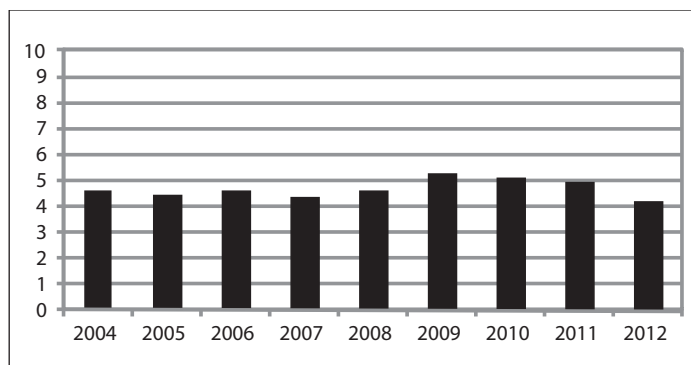


orden económico, sin que pueda asegurarse que el Gobierno quiera y pueda mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), congelado en el último trimestre del 2011. A pesar de los altos déficits fiscales y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, con un escenario económico internacional volátil y el encarecimiento de las importaciones que agravan el déficit de balanza de pagos, el Gobierno logró mantener la estabilidad macroeconómica y el crecimiento, gracias a un alto endeudamiento.

Además de la estabilidad macroeconómica, entre los elementos que califican positivamente se destacan los progresos en materia de infraestructura, impulsados por la construcción de obras tales como túneles, elevados o el polémico metro de Santo Domingo. Sin embargo, gran parte de este avance ha sido financiado con préstamos y, en consecuencia, se incrementó el endeudamiento externo, lo que impone límites al país a la hora de dar respuesta a la nueva crisis internacional.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.77



Debilidades

- Índice de respeto de las libertades civiles y derechos políticos
- Inseguridad
- Género en el Gobierno

2. Bajó nuevamente la puntuación en la dimensión *derechos políticos y libertades civiles*, como viene sucediendo desde el 2010, y la reducción en este caso es de más del 14%, producto de descensos en casi todas las variables. Lo más preocupante son las peores calificaciones recibidas en los *índices de derechos políticos y de libertades civiles*. Solo muestra un leve repunte el indicador que mide la *participación de la mujer en la política*. El registro de 2009 había sido el más alto para el país y el único con el que había logrado superar el promedio regional (gráfico 3.77). Con este resultado, República Dominicana presenta una brusca caída en el *ranking* regional y pasa del octavo al 15.º lugar. Su puntuación final no alcanza el promedio regional.

El narcotráfico, la delincuencia y el crimen en todas sus expresiones, incluyendo el sicariato, amargaron la vida de los dominicanos a lo largo del 2011. Las muertes violentas pasaron de 2.300, incluyendo al menos a 225 mujeres, más de un centenar de ellas en el propio ámbito familiar, lo que configura un desbordamiento de los feminicidios, a pesar de un mayor esfuerzo del ministerio público y de la sociedad en general por combatirlos.

El narcotráfico registró escándalos mayúsculos, incluyendo crímenes múltiples y ejecuciones de la mayor crueldad. Lo más

preocupante fue que en casi todos los cargamentos incautados resultaron implicados oficiales y agentes de los diversos organismos de seguridad del Estado. José Ramón Fadul, ministro de Interior y Policía, sostuvo que los niveles de inseguridad ciudadana estaban en baja en todo el país, fruto del aumento del patrullaje y las labores de inteligencia, así como de medidas tales como el mejor equipamiento y fortalecimiento de la Policía nacional mediante un préstamo de 138 millones de dólares, que había aprobado el Congreso Nacional para abastecer a la institución con más armas, equipos de comunicación y vehículos, y para fortalecer las medidas de prevención de acciones delictivas y de narcotráfico en todo el país.

Por otro lado, los partidos mayoritarios lograron elegir sus candidatos presidenciales y de inmediato se embarcaron en una prematura campaña electoral con un desbordamiento de gastos. El oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), liderado por el presidente Fernández, escogió en junio de 2011 al exministro de la Presidencia, Danilo Medina, como candidato a las elecciones del 2012. Medina se enfrentará nuevamente al expresidente Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien lo había derrotado en los comicios del 2000 y que aparece mejor ubicado en las encuestas. El tercer partido del sistema prosiguió su tendencia a la dispersión, incapaz de cumplir el mandato de un Congreso que planteó la elección de candidato para mediados del año, mientras las encuestas lo degradaban progresivamente. El paso del tiempo solo le iba dejando la opción de ratificar la alianza que sostiene, desde el 2010, con el partido de gobierno. Al concluir el año parece haber fracasado, una vez más, el propósito de diversos grupos emergentes por constituir

una candidatura de amplio espectro, que ofreciera una opción alternativa para aquellos insatisfechos con el sistema partidista dominante.

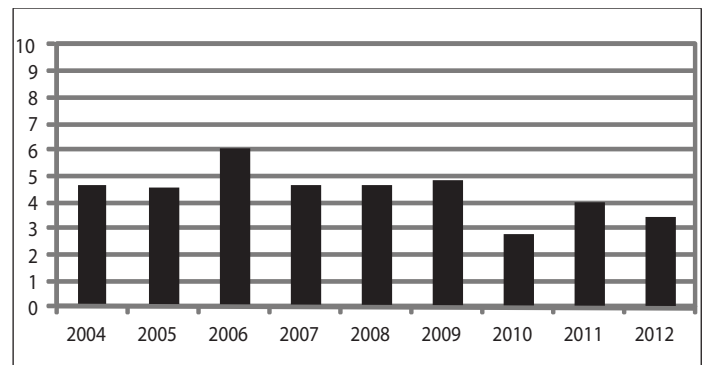
El anuncio del presidente Leonel Fernández de que dispondrá de 40.000 millones de pesos para garantizar el triunfo de su partido, encendió, de nuevo, los temores que el abuso de los recursos del Estado empañe el proceso electoral democrático.

3. En la dimensión *calidad institucional y eficiencia política*, tras la caída importante registrada en 2010 y la posterior recuperación en 2011, República Dominicana vuelve a tener un comportamiento negativo, esta vez del orden del 13%, que implica que el país continúe muy por debajo del promedio de la región y muy lejos todavía del nivel alcanzado en el 2006, año del mejor resultado obtenido durante el período de medición que, en el caso de República Dominicana, se extiende entre 2004 y 2011 (gráfico 3.78). El pobre desempeño del 2012 se debe particularmente a las bajas producidas en los indicadores *índice de percepción de la corrupción* y *accountability*. Las demás variables han mostrado incrementos, aunque no han podido contrarrestar el comportamiento negativo del resto. Por ello, República Dominicana pierde cinco lugares y pasa al 15.º del *ranking* regional.

Durante todo el primer trimestre del 2011, el país fue sometido a un fuerte estrés político-institucional cuando tomó cuerpo el intento de imponer una nueva reelección del presidente Leonel Fernández, a pesar de la prohibición establecida en la Constitución, que él mismo había promulgado un año antes. Parte de los funcionarios del Gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y hasta la primera dama se manifestaron partidarios de otra postulación

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.78



del doctor Fernández, al tiempo que desarrollaban una movilización nacional en procura de dos millones de firmas para avalar el proyecto.

Paralelamente se desarrollaban acciones que configuraron un relajamiento institucional, tales como la elección de un secretario general *provisional* de la Liga Municipal, la aprobación de la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura sin los dos tercios de votos que mandaba la Constitución y el intento de desconocer el límite de los 75 años para la elección de los miembros del nuevo Tribunal Constitucional.

Resultó fallida la declaración por decreto del Poder Ejecutivo como Año de la Transparencia y la Institucionalidad, pues aunque se registraron algunos avances como parte del proyecto de Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), la impunidad frente a las denuncias de corrupción y el continuo involucramiento del personal de los organismos de seguridad en el incremento del narcotráfico y la delincuencia elevaron la inseguridad y sembraron el desaliento en la sociedad.

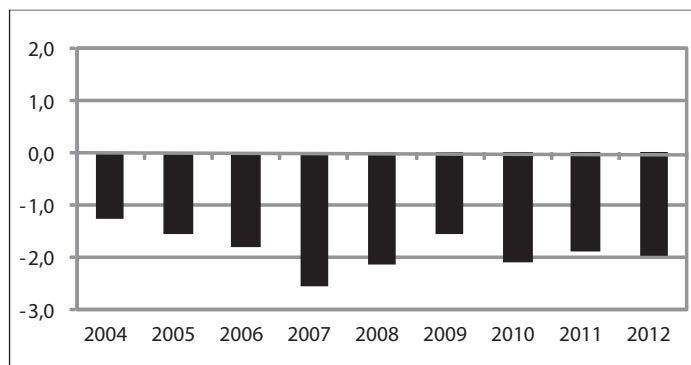
Uno de los hechos más positivos del año fue la participación de importantes estamentos del Estado, junto con catorce organizaciones de la sociedad civil y una docena

Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- *Accountability*
- Desestabilización de la democracia

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.79



Debilidades

- Eficiencia educativa y en salud
- Población bajo la línea de la pobreza
- Desempleo

de organismos internacionales, en acciones de reducción de la corrupción, que incluyeron la elaboración de un proyecto de reforma a la Ley de Libre Acceso a la Información que estaba en manos del Poder Ejecutivo, y lo mismo con la ley del nuevo Tribunal Constitucional, pero esto fue posteriormente rectificado tras una intensa presión de la opinión pública.

El 2011 concluyó sin que el Congreso Nacional pudiera aprobar el proyecto de ley de partidos sometido a su consideración a mediados del año por la Junta Central Electoral. Tampoco se aprobó el proyecto de ley orgánica del régimen electoral, elaborado por una misión de la Organización de Estados Americanos, aunque este último llegó al Congreso en diciembre.

El presidente Fernández haría una gran contribución a la democracia dominicana si aprobara la Estrategia Nacional de Desarrollo, que lleva tres años de procesamiento, y auspiciara la aprobación de la ley de partidos políticos y las reformas pendientes a la ley electoral. Para todo ello es imprescindible un clima de entendimiento y concertación de todo el sistema político partidario.

Por encima de las profundas insatisfacciones expresadas en las encuestas y recogidas por los medios de comunicación,

especialmente a causa del desempleo, la elevación del costo de la vida, la corrupción generalizada y el incremento del narcotráfico y la inseguridad, la sociedad dominicana protagonizó intensas luchas que incluyeron marchas, protestas y un paro casi general de actividades. Grupos populares realizaron el 11 de julio una huelga general, que dejó tres muertos, en reclamo de la reducción de los precios de los alimentos, medicinas, combustibles y factura eléctrica y el fin de la corrupción administrativa, que calificaban de *espantosa*. El Gobierno respondió que era *prácticamente imposible* acceder a las demandas de estos grupos, que amenazaban con acciones similares para los siguientes meses.

Lo más relevante del año fue la amplia movilización social en reclamo del cumplimiento del mandato legal y constitucional de destinar el 4% del producto interno bruto a la educación.

La Coalición por la Independencia de la Justicia concertó también a numerosas entidades de diversos estamentos sociales en los reclamos para que los jueces de la Suprema Corte y de los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral se eligieran en función de la integridad y la capacidad y no por simple conveniencia política.

La movilización más importante del año, en cuanto a caudal de manifestantes, fue la que logró en el primer trimestre del 2011 hacer respetar la Constitución reivindicando el carácter de las leyes orgánicas y poniendo freno a los intentos continuistas que amenazaron hasta la integridad del partido de gobierno y sobre todo la institucionalidad democrática nacional. El empresariado, las Iglesias, las instituciones que luchan por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento institucional, así como gran parte de los

medios de comunicación constituyeron un sólido valladar social.

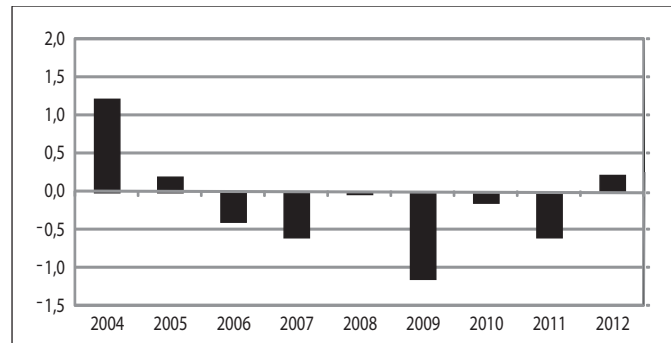
4. En la dimensión IV, que mide el *poder efectivo para gobernar*, en la subdimensión *social*, se produjo un nuevo descenso, del orden del 5%, tras la caída del año anterior (gráfico 3.79). Este resultado es producto de los peores puntajes obtenidos en los indicadores *gasto en salud, población bajo la línea de la pobreza, desempleo y matriculación secundaria*. La única variable que tuvo un comportamiento positivo fue la que mide la *mortalidad infantil*. República Dominicana continúa ocupando el último lugar del *ranking* regional en esta subdimensión y se resalta que el retraso de vastos sectores de su población es su principal traba para el desarrollo democrático.

Algunos logros que pueden mencionarse son, además de la estabilidad, la puesta en marcha del sistema de la seguridad social en salud, los esfuerzos meritorios por contener algunas epidemias y algunos avances legales relevantes como el nuevo marco institucional del ejercicio fiscal (la Ley de Presupuesto y la de crédito público), la Ley de Competitividad y la Ley de Administración Pública. Las mayores sombras se registran en la escasa inversión en educación, salud y real combate a la pobreza, corrupción sin límites, malversación y boato, inseguridad derivada de todo género de delincuencia, especialmente del narcotráfico, fracaso en superar la crisis energética, fomento del clientelismo como fundamento de la política y desprecio por los reclamos de la comunidad y la opinión pública.

Hay unanimidad en que el mayor éxito de la gestión de Fernández ha sido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, aunque no se ha traducido en empleo de calidad ni en reducción de la pobreza, sino más bien en mantenimiento de esta con programas

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.80



asistencialistas que no inciden en desarrollo humano.

Cabe apuntar que a pesar de la lucha de amplios sectores populares por un mayor presupuesto para el área educativa, el año terminó con apenas un 2,5% del producto para tal función, y en el presupuesto para el año 2012 se consignó menos de un 3%.

5. El país avanzó fuertemente en la subdimensión *económica* con respecto al año anterior (gráfico 3.80). Este incremento es producto del mejor comportamiento de los indicadores que miden *brecha de ingreso e inversión*. El resto de las variables que forman esta subdimensión han sufrido un retroceso. Su puntaje final logra superar el promedio de la región y provoca una suba en el *ranking* regional, del 13.º al octavo lugar.

La economía de República Dominicana creció 4,5% en 2011. Se destacan el aumento de la inversión extranjera y el sorprendente crecimiento del sector exportaciones. El crecimiento es de poca sostenibilidad, ya que se funda en un enorme endeudamiento, cercano al 40% del producto interno bruto. Esto, a pesar de haber disfrutado de uno de los períodos de más alto crecimiento económico en la historia reciente del país, luego de la debacle de 2003-2004, y de un escenario

Debilidades

- PIB per cápita
- Endeudamiento
- Inversión

externo muy favorable durante la mayor parte del tiempo. El presupuesto de 2010 se sustentó en financiamiento externo e interno por 121.700 millones de pesos, y el de 2011, por 97.200 millones de pesos.

En el 2011 por primera vez hubo que dedicar más del 50% del monto de los ingresos fiscales al servicio de la deuda. El acuerdo con el FMI ha quedado frizado. El Gobierno no ha pasado con éxito ninguna de las evaluaciones trimestrales desde su firma en el 2009, y desde septiembre del 2011 no ha podido presentar una nueva carta de intención para reanudarlos, mientras adelantaba venta de bonos por 250 millones de dólares con cargo al presupuesto de 2012 de por sí

sobrevaluado, convertía en deuda una línea de crédito de 210 millones de dólares en el Banco de Reservas y elevaba sobre esa cifra su deuda con los generadores eléctricos.

El Congreso nacional fue un simple sello del Poder Ejecutivo para la aprobación de préstamos por más de 97.000 millones de pesos, y la espectacular y precipitada sanción del Presupuesto 2012 para acallar los reclamos nacionales de que se cumplieran las leyes. Hubo varias violaciones a la Ley General de Presupuesto y se llegó a la segunda mitad de diciembre poniendo parches legislativos sobre una pobre ejecución presupuestaria y para cubrir parte de un alto déficit fiscal, a pesar de que a mitad del año hubo una reforma tributaria.

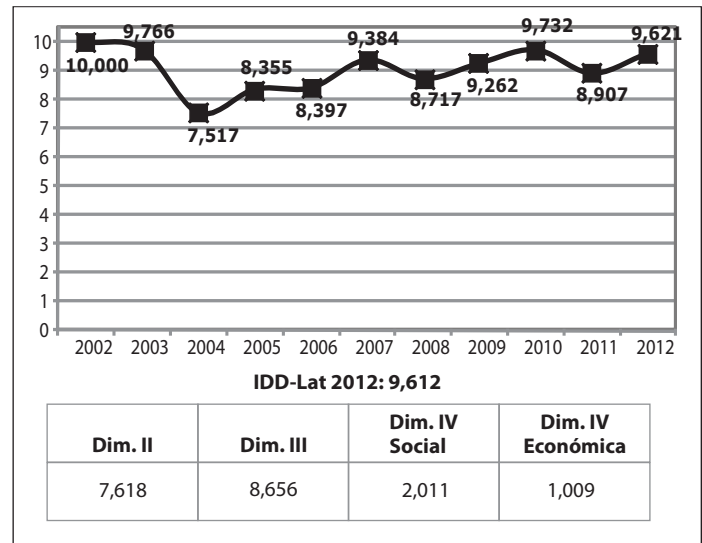
URUGUAY

1. Uruguay es uno de los países de la región que presenta un avance en su IDD-Lat con respecto al 2011 (gráfico 3.81). Se recupera de la caída sufrida el año anterior y avanza en la misma magnitud, casi un 8%, con lo cual alcanza el valor que había obtenido en el 2010. A pesar de ello, se posiciona en el tercer lugar en el *ranking*, detrás de Chile y Costa Rica, descendiendo un lugar respecto al 2011. Desde que se calcula el índice de desarrollo democrático, Uruguay siempre se ha ubicado en alguno de los tres primeros lugares, en lo alto del ordenamiento regional. El ascenso en la puntuación final del índice de este año es producto de los incrementos de las puntuaciones en las dimensiones *respeto de los derechos políticos y libertades civiles* y *calidad institucional y eficiencia política*, que logran compensar la leve caída de las dos subdimensiones que componen la dimensión *ejercicio de poder efectivo para gobernar*.

En el contexto latinoamericano, Uruguay se caracteriza por una notable estabilidad política y económica. En el orden político este buen desempeño se debe a una política interior y exterior sensata, que se ha mantenido en el tiempo a pesar de las alternancias en la responsabilidad política. En lo económico, Uruguay nunca fue un patio de juegos para aventuras de orden macroeconómico o político como sí ocurrió en los grandes países vecinos. El fútbol y la economía comparten hoy en Uruguay una cosa: los años de la tristeza parecen haber quedado atrás: la selección uruguaya se ganó el respeto internacional con un atractivo juego ofensivo durante el Mundial 2010 y resultó vencedora de la Copa América 2011 (además de marcar un triunfo contra su archirrival Argentina),

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Uruguay

Gráfico 3.81



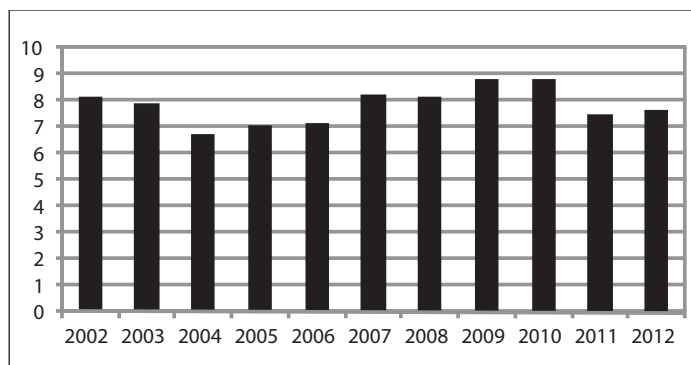
desencadenando una verdadera euforia nacional. La situación económica responde a una realidad similar.

Para los opositores, la gestión del presidente José Mujica durante 2011 fue difusa, enredada y contradictoria. Hubo temas clave en este período que fueron fundamentales, como la educación y la seguridad, que no encontraron salida por más que todos los partidos estaban de acuerdo en buscar soluciones. Lo mismo sucedió con el impuesto al agro, que generó un intenso debate dentro del mismo partido de gobierno, el Frente Amplio, sin lograr consenso. El 2010, primer año de presidencia de Mujica, comenzó profundizando los cambios, aunque se fue disgregando la forma de gestión y gobierno. Hoy la población tiene una percepción de la gestión de Mujica como de continuas idas y venidas.

El aspecto positivo en el segundo año de gestión es que continúa el crecimiento de la economía. Sigue habiendo un talante dialoguista del presidente. También los datos sobre la reducción de la pobreza son positivos.

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.82



Se logró un gran acuerdo en materia de minería, tema difícil y complejo, entre los cuatro partidos con representación parlamentaria.

2. El valor obtenido en la dimensión II, *respeto de los derechos políticos y civiles*, presenta un incremento alrededor de un 2%, como consecuencia del mejor puntaje en el indicador de *inseguridad*, que logró compensar la caída de la variable de *género* (gráfico 3.82). El resto de los indicadores se mantuvo estable. Ocupa el tercer lugar del *ranking*, manteniendo la misma ubicación que el año anterior. El valor de la dimensión II está muy por encima del promedio regional.

En el tema seguridad el Gobierno implementó buena parte de las medidas emanadas del acuerdo multipartidario, le dio prioridad presupuestal al combate a la inseguridad y fue condescendiente con el Partido Nacional para instalar una comisión bicameral a fin de abordar los temas relativos a la denominada *minoridad infractora*, de la cual resultó un conjunto de propuestas que incluían la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, el mantenimiento de los antecedentes a los menores en caso de infracciones gravísimas y la penalización de la tentativa de hurto, entre otros.

No obstante, la oposición marcó su propia agenda y, tras el seguimiento mediático de la

crónica roja y un creciente desasosiego de la población, el grueso de los partidos tradicionales se embarcó en una campaña para plebiscitar la baja de la edad de imputabilidad. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, mano derecha del presidente Mujica, llevaba adelante una política de mano dura. Los megaoperativos policiales realizados, hace años atrás hubieran sido considerados *razzias* por la izquierda.

El posicionamiento del Gobierno en este tema responde a las demandas de la opinión pública y a la existencia de competidores políticos contundentes y activos, como Vamos Uruguay y el Herrerismo, que promueven la baja de la edad de imputabilidad.

Temas candentes también fueron los del sistema penitenciario y cuestiones referidas a las estructuras políticas y las atribuciones de los alcaldes recién electos, incluida su relación con los intendentes departamentales.

Durante varios años la principal fuente de preocupación de los uruguayos fue el desempleo. A partir del 2008, las encuestas revelan que la delincuencia y la criminalidad son los temas que generan más preocupación y de una manera homogénea en la sociedad. Una de las manifestaciones recientes de esa preocupación social fueron las movilizaciones ciudadanas a través de las marchas por la seguridad, en general convocadas por las redes sociales. Se destaca la creación en abril del 2010 de un grupo de Facebook llamado Uruguay Seguro.

Según datos oficiales, en 2011 los delitos contra la propiedad sumaron 138.589, frente a los 136.063 de 2010 y los 132.830 de 2009. Además, aunque en 2011 hubo menos homicidios (286) que en los dos años precedentes (310 en 2010 y 346 en 2009), la virulencia de los crímenes ha aumentado la alarma de muchos ciudadanos. Según un estudio de la consultora Cifra, el 53% de los ciudadanos

Fortalezas

- Voto de adhesión política
- Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos

Debilidades

- Inseguridad
- Género en el Gobierno

considera la inseguridad como el principal problema del país, seguido de la educación, con el 13%.

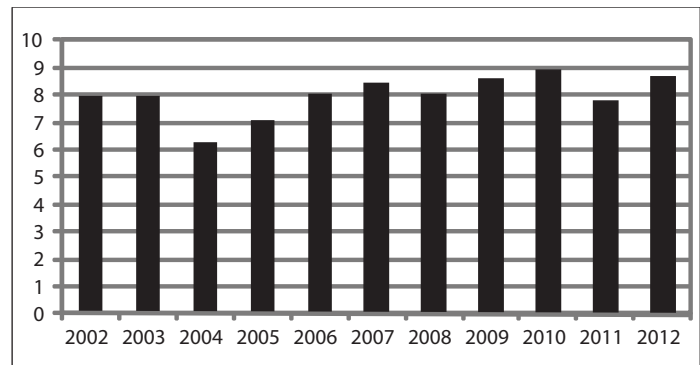
Hacia fin de año se celebró la interna del Frente Amplio, con una convocatoria a elecciones a padrón abierto, que hacía demasiado tiempo que no se celebraban, que incorporó la elección de presidente y vice-presidentes de la coalición.

3. La dimensión III, que mide la *calidad institucional y la eficiencia política*, tuvo también un comportamiento positivo (gráfico 3.83), y su avance fue del orden del 12%. Se ubica en el segundo lugar del *ranking* regional, ganando un lugar con respecto al año anterior. El avance en la *democracia de las instituciones* es producto de mejores resultados en los indicadores de *percepción de la corrupción*, de *participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo* y de *accountability*. La variable *desestabilización de la democracia* mostró un descenso con respecto a la puntuación recibida el año anterior.

2011 fue el año de la conmemoración del bicentenario del proceso de emancipación del Uruguay. Pero también fue el de las grandes polémicas, entre ellas las referidas a la Ley de Caducidad, la propuesta de aumentar los tributos a las grandes extensiones agropecuarias y el impulso de la Ley de Participación Público Privada. El Ejecutivo comunicó a la Suprema Corte de Justicia que a través de una resolución se revocaban por razones de *legitimidad* todos los actos administrativos que los gobiernos de los partidos tradicionales incluyeron en la Ley de Caducidad. Asimismo, el equipo de antropólogos de la Universidad de la República dio con los restos del maestro y periodista Julio Castro, desaparecido en plena dictadura militar.

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.83



Las desavenencias entre el presidente y su fuerza política, que se notaron con mayor claridad en la discusión parlamentaria para anular la Ley de Caducidad en mayo, marcaron el punto más bajo de la popularidad del mandatario, cuando llegó al 42%. Pero luego, hechos como el logro en diciembre de una patente nacional de automotores única y los acuerdos en educación le devolvieron la aprobación perdida.

El gobierno de Mujica impulsó activamente la construcción de un gobierno de unidad nacional, aun sin tener necesidad de hacerlo puesto que posee mayoría parlamentaria propia; se aplicó un criterio de estricta proporcionalidad electoral hacia adentro del Frente Amplio y hacia afuera; y la oposición sumó su participación no solo porque, acostumbrada a estar siempre en el gobierno, decidió que era mejor hacer oposición desde adentro, sino porque pudo volver a hacer política en la forma en que siempre lo hizo: a través de la distribución de cargos.

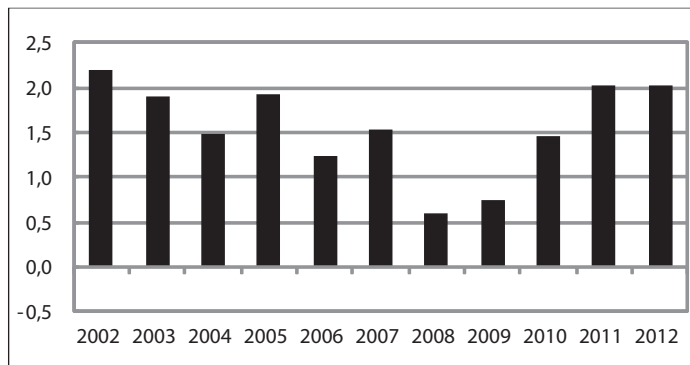
El gobierno exhibió problemas internos difíciles de disimular. Empezó y cerró el año con un debate interno sobre materia tributaria. A comienzos de 2011 el debate se daba sobre la forma en que se iba a rebajar el IVA y ahí se vieron diferencias entre el ministerio de Economía y sectores del Frente Amplio. Luego vino el conflicto por el impuesto al

Fortalezas

- Estabilidad democrática

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.84



Fortalezas

- Mortalidad infantil

Debilidades

- Eficiencia educativa
- Población bajo la línea de la pobreza

agro. Fue el año de la crisis de la educación. Los principales desafíos en política interior siguen siendo la seguridad interior, la educación, la reforma del Estado y la seguridad energética. El presidente Mujica calificó la educación como *vacuna contra la pobreza*. Una tasa de desempleo de alrededor del 20% entre los jóvenes de 18 a 24 años (frente a una desocupación general de apenas 6%) pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas para que la buena situación económica general se traduzca en una sensible mejora de la situación social, en particular entre la población más joven.

El índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, ubica en América Latina a Chile como el país con menos percepción de corrupción, seguido de Uruguay. Ningún otro país de la región está por encima de la calificación media (5 puntos). Uruguay mejoró su calificación de 6,9 a 7 (en una escala donde 10 es el ideal de transparencia); sin embargo, pasó del lugar 24 al lugar 25 en el *ranking* mundial.

4. Los avances de las dimensiones II y III compensaron el peor desempeño de la dimensión IV, que mide el *poder efectivo para gobernar* de la democracia uruguaya. En efecto, el valor del subíndice *social* alcanza una leve

diferencia negativa respecto del año anterior (gráfico 3.84), y esto coloca a Uruguay en la tercera ubicación del *ranking* regional, perdiendo dos lugares con respecto al 2011. Aún su puntuación sigue estando muy por encima del promedio regional. Las variables que motorizan el descenso de la puntuación de la subdimensión son las que corresponden al *gasto en salud, desempleo y matriculación secundaria*. El indicador que muestra un fuerte avance es el de *mortalidad infantil*. El resto de las variables se mantiene estable.

Estas cifras están en línea con la posición que ocupa el país en el *índice de clima económico en América Latina*, elaborado anualmente por el Instituto Alemán de Investigación Económica IFO de Múnich en asociación con la consultora brasileña Fundación Getulio Vargas. En 2011, Uruguay encabezó por primera vez el *ranking* de países latinoamericanos, superando a Chile y Colombia.

El presidente José Mujica se había comprometido al asumir en marzo de 2010 a llevar la pobreza a un 10% y eliminar la indigencia para el fin de su gestión en 2015. En 2011 continuaron mejorando los indicadores sociales. La tasa de desempleo disminuyó, en diciembre de 2011, a un 5,3% de la población económicamente activa. La pobreza descendió de 18,6% a 14% en 2011, o sea que 149.086 personas que dejaron de ser pobres. La indigencia bajó de 1,4% a 0,9%, y se registró una significativa disminución en los índices de desigualdad.

A la vez, según un informe del Observatorio del Mercado de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con datos del Instituto Nacional de Estadística, el incremento del salario nominal acumulado a diciembre de 2011 fue de 14,1% en el sector privado y 10,9% en el público.

Con respecto al tema de la educación, si bien hubo distintas reacciones en el seno de

la oposición, el destino de los acuerdos nacionales no fue muy distinto. A pesar de que el oficialismo y la oposición acordaron en el Senado llegar a un nuevo plan para abordar la *problemática educativa*, y aun cuando el Gobierno “cedió” dándole la delantera al programa Promejora impulsado por el representante del Partido Nacional en el Consejo Directivo Central de la educación (un proyecto cuyas grandes líneas ya estaban contenidas en los planes originarios de Enseñanza Secundaria, pero que operó como un *reconocimiento* a los aportes de la oposición), comprándose así un gran conflicto con los sindicatos, una vez conocido el plan elaborado la evaluación que hicieron los partidos tradicionales fue negativa.

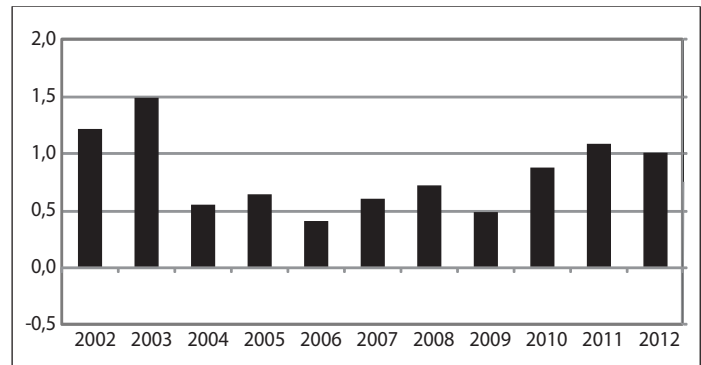
5. La subdimensión *económica* de la dimensión IV bajó en más del 6% (gráfico 3.85), retrocediendo un lugar del *ranking* regional, detrás de México, Chile y Perú. Esto se debe al peor comportamiento de los indicadores *libertad económica*, *PIB per cápita* e *inversión*. Solo mejoró la variable de *endeudamiento*, y se mantuvo estable la variable de *brecha de ingreso*.

El mayor logro de Mujica ha sido, en primer lugar, en medio de la peor crisis económica internacional, que el país haya seguido creciendo, obteniendo excelentes resultados económicos y sociales. Ejemplo de ello es un crecimiento del PIB superior al 6,5%, muy por encima del 3,7% de la región, una baja de la pobreza en cuatro puntos y una mejora en la distribución de la riqueza. Se puede rescatar la búsqueda constante de amplios acuerdos en la educación y la continuidad de la apertura al mundo para el comercio, las inversiones y resolver los desafíos internacionales.

El país exhibe excelentes datos económicos. Entre 2005 y 2010 la economía creció en promedio un 6,5% e incluso en 2009, año en

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.85



que el mundo entró en recesión, Uruguay creció un 2,9%, ubicándose a la cabeza de los países latinoamericanos.

Gracias a la disciplina aplicada tras la crisis de 2002, a los altos precios de las materias primas y al contagio del dulce momento de sus vecinos sudamericanos, Uruguay acumuló un crecimiento del PIB del 14,5% entre 2010 y 2011, y en los últimos meses logró cifras récord de desempleo, de alrededor del 6%. Hacía años que los ciudadanos no consumían tanto, favorecidos por la depreciación del dólar y por las subidas salariales logradas en los convenios colectivos.

En resumen, cuatro cosas destacan de los dos años de gestión del presidente Mujica: en primer lugar, muy buen desempeño de la economía. Sobre esto algunos dicen que se debe al Gobierno y otros que es por efecto de la bonanza que viene del exterior, pero lo cierto es que la economía anda bien. En segundo lugar, hay un crecimiento real de los salarios y de las jubilaciones, del ingreso de los hogares. Hay una baja muy grande del desempleo y, en términos históricos, se da el porcentaje más alto de empleo en proporción a las personas en edad de trabajar. Y por último hay un gran aumento de la asistencia social: se asiste a más cantidad de gente con más dinero.

Fortalezas

- Libertad económica
- Endeudamiento

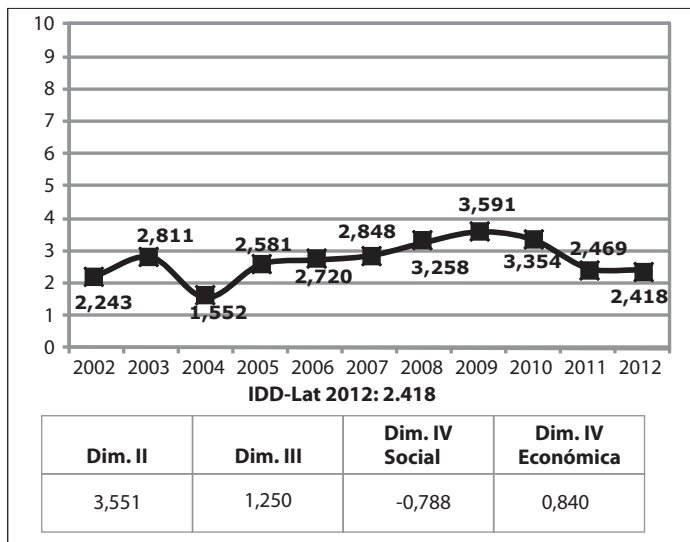
Debilidades

- Brecha de ingreso

VENEZUELA

Evolución del IDD-Lat 2002-2012 en Venezuela

Gráfico 3.86



1. Venezuela volvió a caer en el IDD-Lat, confirmando una tendencia vigente desde el 2010, luego de haber presentado una mejora desde el año 2007 hasta el 2010. El país no logró superar en toda la serie los 4,000 puntos y este año cae por debajo de los 3,000 puntos (gráfico 3.86). En las únicas dimensiones que Venezuela presenta un leve incremento es en *respeto de los derechos políticos y libertades civiles y calidad institucional y eficiencia política*. La tendencia negativa responde a peores resultados en la dimensión IV, la de *poder efectivo para gobernar*, en ambas subdimensiones. Continúa perteneciendo al grupo de países con mínimo desarrollo democrático. Por este descenso, Venezuela se ubica en el último lugar de la tabla, perdiendo dos lugares con respecto a la posición del 2011.

Hugo Chávez Frías va por su tercer período consecutivo de gobierno y en 2011 comenzó su campaña no oficial para ser reelecto en 2012. La sociedad venezolana se dividía entre una fuerte oposición que piensa que el

Gobierno se define como una dictadura y un régimen populista, contrapuesto con los seguidores del mandatario, que lo consideran democrático y participativo. El gobierno amplió considerablemente la cantidad de programas de carácter social, aunque poco eficaces, por vía de un fuerte aumento en el endeudamiento del Estado. Sin embargo, el gasto social ya no llegaba al volumen de los años de oro del chavismo (2004-2008), cuando el precio del petróleo superaba holgadamente los cien dólares por barril. La campaña electoral y toda la vida pública se vieron empañadas por la enfermedad del presidente, a quien, en junio de 2011, se le diagnosticó un cáncer. La enfermedad de Chávez despertó una nueva ola de simpatía y un renovado apoyo hacia el líder de la Revolución bolivariana. La propaganda oficial se dedicaba a diario al tema de la salud del primer mandatario, no sin incurrir en cierta exaltación espiritual y evitando publicar un diagnóstico médico. La enfermedad no pudo frenar la verborragia del líder, potenciada mediáticamente. Sus intervenciones fluctuaban entre la reflexión, el tono conciliador y las invectivas clasistas llenas de odio.

La oposición objetaba la gestión que cumplía Chávez en materia de seguridad, economía, vivienda y salud, y decía que era lamentable que el mandatario siguiera desconociendo los problemas de la gente por estar ocupado en perpetuarse en el poder. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) señalaba que la corrupción, la falta de elementos científicos, técnicos y operativos para enfrentar el fenómeno de la criminalidad, la politización de las instituciones y la asignación insuficiente de recursos habían agravado la inseguridad personal, que es considerada por los venezolanos como el mayor problema de su país.

2. En la dimensión *respeto de los derechos políticos y las libertades civiles*, el valor es nuevamente más alto que el del año anterior en más del 3%, por el mejor comportamiento que tuvo el indicador de *género* (gráfico 3.87). La incidencia positiva de ese indicador compensó el descenso registrado en el de *condicionamiento de las libertades civiles por inseguridad*. El resto de los indicadores se mantuvo estable, fundamentalmente en lo que se refiere a los *índices de respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos*, cuyas puntuaciones son las recibidas desde el 2002 en pobres valores que le asignan el 16.º lugar del *ranking* regional, igual calificación que en 2011.

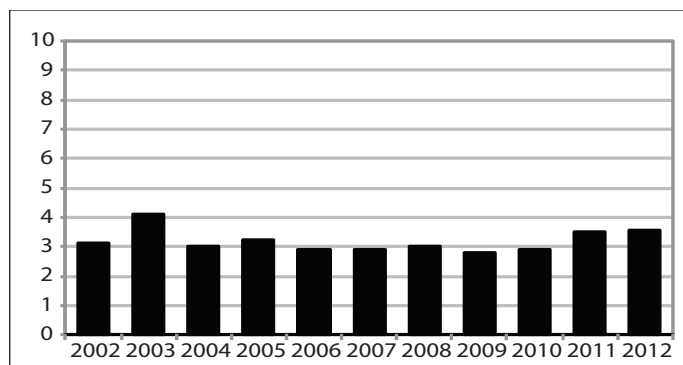
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), constituida en 2009, en el marco del proyecto nacional, continuó estabilizándose en el 2011 y convocó a internas abiertas para el 12 de febrero de 2012 para definir el candidato presidencial de la Unidad en las elecciones presidenciales y los candidatos para los comicios regionales y municipales. En las internas para las presidenciales se perfilaba una polarización entre los gobernadores Pablo Pérez (Zulia, Un Nuevo Tiempo, socialdemócrata) y Henrique Capriles Radonski (Miranda, Primero Justicia, demócrata cristiano).

Las elecciones de alcaldes fueron postergadas para el 14 de abril de 2013. En la antesala a las elecciones presidenciales, las encuestas indicaban una carrera muy reñida entre el presidente Hugo Chávez y el candidato de la Unidad, pese a que este aún no estaba nominado. Las mismas encuestas le atribuían al primer mandatario las mejores chances para vencer a Henrique Capriles Radonski.

La alta delincuencia y galopante inflación eran consideradas por la oposición como las

Evolución de la dimensión II

Gráfico 3.87



mayores debilidades del gobierno de Chávez, quien empero mantenía su popularidad sobre el 50%, según estimaciones de las principales encuestas locales. De acuerdo con cifras de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), durante el 2011 fueron asesinadas 19.336 personas, lo que representó un aumento del 10% respecto al año anterior, cuando se registraron 17.600 homicidios. Entre 1998 y el 2010 la tasa de homicidios casi se triplicó, al pasar de 19 a 57 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que convierte a Venezuela en uno de los países más violentos de la región. El ministro de Relaciones Interiores, Tareck El Aissami, dijo que para el gobierno era difícil “romper ese piso duro de 48 muertes por cada 100.000 habitantes” (dato 2011), pero reconoció que se bajó “significativamente esa curva en estos últimos años”, sin precisar cifras.

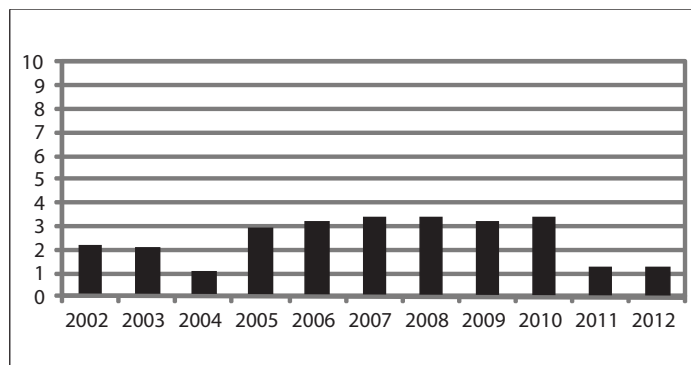
3. La dimensión *calidad institucional y eficiencia política* tiene un comportamiento levemente positivo (gráfico 3.88), porque mejora el indicador que mide la *participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo*, que, a su vez, compensa los descensos observados en las variables *percepción de la corrupción y desestabilización de la democracia*. El

Debilidades

- Respeto de las libertades civiles y de los derechos políticos
- Inseguridad

Evolución de la dimensión III

Gráfico 3.88



Debilidades

- Índice de percepción de la corrupción
- Participación de los partidos políticos en el Poder Legislativo
- *Accountability*
- Desestabilización de la democracia

resto de los indicadores se mantiene estable, en los niveles críticos que viene mostrando el país desde el inicio de la medición del IDD-Lat. Se ubica en el último lugar de la tabla, manteniendo la posición que ya tenía en el 2011, a pesar del leve incremento producido este año.

La división de poderes establecida en la Constitución fue eliminada. La autoridad electoral, teóricamente independiente, es conducida por revolucionarios declarados que no sancionan las evidentes violaciones a la ley en las que incurre el jefe de Estado en su campaña electoral, en particular el uso abusivo de los fondos públicos y de instituciones como los medios de comunicación públicos. Estimaciones de observadores independientes indican que entre un uno y un tres por ciento de los votos se genera mediante fraude electoral (voto múltiple, votación asistida, obstrucción del acceso a los centros electorales, entrega del voto con documentación de votantes impedidos, etc.). Por eso será decisiva, en las próximas elecciones presidenciales, la lucha contra el fraude electoral mediante una densa red de testigos electorales en todo el territorio nacional y en las más de 30.000 máquinas de votación. La autoridad electoral abre a un ritmo acelerado nuevos centros electorales, situados muchas veces

en lugares muy apartados, con la evidente intención de dificultar el envío de testigos por la oposición. En los 5.000 centros electorales más pequeños, en los que en las elecciones de septiembre de 2010 solo se colocó una máquina de votación, la falta de testigos llevó a una fuerte distorsión del resultado en favor del Gobierno.

La oposición ratificó, en octubre de 2011, su compromiso de enfrentar unida y en bloque al mandatario Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 2012, a las que llevará un candidato único que, en caso de victoria, defenderá un programa común de gobierno, que saldrá de las primarias del 12 de febrero de 2012. Para la oposición, que en las anteriores legislativas de 2005 se marginó del proceso y dio al oficialismo la mayoría absoluta del Parlamento, no fue fácil unirse en torno a candidatos y objetivos comunes frente a Chávez. La oposición ya había logrado acuerdos para acudir en bloque a anteriores comicios presidenciales, pero esta será la primera vez que elegirá a su candidato común en un proceso de primarias abierto a todos los ciudadanos.

Los firmantes también se comprometen a cumplir un programa de gobierno común en caso de ganar las presidenciales. Los principales partidos políticos de la oposición, entre los que se encuentran Acción Democrática, Copei, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, se comprometieron a promover la descentralización, fortalecer la seguridad ciudadana, impulsar la reactivación de la economía y despolitizar las instituciones públicas.

La corrupción es otro *mal* señalado por los críticos de Chávez. *Boliburguesía* es el término que algunos han acuñado para algunos miembros del partido del Gobierno que han mejorado su calidad de vida. Esto a pesar de que el mismo presidente ha dicho que “ser

rico es malo". Según el *índice de corrupción* de Transparencia Internacional 2011, Venezuela es el país más corrupto de Latinoamérica y está entre los diez peores del mundo. En este indicador Venezuela obtuvo un puntaje de 1,9 superando al resto de países de América Latina y a escasas décimas de los diez más corruptos a nivel mundial.

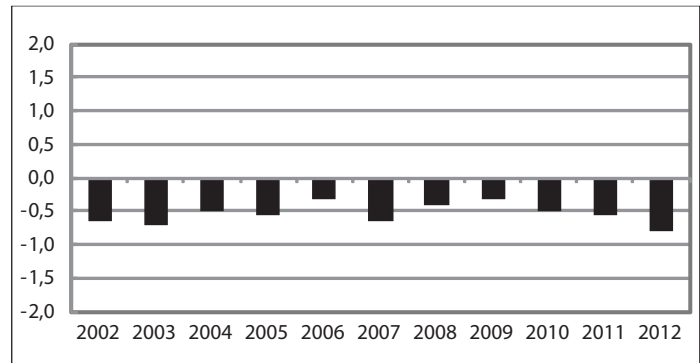
4. La dimensión IV, *poder efectivo para gobernar*, presenta un escenario poco favorable para el desarrollo democrático venezolano. En efecto, el subíndice *social* presenta un desempeño más bajo con respecto al año anterior (gráfico 3.89), debido a la peor puntuación obtenida en los indicadores que miden *desempleo* y *población bajo la línea de la pobreza*. El resto de los indicadores se mantuvo estable y eso no ayudó a producir una tendencia positiva en esta subdimensión. Las únicas variables que muestran un signo positivo han sido *matriculación secundaria* y *mortalidad infantil*. En el *ranking* regional, el país alcanza el 12.º lugar, subiendo un lugar con respecto al 2011, a pesar del descenso sufrido en su puntuación final. Continúa por debajo del promedio regional.

Para muchos adeptos de Chávez, un logro de la Revolución bolivariana es la misión Barrio Adentro, como una red de servicios médicos que llegó a rincones, desde barrios a caseríos, donde no había siquiera servicio ambulatorio. La inversión insuficiente y la corrupción en el sector mantienen en situación crítica tanto a los ambulatorios de Barrio Adentro como a los regulares y a los hospitales.

La economía sigue pegada al petróleo. Los ingentes ingresos que obtuvo el Gobierno por la vía de las exportaciones petroleras le permitieron incrementar el gasto

Dimensión IV. Subdimensión social

Gráfico 3.89



público en más de 40% en el 2010 e impulsar la activación de la economía.

Aunque según la CEPAL, Venezuela es el segundo país de América Latina donde más se ha reducido la pobreza en los últimos años, todavía la cantidad de pobres sigue siendo importante y aún hay mucho camino por recorrer. Según los datos de la CEPAL, la pobreza llegó a 70,8% de la población en 1996; para el año 2010 disminuyó al 26,8%. Mientras que en el año 1999 la población en situación de pobreza afectaba, según la CEPAL, al 49,4% de los venezolanos, y la indigencia al 21,7%, tras una década de gobierno del presidente Chávez estas cifras se vieron drásticamente reducidas: en 2010 la pobreza afectaba al 27,8% de la población y la indigencia al 10,7%. Es decir, que en los últimos diez años se redujo la pobreza en Venezuela cerca de 50% y la indigencia en un 51%. Mientras que en 1999 Venezuela ocupaba en el *ranking* el noveno lugar de país menos pobre, hoy se sitúa en la cuarta posición y es el que más puestos ha avanzado en la lucha contra la pobreza.

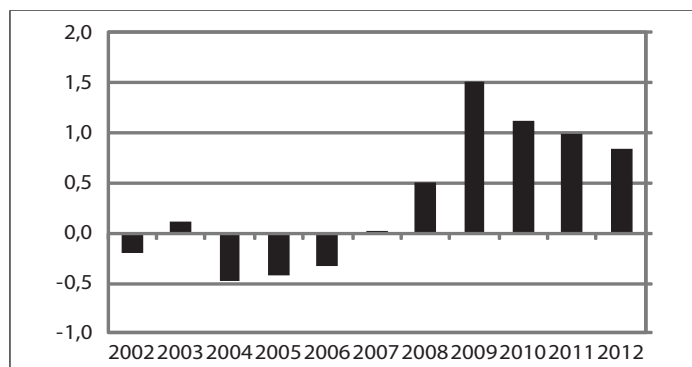
La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, declaraba a finales del año 2010: "Venezuela ha disminuido la desigualdad un 18% y es el país que más la ha disminuido. Nosotros pensamos que esto es un reflejo

Debilidades

- Desempleo
- Población bajo la línea de la pobreza
- Eficiencia en salud
- Eficiencia en educación

Dimensión IV. Subdimensión económica

Gráfico 3.90



Debilidades

- Índice de libertad económica
- Endeudamiento
- Inversión

pleno de un compromiso político de atender la pobreza extrema y de realmente poner en marcha programas de carácter social como las misiones en general, que están realmente impactando en la pobreza dura, a la productividad, a la educación, a la salud, que son realmente los eslabones que llevan a una pobreza intergeneracional que Venezuela ha logrado romper”.

Según cifras oficiales, con las viviendas construidas en el 2011, por primera vez en la historia nacional, se iba a llegar a la cifra de 140.550, marcando el cumplimiento en un 92% de la meta fijada. En 2011 se inyectaron 52.000 millones de bolívares al sector y para 2012 la meta es de 200.000 viviendas y una inversión cercana a los 60.000 millones de bolívares. Sobre la fuente de financiamiento para ejecutar los urbanismos del nuevo año, el primer mandatario expuso que en parte provendrá del Fondo Chino, mecanismo de crédito que será renovado en febrero con un nuevo tramo de \$ 4000 millones. Desde 2007 —cuando se creó— el esquema ha manejado \$ 12.000 millones.

Para el presidente Chávez, la Misión Vivienda ha permitido aumentar el nivel de vida de la población. Advirtió que las soluciones habitacionales de la IV República “no tenían agua potable ni electricidad y parecían

una prisión”. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, insistió en que la meta era irrealizable y prefirió ampararse en las cifras del Banco Central de Venezuela, que indican que hasta el tercer trimestre del 2011 se terminaron 82.405 unidades.

5. El país tampoco logró mejores resultados en la subdimensión *capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica* respecto de la medición anterior (gráfico 3.90), aunque es el área del desarrollo democrático en la que mejores resultados obtuvo, al mantenerse por encima del promedio regional. La caída se explica por los peores desempeños registrados en los indicadores *PIB per cápita e inversión*. Mejoran las variables de *libertad económica, brecha de ingreso y endeudamiento*, aunque sus avances no logran compensar los descensos mencionados anteriormente. Por esas bajas registradas, Venezuela ocupa el quinto lugar, perdiendo un lugar con respecto a su ubicación en el *ranking* regional de 2011.

A pesar de tener desde hace casi nueve años un control de precios y de cambio, Venezuela concluyó el 2011 con una inflación del 27,6%, la segunda mayor del mundo, superada solo por Etiopía, y la más alta de la región. El acelerado crecimiento de los precios empañó los resultados del crecimiento económico de Venezuela. El producto interno bruto (PIB) creció un 4% durante el 2011.

Hugo Chávez destacó que al cierre de 2011 el país culminaba con un balance positivo, especialmente en materia económica: “nuestro PIB termina este año cerca de 300.000 millones de dólares. En apenas una década Venezuela más que triplicó el PIB”, indicó. Este crecimiento significó la

recuperación de la caída de 2010 (-1,5%), en el que la economía venezolana se vio golpeada por la crisis en Estados Unidos y Europa.

El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, ratificó que la economía venezolana creció 4% en 2011, el doble de la meta presupuestada. Destacó que este resultado estuvo determinado por el crecimiento del sector no petrolero, que alcanzó a 4,3%, y el ascenso del sector petrolero, con 0,6%. Explicó que este desempeño de la economía revela la reactivación de los distintos sectores productivos y permite prever que este crecimiento se mantendrá para 2012.

La expansión de 5,1% y 3,8% que registraron los sectores privado y público en el cuarto trimestre se convirtieron en el gran motor de la economía. Asimismo, el sector petrolero creció 1,8%, mientras que el sector no petrolero tuvo una aceleración de 5,1%.

Después de los 45.000 millones de bolívares extra (10.465 millones de dólares) aprobados en el 2011 para atender la crisis habitacional, impulsar la agricultura, promover el empleo y pagar intereses de deuda, entre otras cosas, casi se duplicó la capacidad aprobada inicialmente para ese periodo, hasta 22.000 millones de dólares.

En cuanto a las cifras del desempleo, la CEPAL reconoce que sigue disminuyendo paulatinamente, de 8,9% en el año 2010 a 8,3% al finalizar el 2011. Otros datos de interés publicados por la CEPAL muestran que en Venezuela "el Gobierno central registró un déficit algo inferior al de 2010: el déficit global pasó del 3,6% del PIB en 2010 al 3,5% del PIB en 2011, mientras que el déficit primario descendió del 2,2% del PIB en 2010 al 1,4% del PIB en 2011". Por último es importante señalar que la cuenta corriente de la balanza de pagos venezolana en 2011 registró superávit, como ha sido la tónica en años anteriores.